

BOOK CARD

Please keep this card in
book pocket

UDADAHIA-Y-NATURK

ARTICLE TITLE

43 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

[illegible]

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA



ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

JXL216
A66

Ciudadanía

y

Naturalización

POR EL

Doctor HIGINIO ARBO

ABOGADO

Miembro de la Junta Internacional Americana de Jurisconsultos
Ex- Delegado Plenipotenciario del Paraguay a la V. Conferencia Interna-
cional Americana (1923)
Ex- Diputado al Congreso Nacional
Ex- Profesor de Finanzas de la Facultad de Derecho de Asunción
Socio del Instituto Americano de Derecho Internacional
y de L'Institut Intermédiaire International, de La Haya



"EL ATENEO"

LIBRERIA CIENTÍFICA Y LITERARIA
FLORIDA 371

SUCURSALES: CÓRDOBA 2099 (B. A.)
ROSARIO DE SANTA FE 67 (CÓRDOBA)

PEDRO GARCIA

Buenos Aires

1926

JX 42/6
1966

CIUDADANIA Y NATURALIZACION

por el

Doctor HIGINIO ARBO

ABOGADO

Miembro de la Junta Internacional Americana de Jurisconsultos

Ex - Delegado Plenipotenciario del Paraguay a la V. Conferencia Internacional Americana (1923)

Ex - Diputado al Congreso Nacional

Ex - Profesor de Finanzas de la Facultad de Derecho de Asunción

Socio del Instituto Americano de Derecho Internacional
y de L'Institut Intermédiaire International, de La Haya



UNIV

CAROLINA

"EL ATENEO"

Librería Científica y Literaria - Florida 371

Sucursal: Córdoba 2099

PEDRO GARCIA

Buenos Aires

1926

OBRAS DEL AUTOR

LA AGRICULTURA EN EL PARAGUAY: CAUSAS DE SU ATRASO. — (Conferencia auspiciada por el Centro Estudiantes de Derecho y leída en el Salón de Actos Públicos de la Universidad Nacional. (Año 1903). Folleto agotado.

PROYECTO DE UN CODIGO DE ADUANAS. — (Tesis para optar al grado de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Folleto. (Año 1907).

ESTUDIOS FORENSES: "Requisitos esenciales de la injuria: La carta-misiva dirigida a tercero no puede fundar una acción criminal" — El delito de Incendio y el Código Penal" — "Documentos al portador: requisitos que deben llenar para ser equiparados a la letra de cambio"). Folleto.

DOS ALEGATOS: (Estudios Forenses sobre: Filiación natural" e "Indemnización de daños y perjuicios provenientes de un cuasi-delito"). Folleto. Año 1917.

EL PROCESO PUERTO ISTUETA: "El Cuerpo del Delito en la Doctrina y en la Jurisprudencia" (En colaboración con el Doctor J. Wenceslao Segovia) Buenos Aires. (Nocito y Raño). 1922.

En preparación:

LOS TRATADOS DE COMERCIO DEL PARAGUAY



CAPITULO I

Motivos de este trabajo. — La población extranjera, su modalidad e influencia en el orden económico. — La inmigración deseable. — Conveniencia de que los extranjeros intervengan en la política. — Necesidad de una ley de naturalización.

El asunto que abordamos en este ensayo, la nacionalidad, ciudadanía y naturalización, pertenece a la categoría de aquellos que pueden calificarse de vitales para el porvenir de la nación.

Si hasta ahora nuestros gobernantes y publicistas no le han dedicado merecida atención, es porque problemas de más perentoria solución les han distraído íntegramente el tiempo en el medio siglo de nuestro penoso resurgimiento.

A pesar de los errores cometidos por la inexperience, el error o la mala fe en el gobierno de la nación, es indiscutible que ésta ha progresado en todos los órganos de la actividad. Y, así como es menester renovar o mejorar los útiles empleados en la industria, también debe mejorarse la legislación, adaptándola a las necesidades del ambiente, de la mayor cultura y hasta de la evolución de los

conceptos. Nada más utópico, dice un publicista, que la idea de una Constitución adecuada a todos los tiempos y lugares. (1).

Hechos y causas concurrentes, según se verá, dan al asunto que tratamos una actualidad indudable.

Si envidiable es el enorme progreso material y moral de algunas de las grandes repúblicas sud-americanas, no lo es, en cambio, el grave y complejo problema que les plantea la numerosa población extranjera que vive dentro de ellas, ajena, indiferente casi por completo, a todos los asuntos de gobierno por esenciales que ellos sean al progreso de la nación.

Esa población extranjera está constituída, como es sabido, en su gran mayoría, por antiguos inmigrantes que vinieron a América a labrarse una posición económica con la fuerza de sus músculos y el vigor de su inteligencia. Esos inmigrantes han constituído hogar y levantado más o menos rápidamente sino una considerable fortuna, una desahogada posición económica, porque la fertilidad de las tierras o la buena orientación de sus esfuerzos, unida a su espíritu de trabajo, de orden y disciplina, y el noble anhelo de prosperar, les han dado la clave del éxito. (2).

(1) A. de Vedia, *Const. Argentina*, p. 9; León Duguit, *Las transformaciones del Derecho Público* (trad. de A. Posada), pág.

(2) F. A. Barroetaveña, *Naturalización de extranjeros*, p. 4 y 5.

Como consecuencia, la mayoría de las industrias, del comercio y de la banca están en poder de los extranjeros, con lo cual han acreditado el concepto de que sólo emigran los fuertes y capaces.

A pesar de esto y del gran poder de adaptación que tienen estos países nuevos, es innegable que algunas naciones, como el Brasil por ejemplo (refiriéndonos especialmente a los Estados de Santa Catalina y Río Grande do Sul), han asimilado muy poco a ciertos núcleos de inmigrantes, pues éstos no sólo no han llegado a expresarse con relativa facilidad en el idioma nacional, sino, lo que es más grave, la mayoría de sus hijos no se consideran ciudadanos o nacionales del país de su nacimiento sino de la patria de sus padres, con el criterio europeo del “*jus-sanguinis*”, concepto que de ninguna manera nos conviene que cunda en América (3).

Es cierto que nosotros no tenemos tal problema, pues las colectividades extranjeras se encuentran más unidas al país por el invisible pero poderoso lazo del amor a la familia y a la patria de

(3) Con motivo de la intervención del Brasil en la guerra europea, importantes núcleos de colonos alemanes y austro-húngaros emigraron de Santa Catalina y Río Grande do Sul al territorio argentino de Misiones y al Paraguay.

Casi ninguno sabía expresarse en idioma portugués, inclusive los hijos, fuertes mocetones que confesaban la extraña nacionalidad de “alemán-brasileiro”.

sus hijos (4) y porque en medio de todos los errores cometidos, siempre ha sido la política de todos los gobiernos que se han sucedido guardarle respeto y especiales consideraciones al extranjero honrado y laborioso.

Nuestras libérrimas leyes, por otra parte, les dan acceso con el voto activo y pasivo al gobierno de las comunas; y todas las entidades de algún acervo moral, constituídas por extranjeros, han sido siempre escuchadas por los poderes del Estado para las reformas legislativas que tienen relación con la vida económica del país.

Además, jamás se ha exigido carta de ciudadanía al extranjero a quien se le nombra para desempeñar un empleo público, contrariamente a lo que ocurre en otros países, como la Argentina por ejemplo (5).

(4) No conocemos caso de ningún hijo de extranjero nacido en el país que haya repudiado la nacionalidad paraguaya para considerarse nacional de la patria de su padre, aunque hubiese ido de corta edad a radicarse en la nación paterna.

Cuéntase de Don Pedro Goitía, hermano del distinguido e ilustrado político correntino Dr. Martín Goitía, que, cuando éste ejercía la gobernación de la Provincia de Corrientes, la convención del Partido Liberal (de la situación) quiso proclamar la candidatura a diputado de la legislatura de la Provincia, creyéndosele ciudadano argentino, como sus padres y demás hermanos. Don Pedro Goitía rehusó el honor, a pesar de que nadie le habría discutido la elección, declarando que él era ciudadano paraguayo y que no deseaba dejar de serlo. Y esta declaración la hacía cuando nuestro país se encontraba en plena anarquía!

(5) La Constitución Nacional Argentina establece, co-

Con todo, como ocurre en otros países sudamericanos, los extranjeros no se naturalizan. No toman interés por los problemas de gobierno ni por los partidos que luchan por la conquista del poder, y si lo hacen, proceden tímidamente, secretamente, como si cometieran un delito.

El Paraguay, gracias a su relativamente escasa población extranjera, se encuentra en ventajosas condiciones para intentar la solución conveniente de asunto tan interesante.

La homogeneidad de la población, la unidad de ideales y aspiraciones políticas, la comunidad de intereses económicos, en el amplio concepto de este vocablo, constituyen, indiscutiblemente, una gran fuerza moral para una nación.

El Paraguay era ya una unidad étnica, una nación, desde los comienzos de su independencia: tenía todos los caracteres que se llaman nacionales, fisonomía propia, unidad de sentimientos creada por la geografía y la historia (6)...

Por esto, es obra altamente patriótica toda acción dirigida a facilitar la adaptación, absorción

mo la del Paraguay, que *“todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”* (art. 16). A pesar de esta clara disposición, ninguna oficina pública acepta como empleado a ningún extranjero. Para ser nombrado debe naturalizarse previamente, y en caso de ser nombrado sin haber llenado ese requisito, sólo se le liquida el sueldo después de la presentación de la libreta de enrolamiento militar.

(6) Dr. M. Domínguez, *La Constitución N. del Paraguay*, T. 1º, p. 76.

o asimilación del extranjero que llega con el propósito de establecerse, de radicarse en el país.

Asimilación o adaptación, no en el sentido de que adopten algunos de nuestros hábitos poco recomendables, de aquellos que bien pueden calificarse como los defectos de nuestro pueblo, sinó en el de solidarizarse con nuestros anhelos nacionales de progreso y cultura, con nuestras aspiraciones generosas de constituir un pueblo fuerte, libre, rico y feliz, respetado y respetuoso de todo derecho legítimo, dentro del concepto eminentemente nacional.

El momento es propicio para emprender la obra.

Los grandes problemas mundiales, de carácter político y económico, de la post-guerra europea, nos hacen entrever la posibilidad de que en un futuro no lejano desborde para nuestro país una numerosa inmigración, si es que se atina a obrar sabia y oportunamente (7).

(7) Es indudable que se va formando en la nación un concepto más acabado sobre la necesidad de fomentar activamente la inmigración europea. Los grandes directores de la opinión pública del Paraguay, *El Diario y El Liberal*, así como los demás órganos de publicidad, así lo demuestran.

En el N° 4042 del 30 de Julio de 1925, de *El Liberal*, se registra el interesante artículo de redacción, titulado:

“SURCOS DE HIELO”

“Pocas veces como ahora se nos ha presentado oportunidad tan auspiciosa para alentar hacia nuestro país una fuerte corriente migratoria.

Sabido es que Norte América desarrolla, después de la guerra europea, una política inmigra-

“Para nadie es un secreto el enorme éxodo persistente hacia tierras americanas de una buena parte de la población de Italia, Alemania, Checoslovaquia, Rusia y otros países europeos.

“Sólo nuestro país no se beneficia con ese oleaje inmigratorio que afluye constantemente a las playas propicias del Nuevo Mundo.

“Y, sin embargo, ¿qué otro rincón de América ofrece mejores condiciones para ser colonizado, qué otro necesita tan premiosamente incorporar a su suelo fértil y desierto brazos extranjeros, esa reserva de energía, de vida, de trabajo creador, de fuerzas físicas y morales atesoradas en razas mejor preparadas para los destinos que anhela cumbreear nuestro patriotismo impaciente?

“Cada uno de los delegados que han venido a nuestro país en busca de facilidades de colonización, ha regresado encantado de sus inmensas probabilidades económicas. Ahí están los informes alentadores del ingeniero Baseggio, las impresiones del delegado checoslovaco, de todos cuantos han llegado hasta nosotros con análogos propósitos.

“Nosotros no debemos permanecer indiferentes a esas gestiones. Tenemos que acogerlas, tenemos que secundarlas, ya que no nos hemos preocupado de iniciarlas.

“Y no debemos permanecer indiferentes, porque esos empeños se relacionan con la solución que tarde o temprano tendremos que dar a uno de los más graves y vitales problemas nacionales.

Nuestro gran enemigo es el desierto, estéril, deshabitado, inculto. Sobre una extensión territorial de cerca de medio millón de kilómetros cuadrados, no contamos sino con un millón escaso de habitantes. ¿Cómo vamos a incrementar la riqueza que se extrae de esta tierra, si el número de los que la cultivan no aumenta?

toria restrictiva y casi prohibitiva para los pueblos europeos de origen latino.

“El aumento vegetativo de la población es insuficiente. Necesitamos fomentarla rápidamente por otro medio. Y este medio no puede ser otro que la inmigración. Está en nuestras manos, está a nuestro alcance. Depende de nosotros utilizarlo.”

Del número 4038 del mismo diario transcribimos el siguiente artículo, titulado:

“MÁS CHACRA, MÁS CHACAREROS”

“Los países sin población son sólo expresiones de áreas geográficas, y sin población, dice la Oficina de colonización británica, todo adelanto es imposible.”

“Es el caso de nuestro país. Tenemos que convencernos: nuestro atraso, nuestra extagnación radica en la falta de población. La capacidad productora de una nación está en razón directa del número de habitantes que se dedican al trabajo. Cuanto mayor es, mayor es la producción.

“Son infinitas las posibilidades económicas que ofrece nuestro país, incalculable su riqueza potencial. Pero, ¿de qué nos sirve todo eso si carecemos de brazos y de capitales?

“A nosotros nos parece sencillamente absurdo pretender fomentar la producción sin fomentar la inmigración por la sencilla razón de que debemos aumentar el número de los que tienen que producir para que la producción se acreciente.

“Esta es la cuestión. Si realmente nos preocupa el porvenir económico y social de la Nación, tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos y todos los medios de que dispone el Estado para atraer inmigrantes, para facilitarles su radicación en el país.

“El interés fiscal no puede en este punto ser distinto del interés nacional. Constantemente el Estado tiene que aumentar su presupuesto, ampliar su acción, intensificar y multiplicar los servicios públicos. Y bien, ¿de dónde va

a sacar los recursos para hacer frente a estas necesidades? De la producción, de lo que el país crea, de lo que el trabajo nacional rinde, de la población que labora, del número de contribuyentes. No solamente el robustecimiento de la capacidad productora de la nación sino también de la capacidad rentística del Estado dependen del aumento de la población.

“Para incrementar la producción debemos aumentar la población. Y para eso, necesitamos impulsar la inmigración. Fomentarla es, no ya un deber, sino una necesidad imperiosa.

“Aprovechemos las ocasiones que se nos brindan. “La reciente conferencia de Roma, donde se ha podido pulsar, dijo hace poco el presidente de la Argentina, doctor Alvear, los planes de los países de inmigración y los propósitos de los de emigración, nos ha confirmado en el convencimiento de que, si no colonizamos en vasta escala y de inmediato, podemos perder la más brillante oportunidad para incorporar a nuestro suelo una abundante inmigración seleccionada.”

“Necesitamos más chacras y más chacareros. Vayamos a buscarlos adonde no se espera sino nuestro llamado. No olvidemos que sin población todo adelanto es imposible en lo económico y en lo social”.

El Diario, en el número del 6 de Julio de 1925, publicó también el artículo titulado:

“PERSPECTIVAS DE COLONIZACIÓN”

“Es grato constatar el interés que comienza a despertar el Paraguay por la posibilidades que ofrece para el establecimiento de núcleos importantes de colonización europea.

“Casi simultáneamente han visitado el país en misión de estudio diferentes delegaciones en representación de gobiernos extranjeros y sociedades de reputación universal y todas ellas han expresado por intermedio de sus intérpretes autorizados, la impresión favorable que han reci-

do al par que las ventajas y facilidades que ofrece la República para encauzar hacia ella una corriente de inmigración regular y numerosa. Todo hace presumir, pues, que nos hallamos en vísperas de un intenso movimiento colonizador, perspectiva que no puede ser más halagueña para nuestro progreso.

“A los informes ya publicados del coronel Procter, representante de la Oficina Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, y del ingeniero Baseggio, delegado del gobierno italiano, podemos agregar el del doctor W. Lastky Bertoldi, representante de una poderosa empresa mundial de colonización — la “Jewish Colonization Association” — quien visitó y recorrió el país como agregado a la delegación que presidía el coronel Procter.

“Este informe, redactado en alemán y especialmente traducido, dice así:

“El Paraguay desde el punto de vista de una futura colonización me ha hecho una impresión muy favorable. El Paraguay cuenta con los principales factores para asegurar el éxito de una colonización: tierras suficientes con extensiones continuadas de tierras fértiles que pueden obtenerse a precios muy baratos, un clima templado y abundante riego. La fertilidad y baratura del suelo colocan al Paraguay y en primera línea entre las repúblicas de Sud América que podrían ser consideradas para una inmigración y colonización europea.

“Otra circunstancia favorable significa la posibilidad que existe en el Paraguay para la agricultura intensiva, que permite una colonización más densa en un sitio limitado.

“Mientras que en la Argentina y en el Uruguay predomina la agricultura extensiva y debe predominar, exigiendo grandes extensiones de tierra para asegurar la existencia de una familia de colonos, por término medio de 75 a 100 hectáreas, en el Paraguay basta una superficie mucho más pequeña para garantizar el porvenir económico de un colono.

En la cuota de inmigración que ha establecido, el mayor porcentaje adjudica a los pueblos anglosajones y escandinavos (8).

“Para Europa, que dispone de muchos brazos a los que es imposible proveerlos todos con tierras tan grandes como sería necesario por ejemplo en la Argentina, el Paraguay ofrece la solución parcial del problema de su exceso de población y exceso de brazo.

“A éstos hay que agregar aun los gastos de instalación, sumamente baratos en relación con otras repúblicas americanas. Los precios de los artículos de consumo son en el Paraguay relativamente más bajos, los implementos animados e inanimados requieren también solamente desembolsos módicos para ser factible una colonización en escala mayor con medios relativamente modestos.

“Y si con el tiempo mejoran en el Paraguay las condiciones de la vialidad y comunicaciones se puede augurar con seguridad al país un período brillante de colonización, con una población densa”.

(8) Una noticia telegráfica de *La Nación* (de Buenos Aires), dice:

LA INMIGRACIÓN A EE. UU. DISMINUYÓ EN UN 78 POR CIENTO

“NUEVA YORK, 12. — Una estadística publicada por la Junta de Conferencias de la industria nacional, dice que hubo un gran promedio de retorno de inmigrantes de Estados Unidos a Europa durante el período que correspondió al primer semestre de aplicación de la nueva ley inmigratoria.”

“Del hemisferio oriental llegaron 79.741 extranjeros, habiendo regresado 59.916. Los inmigrantes procedentes del hemisferio occidental, alcanzaron al número de 88.948, de los cuales solamente 6.989 partieron nuevamente.”

“El aumento neto permanente de la población de Estados Unidos, por concepto de inmigración durante ese

De esta suerte, todo el excedente de población de Italia, Francia, España, Suiza y los pueblos de origen eslavo, tiene que dirigirse en gran parte a los países sudamericanos, y entre éstos es indudable que el Paraguay ofrece posibilidades que no pueden ser desconocidas, por la bondad de su clima, la fertilidad de su suelo, facilidades de comunicación con el exterior, la enorme extensión de tierras incultas sobre grandes y hermosos ríos na-

“ período, alcanzó a 104.000, comparado con 483.000 en los mismos meses del año precedente, lo que representa “ una disminución de más del 78 por ciento.”

Otra noticia publicada en el número del 20 de Abril de 1925, del mismo diario, dice:

“WASHINGTON, 20. — En un discurso pronunciado “ esta noche en ésta ante la Convención de las Hijas de la “ Revolución Americana, Mr. Coolidge expresó la opinión “ de que la única manera de evitar la constante interposi- “ ción del Gobierno en la casi totalidad de los asuntos de “ las gentes es la de que *adopten la línea de conducta co- “ rrecta*”.

“Elogió Mr. Coolidge las organizaciones que realizan “ una obra de americanización entre los inmigrantes, y de- “ claró que la política restrictiva de Estados Unidos pa- “ recía necesaria *en vista de la seguridad de que un nú- “ mero sin precedentes de inmigrantes acudiría desde Euro- “ pa y en cantidad mayor a la que tendríamos la seguri- “ dad de asimilar*”.

—Según una publicación reciente hecha por el Comisa- riado General de Emigración de Roma, el número de emi- grantes salidos de Italia durante el año 1925, es de 300.000, habiendo alcanzado en los años precedentes 1924 y 1923 a 400 mil anuales. (*El autor*).

vegables, la variedad de productos cultivables, de seguro mercado interno e internacional, la liberalidad de sus leyes, etc., etc.

El momento es, indudablemente, propicio para intentarse una acción vigorosa y bien encaminada a obtener una fuerte corriente inmigratoria (9): Cualquier sacrificio pecuniario que se realice en ese sentido, tiene que ser de beneficioso resultado para el porvenir de la nación.

(9) Continuamente leemos en las Revistas y órganos de la prensa diaria europea y sudamericana, la necesidad inaplazable de resolver el problema de la carestía de la vida y de la desocupación obrera en las naciones europeas, por medio de la emigración a los países de inmigración, especialmente sudamericanos.

La Nación, de Buenos Aires, cuyo admirable servicio informativo por medio de corresponsales particulares es bien conocido, trae la siguiente noticia telegráfica en el número del 30 de Agosto del corriente año 1925:

VIENA, 29. (Associated). — El problema de la desocupación en Austria deberá resolverse mediante la emigración a América del Sur.

Tanto los obreros como los patrones se han organizado con el propósito de establecer alrededor de 12.000 hombres desocupados en la Argentina, Brasil o el Uruguay.

El ingeniero Borst, consejero técnico de la organización, propone pedir al Gobierno que conceda subsidios semanales a los desocupados, durante un año y por adelantado, para los que se encuentren en aquellas condiciones y hayan resuelto emigrar. El señor Borst espera conseguir por el medio citado una tercera parte de los fondos necesarios para el fin propuesto.

Y lo raro del caso es que, a pesar de que todos los gobiernos y todos los partidos han estado convencidos siempre de la necesidad y conveniencia de atraer la inmigración europea, nunca se haya llegado a encontrar un medio práctico, eficaz, para obtener una inmigración capaz de modificar, por su volumen y producción, la fisonomía económica y social de la nación, tal como ha ocurrido en otras naciones americanas.

Otra tercera parte se reunirá por la venta de los bienes de los presuntos emigrantes y la tercera parte restante por contribuciones públicas.

Empero, antes de llevar a la práctica el plan, será enviada a América del Sur una Comisión de técnicos para que elija y compre tierras apropiadas para el establecimiento de los emigrados. El primer contingente sería de trescientos hombres solteros, cuya tarea será preparar las tierras; así, para el año próximo, se espera que será posible el envío del primer contingente de 500 familias a América del Sur, al que seguirían otros hasta completar la cantidad antedicha de 12.000.

En la conferencia dada en Buenos Aires el día 2 de Agosto del corriente año 1925, en el Salón "Augusteo", por el señor Guillermo di Palma de Castiglione, miembro de la delegación de la "Oficina Internacional del Trabajo" de la Liga de las Naciones, que, presidida por Mr. Albert Thomas, visitó Sud América, decía el señor di Palma de Castiglione, que:

"...la característica de Italia no son sus bellezas naturales, ni su tesoro artístico, ni su maravillosa historia, sinó la densidad de su población, que hace que vivan en su suelo 200 habitantes por kilómetro cuadrado, o, en otros términos, que cada diez metros de su territorio deben alimentar a dos personas".

Por lo mismo, todo lo que se haga en el sentido de inculcar en la conciencia pública la perentoria necesidad de atraer una fuerte corriente inmigratoria, es patriótica colaboración en el progreso del país.

“El señor di Palma Castiglione comparó este hecho con la escasa densidad de nuestra población, y agregó a él la circunstancia de que Italia, además, carece de las riquezas naturales que hacen menos grave la misma densidad en otros países como Bélgica y Alemania. A continuación, el conferenciante reseñó las características que esas condiciones imponen a la vida en las diversas regiones de Italia y se refirió a la áspera lucha que el hombre debe sostener con la naturaleza para arrancarle duramente su sustento”.

“Agréguese a esto que el balance demográfico se cierra anualmente con superávit y que el pueblo italiano no puede vivir, como los de Oriente, con un mínimum estacionario de necesidades, sino que debe aumentarlas en consonancia con el progreso de la industria y con los adelantos de la civilización”.

“Este es el origen y la explicación del intenso fenómeno migratorio que forma un aspecto tan capital de la vida italiana. El obrero de Italia debe emigrar para asegurar a los suyos condiciones de vida que de otra manera su propio país le negaría”.

“Y en el fondo de éste fenómeno, que parece exclusivamente informado por razones materiales, late un principio idealista: la sed de mejoramiento que es base del progreso” (*La Nación*).

La importancia de estas opiniones está en que el señor di Palma de Castiglione es Consejero de emigración y delegado del Gobierno Italiano a la conferencia internacional de su condicionamiento.

Nada más oportuno que recordar las opiniones de Alberdi, aquel buzo genial de la política económica de su patria. “La población — decía — forma la sustancia en torno del cual se realizan y desenvuelven todos los fenómenos de la economía social. Necesitamos seguir una política de creación, de población, de conquista del desierto”.

“Con las grandes poblaciones formadas a base de elementos extranjeros, se resolverán muchos problemas económicos y sociales.....” “Para formar Estados, no basta un territorio extenso, es menester el elemento activo, vital, que es la población, que forma el pueblo. Las grandes obras que pide el suelo americano sólo podrían realizarse cuando estos pueblos vayan teniendo grandes poblaciones. Es nula y nimia la acción de los Ministros de Estado en estos pueblos si *no duplican los censos* por lo menos cada diez años”.

Doloroso es comprobar que nuestro país, en vez de ser país de inmigración, constituye a su vez país de emigración, por causa de las guerras civiles, la falta de una acción gubernativa bien orientada tendiente a radicar la población nacional, — facilitándole su desenvolvimiento, — la mala moneda, y la prosperidad creciente de los países limítrofes (10).

(10) Gran parte de la población del territorio argentino de Formosa, es paraguaya. Ignoramos la cantidad que denunciara el censo, pero, por el conocimiento personal que

Refiriéndose a la clase de inmigración deseable, agregaba Alberdi: “Europa nos traerá su espíritu nuevo, sus hábitos de industria, sus prác-

tenemos del territorio, podemos afirmar que el 35 o/o, por lo menos, es paraguaya. Más aún: la conquista de este extenso y desierto territorio, poblado y dominado desde pocos kilómetros del río Paraguay, hacen menos de 20 años, por el indio aborígen, bravío y astuto, se le debe, en gran parte, al poblador paraguayo que, en su afán de ganarse la vida, cuando era aherrojado por las persecuciones políticas a la banda occidental del río Paraguay, no siéndoles permitido quedarse en la zona ocupada por los pobladores y ganaderos argentinos, han tenido que aventurarse a 40 o 50 kilómetros al interior, con la intención de dedicarse a la caza, plantando, finalmente, por aquellos desiertos sus humildes ranchos. Y en esa lucha obscura ¡cuántas víctimas ignoradas!...

La gran emigración se inició, como consecuencia de las persecuciones políticas, después del motín militar del 2 de Julio de 1908.

En 1909 habían alrededor de 4000 braceros paraguayos trabajando en las obras del “Ferrocarril Formosa-Embarcación”, obrajes de maderas, aserraderos, agricultura, etc.

Según el censo oficial del Territorio de Formosa de 1914, la población paraguaya era de 7354 personas, y es indiscutible que en dicho censo no estaba incluida toda la población del Territorio, que es extenso, sin caminos, etc.

Puede afirmarse que, en la actualidad, el número de paraguayos radicados en el territorio de Formosa no bajará de 9.000 personas.

Centenares, mejor dicho, miles de obreros paraguayos, trabajan en los obrajes, aserraderos y demás industrias de la poderosa empresa “La Forestal” del Chaco, en los ingenios, la agricultura, etc.

“ ticas de civilización en las inmigraciones que nos
“ envíe. Cada europeo que llega a nuestras playas
“ trae sus civilizaciones en sus hábitos, que luego

Según el censo oficial del territorio del Chaco practicado en 1920, la población paraguaya se componía de 4785 personas, de las que 2757 eran varones adultos.

Con respecto a este censo puede afirmarse también que está por debajo de la verdad.

Numerosos obreros paraguayos también viven en Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires.

En cuanto al personal de los obrajes de maderas y yerbateros de Misiones (Argentina), y Brasil (Alto Paraná) y Matto Grosso, puede afirmarse sin temor a errar que el 80 o|o lo constituyen obreros paraguayos, los únicos que, por su adaptabilidad al medio, su sobriedad, fortaleza y resistencia pueden soportar con una pésima y escasa alimentación un trabajo excesivo (de sol a sol) en una ruda labor en lucha con infinidad de insectos, etc., todo lo cual hacen la vida materialmente imposible al obrero europeo.

En un censo practicado por la Gobernación del Territorio de Misiones el año 1920, esto es, hacen como cinco años, se acusa una población paraguaya de 5832 personas.

Aunque el trabajo ha sido bien planeado, creemos que existía, en aquella época, mayor número de paraguayos en el Territorio de Misiones. Nos fundamos, para hacer esta afirmación, en los siguientes datos:

En el Departamento de Iguazú quedan comprendidos los obrajes “*Puerto Istueta*” (hoy Irigoyen), que figura con 353 habitantes, que es apenas la mitad del personal que entonces tenía, y “*Puerto Segundo*” con 316, cuando en realidad, en aquella época tendría, por lo menos, 700 obreros, más las mujeres y los niños.

La misma observación cumple hacer respecto a otros establecimientos obrajeros del Alto Paraná. Y lo que más nos confirma en el error del censo está en que al departamento de Iguazú, que comprende los grandes obrajes,

“ comunica a nuestros habitantes..... Queremos
“ plantar y aclimatar en América la libertad in-
“ glesa, la cultura francesa, la laboriosidad del

sólo le da una población paraguaya de 364 hombres y 113 mujeres, lo que está muy lejos de la verdad.

En la actualidad, sólo el obraje de los señores O. Hansen y Cía., de Puerto Aguirre, tendrá alrededor de 700 obreros paraguayos.

En cuanto al personal obrero del establecimiento “*Puerto Artaza*”, del señor Julio T. Allica, y de la Compañía “*Mate Larangeira*” de Méndez y Cía., del Brasil, que consta de muchos miles de braceros, cuentan también, así como otros establecimientos, con muchísimos obreros paraguayos.

Puede, pues, afirmarse, sin temor a estar lejos de la verdad, que actualmente están radicados fuera del país alrededor de 30.000 connacionales.

Sumamente interesante resultaría conocer con exactitud, por medio de un censo, el número de paraguayos que viven en los países limítrofes, pues el hecho plantea al gobierno de la Nación un problema que urge resolver.

La emigración representa en la vida de los pueblos lo que la transfusión de la sangre en los individuos: sólo les conviene a los que se encuentran plétóricos de vida, como Italia, que por su gran natalidad tiene exceso de población, pero no al Paraguay, país de tan escasa población.

El problema es serio desde el doble punto de vista político y económico.

“El Partido Liberal” ha auspiciado recientemente en el Congreso una iniciativa tendiente a dar solución a una de las causas — más aparente que real — de la emigración de braceros nacionales a los países limítrofes: la falta de tierra propia que cultivar. Y decimos que la causa es más aparente que real puesto que existe la *Ley de Colonización y Hogar* del año 1904 (Junio) que contiene prudentes y sabias disposiciones que, bien aplicadas y apo-

“ hombre de Europa y de Estados Unidos. Traiganos pedazos vivos de ellas en las costumbres “ de sus habitantes y radiquémoslas aquí”.

yada por la población criolla, daría el resultado práctico de eliminar la causa “falta de tierras” que tanto tema ha dado a la propaganda política.

La pretensión, frecuentemente sustentada por pequeños núcleos de pobladores de tierras particulares — donde ni siquiera han hecho mejoras de consideración, — de que el Estado expropie y les entregue la mencionada fracción de tierras, es verdaderamente injustificable. Y más injustificable resulta que, por esa causa, tengan que abandonar el propio país, para ir a ser un simple obrero a destajo o mensualero — “mensú” — fuera de la patria.

Dentro del propio país existen extensas zonas de tierras loteadas, en las Colonias oficiales, que están esperando inútilmente, desde años atrás, el hombre de trabajo a quién prodigar sus riquezas.

A continuación transcribimos a simple título informativo las principales disposiciones del proyecto llamado de “Fomento de la pequeña Propiedad”, a que hacemos referencia, proyecto que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, encontrándose ahora a estudio del Senado:

TITULO I

CAPÍTULO I

De la creación y fomento de la pequeña propiedad agropecuaria por el Estado

Art. 3º — El Poder Ejecutivo fomentará la creación, multiplicación y conservación de la pequeña propiedad agropecuaria por la colonización interna, ya sea de las tierras fiscales actualmente existentes o de las del dominio privado adquiridas a este fin.

“Haced pasar el “*roto*”, el “*gaucho*”, el “*cho-lo*”, unidad elemental de nuestras masas populares, por todas las transformaciones del mejor

CAPÍTULO II

Colonización de las tierras fiscales actualmente existentes

Art. 4º — Las tierras del dominio privado fiscal, actualmente existentes podrán ser destinadas a la colonización interna si reúnen las siguientes condiciones:

1º Que las tierras sean aptas para la producción agropecuaria.

2º Que se hallen situadas en las zonas adyacentes a los ríos navegables, las vías férreas o arterias principales de comunicación y transporte que hagan relativamente fácil el acceso de sus productos a los mercados de consumo.

Art. 5º—Las tierras fiscales que no reúnan las condiciones enumeradas en el artículo anterior podrán ser también aplicadas a la colonización si al dictarse esta ley, estuvieren pobladas en una proporción de veinte familias por cada seiscientas hectáreas.

Art. 6º — El P. E. podrá otorgar en venta particular a sus ocupantes en preferencia, o a los agricultores que las soliciten, las fracciones de tierras fiscales que, careciendo de suficiente extensión para la colonización interna, sean sin embargo aptas para la formación de la pequeña propiedad agropecuaria.

CAPÍTULO III

De las expropiaciones

Art. 7º — Las tierras de dominio privado, libres de pobladores, y aptas para la colonización interna por su naturaleza y la conveniencia de su ubicación, según el examen que practique la oficina respectiva, podrán ser expropiadas al fin indicado, previa la calificación de utilidad pública dictada en cada caso por la autoridad correspondiente.

“ sistema de instrucción; en cien años no haréis
“ de él un obrero inglés que trabaja, consume, vi-
“ ve digna y confortablemente”.

Art. 8º — Queda autorizado el P. E. para decretar la expropiación de las tierras que, por reunir las siguientes condiciones, se declaran de utilidad pública:

1º Que sean aptas para la explotación agropecuaria.

2º Que estén ocupadas por núcleos de población de una densidad mínima de veinte familias por seiscientas hectáreas.

3º Que sus ocupantes sean familias agricultoras en una proporción por lo menos del 60 o/o.

Art. 9º — Si por efecto de la expropiación, hubiere de desmembrarse la propiedad dejando al propietario con una fracción inútil para toda utilización económica, podrá el expropiado exigir que se le compre el todo.

TITULO IV

CAPÍTULO I

Del régimen de adquisición de las pequeñas propiedades agropecuarias

Art. 18. — Las fracciones de tierras destinadas por el Estado para la formación de la pequeña propiedad agropecuaria, serán adjudicadas, sin distinción de nacionales o extranjeros, únicamente a las personas que reunan las siguientes condiciones:

1º Que posean o se comprometan poseer, cultivarlas por sí mismas o bajo su responsabilidad inmediata.

2º Que sean agricultores profesionales o habituales mayores de edad y aptos para dedicarse a las faenas agrícolas.

3º Que no sean propietarios o poseedores a título de tales de bienes raíces de la República, salvo que lo sean de solares urbanos.

CAPÍTULO II

Formas de adquisición

Art. 19. — En las colonias fiscales actualmente existentes los lotes vacíos serán adjudicados gratuitamente a los inmigrantes extranjeros o nacionales repatriados.

El título definitivo se expedirá a los cuatro años, previa justificación:

a) De haber edificado en el lote una casa para su vivienda, habiendo residido habitualmente en ella durante el término señalado.

b) De tener cercado su lote cuando menos en la parte cultivada.

c) De tener un cultivo no menor de tres hectáreas.

Art. 20. — El plazo de cuatro años será prorrogado si mediaren circunstancias que lo justifiquen a juicio del Departamento de Tierras y Colonias.

El colono que al cabo del tiempo señalado en el artículo precedente, no hubiese satisfecho las condiciones enumeradas perderá su derecho de posesión del lote.

Art. 21. — En las nuevas colonias que cree el Poder Ejecutivo la adjudicación de la pequeña propiedad agropecuaria se hará por compra-venta de los lotes, con preferencia a sus actuales ocupantes, que se hallen en las condiciones especificadas en el artículo 18.

Art. 22. — En caso de venta de los lotes el precio de éstos será el de la adquisición por el Estado, más los gastos que hayan demandado la subdivisión y las mejoras de los mismos.

Art. 23. — La compra-venta de los lotes podrá hacerse a plazo, siempre que los adquirentes afiancen debidamente el pago de su importe. El plazo será fijado teniendo en cuenta la amortización anual que permita efectuar la capacidad productiva del inmueble.

.....
.....

De la colonización particular

Art. 41.—El Poder Ejecutivo queda autorizado para aceptar las tierras ofrecidas gratuitamente por los particulares para colonizarlas, siempre que las condiciones propuestas sean convenientes.

Art. 42. — Los propietarios que sé propongan lotear y subdividir por su cuenta las tierras de su propiedad que se encuentran en las condiciones del artículo 8º, podrán obtener la garantía del Poder Ejecutivo para los casos de incumplimiento de parte de los compradores de las condiciones de la compra-venta, con tal que las bases de la colonización hayan sido aprobadas previamente por la oficina respectiva y firmado el correspondiente contrato.

Art. 43. — Los propietarios o empresarios que se propongan la colonización de tierras del dominio privado, deberán obtener previamente del Departamento de Tierras y Colonias la aprobación de las bases y condiciones en que se llevará a cabo la colonización.

Si se emprendiera la colonización sin este requisito o el empresario faltare o dejare de cumplir posteriormente algunas de las cláusulas estipuladas, perderá la franquicia que se le haya concedido y será pasible de una multa de cinco a cien mil pesos, sin perjuicio de las responsabilidades por incumplimiento de obligación de dar o de hacer que pueda corresponderle de acuerdo a la legislación común.

Art. 44. — Como garantía del pago de la multa y de las demás obligaciones establecidas en el artículo anterior, a más de la fianza que estará obligado a prestar el empresario a satisfacción del Departamento de Tierras y Colonias, quedarán afectados a los mismos efectos los bienes inmobiliarios de la misma empresa y los precios debidos por los colonos como importe de sus lotes.

Art. 45. — Las colonias particulares gozarán de las siguientes franquicias:

1º Pasaje libre a favor de los colonos y sus familias de cualquier punto de la República o puertos de la Argentina, Brasil y Uruguay.

“Multiplicad la población seria y veréis a los vanos agitadores, desairados y solos, con sus planes de revueltas frívolas, en medio de un mundo absorbido por ocupaciones graves” (11).

Pero, de la necesidad de aumentar la población no debemos concluir que debe sernos indiferente la masa de pueblo a incorporarnos.

2ª Libre introducción de los objetos enumerados en el inciso 4º del artículo 3º de la ley de inmigración de 6 de octubre 1903.

3ª Exención del impuesto territorial por el término de cinco años.

Art. 46.—Las colonias particulares estarán sometidas a la superintendencia del Departamento de Tierras y Colonias, y en ningún caso sus propietarios podrán negar a los empleados de la citada repartición el examen y revisión de los documentos y libros que les fueren solicitados, so pena de la sanción que establece el artículo 43.

Art. 47.—Las pequeñas propiedades agropecuarias formadas en las colonias particulares quedarán sometidas a las disposiciones generales de esta ley.

Art. 48.—En todas las colonias particulares, el Departamento de Tierras y Colonias, para aprobar las condiciones de la colonización, exigirá la reserva de suficiente extensión de tierra para asentar la parte urbana de la población, así como la cesión gratuita de lotes para escuelas, municipalidades y otras oficinas públicas.

Art. 49.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los veinte y cuatro días del mes de Julio de mil novecientos veinte y cinco.

(11) J. B. Alberdi, *Orígenes de la Confederación Argentina* (edic. Besanzón, 1858).

Interesa al porvenir de nuestra raza no disminuir sino, por el contrario, acrecentar y mejorar las cualidades nobles y recomendables que posee.

Con intensificar la instrucción primaria y técnica, con fomentar el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, a fin de que tanto la niñez como el pueblo en general se alimente mejor y viva mejor, no tenemos motivos para envidiar a ningún pueblo de la tierra (12).

Por lo mismo, la Constitución Nacional, teniendo en consideración razones de orden etnográficas y políticas, sólo auspicia la inmigración europea y americana.

(12) En una serie de artículos publicados en *El Nacional*, hacen algunos años, con el título “*Lo que fuimos y lo que seremos*”, firmados por “George”, pseudónimo bajo el que creemos se oculta la brillante pluma del doctor M. Domínguez, se ha sintetizado, sabiamente, la opinión de aquellos que, desde hace más de un siglo, han emitido meritorios dictámenes sobre las características salientes de nuestro pueblo.

Nos place copiar, en forma sintética, algunas de las opiniones citadas:

“Observando (a los paraguayos) encuentro que son más astutos, sagaces, activos, de luces más claras.... no sólo que los criollos, sinó también que los españoles”.—Azara.

“No hay provincia más numerosa ni de mejor gente.... Todos éstos naturales, por lo común, son sanos y robustos, tienen suma firmeza y destreza”. (Joaquín Alos, informe al Virrey Arredondo).

“El paraguayo es inteligente, de comprensión rápida y fácil, le gusta aprender, tiene mucha aptitud para las artes mecánicas”. — Du Graty.

Sin desconocer las aptitudes demostradas para el progreso y la civilización, y otras muy recomendables condiciones morales como el elevado patriotismo y espíritu de orden y disciplina de los japoneses, y el amor a su libertad política demostrado por los marroquíes en su lucha secular contra los conquistadores europeos....., no nos convienen, sin embargo, los pueblos de raza negra y amarilla. Y no nos convienen porque necesitamos de gente de menos sobriedad de vida (para establecer el contraste con nuestro pueblo), más asimilables y de igual tendencia ideológica que nosotros (13).

Para nuestro clima y las modalidades de nuestro ambiente, más nos convienen las razas fuertes y llenas de optimismo del mediodía y sur de Europa: los italianos, suizos, alemanes, austriacos, franceses, españoles, etc., etc. (14).

Pero no basta con atraer la inmigración. Es menester realizar, paralelamente a esta obra civilizadora, otra igualmente necesaria a nuestro porvenir: la naturalización del extranjero, con el fin de interesarle por el progreso material, moral e institucional de la nación.

(13) Sabido es que Norte América ha prohibido la inmigración de chinos y japoneses. Algunos países americanos restringen la inmigración de la raza negra.

El Salvador ha sancionado, recientemente, una ley que impide la entrada de gente de color en el país.

(14) Domingo F. Sarmiento: *Obras completas*. T. 23, pág. 55 y siguientes.

v. [Rev. de Deho. Internacional N° 12 (Dbre. 1924). — La conferencia internacional de inmigración y emigración de Roma.

Debemos reconocer lealmente que la acción de los pocos hombres que han querido servir honradamente, con toda buena fe, los bien entendidos intereses del país desde los altos puestos directivos de la nación, se ha estrellado, más de una vez, con los intereses subalternos de la política de comité representada por el crudo personalismo de los caudillos; contra la apatía cívica de las masas; contra el espíritu levantisco, indisciplinado, de los componentes de las agrupaciones políticas; fruto o consecuencia todo ello de la falta de un elevado ideal gubernamental en el pueblo.

La generalidad de los hombres de cada partido quiere el gobierno del país para la satisfacción de sus intereses personales y algunas veces hasta de sus mezquinas pasiones.

La intervención activa en la política de grandes grupos de extranjeros naturalizados, habituados a contemplar los reveses electorales como sucesos normales de la democracia, y que, además, podrían llevar a la dirección de los partidos su espíritu de orden y disciplina y a encarar los problemas gubernativos bajo la faz económica y social, no puede ser sino beneficiosa al progreso político de la nación.

Pero, para llegar a este patriótico anhelo, debemos facilitar la naturalización de los extranjeros sancionando una ley que establezca un procedimiento sencillo, claro, fácil y barato.

En la ley debe contemplarse la natural preocupación que provoca en el espíritu de la generalidad de los hombres la naturalización o cambio de

la nacionalidad, por aquello de que se la interpreta como un acto de desamor a la patria de origen, algo así como un repudio....

La naturalización, sin embargo, no importa, en la generalidad de los casos, un renegamiento de la patria de origen, sino, simplemente, un medio de solidarizarse mejor con la nueva sociedad en que se actúa, para hacer más viable el éxito personal y colaborar en forma más eficaz por el progreso colectivo.

El hecho de la naturalización "*bona-fide*", no importa una hostilidad para la patria de origen, sino una adhesión más perfecta con la nueva patria de adopción.

Casi nos atreveríamos a afirmar que a las naciones que tienen exceso de población y que, por lo mismo, son países de emigración, hasta les convienen que sus nacionales que emigran con ánimo de radicarse en estos países americanos, les convienen — decimos — que se naturalicen como un medio de influenciar, siquiera en mínima proporción, en el mejoramiento de las relaciones políticas y económicas entre la patria de origen y la patria de adopción.

Las naciones que se encuentran en pleno desarrollo industrial, necesitan también de los países sin industrias fabriles, sea como mercado consumidor o como proveedor de materias primas.

Refiriéndonos al procedimiento o práctica seguido actualmente en el Paraguay para obtener la carta de naturalización, cumple decir que no pue-

de ser más inadecuado e inconveniente a los intereses generales.

Inadecuado, porque dificulta con su inútil y excesiva publicidad el que sea solicitada por los extranjeros. La petición tiene que llenar los mismos trámites de un proyecto de ley, otorgándose cada carta de ciudadanía por una ley especial del Congreso.

El hecho, como fácilmente se comprende, puede dar lugar a ingratas discusiones sobre la persona del solicitante. Más todavía, aunque nunca ha ocurrido, se puede llegar a denegar la carta de ciudadanía a honorabilísimas personas u otorgarla a quien no reúne las condiciones exigidas, todo con un criterio eminentemente político, sabido como es que las Cámaras Legislativas proceden, en todas partes, más con un criterio político que eminentemente legal o jurídico.

Inconveniente, también es, porque en vez de reclamarla el peticionante como un simple reconocimiento de un legítimo derecho que la Constitución Nacional le acuerda, debe solicitarla como una concesión graciosa, algo así como una merced, del Congreso de la Nación.

Existen, como se ve, justos motivos para que los extranjeros no se nacionalicen en el Paraguay (15).

(15) Interesante sería averiguar el número de extranjeros que se han naturalizado en los 55 años de vida constitucional. Creemos que no pasarán de 200 personas.

Contemplada la cuestión desde otro punto de vista, se observa que no puede ser más deficiente el control que el Congreso ejerce para la concesión de la carta de naturalización.

La comisión a que compete el estudio del asunto suele limitarse a examinar brevemente los documentos relativos a los antecedentes personales del peticionante, aconsejando, invariablemente, se acuerde la carta de ciudadanía solicitada.

No existe, pues, para el Estado, una garantía cierta, efectiva, de que los requisitos constitucionales se llenan cumplidamente. Conferida la misión a un funcionario capaz y responsable, no hay motivo para pensar que será peor desempeñada tan elevada como honorífica función.

Además, en el supuesto de que el Congreso tuviera que tramitar una gran cantidad — cinco mil solicitudes de cartas de ciudadanía por año, por ejemplo, — fácilmente se comprende que con el sistema vigente no serían despachadas ni la décima parte

Las consideraciones que anteceden nos están demostrando la urgente necesidad de dictar una ley sobre ciudadanía y naturalización.

Es indiscutible que el Congreso Nacional puede dictar esa ley, puesto que tiene la misión de promover la reforma de la legislación que existía anteriormente y está facultado a dar todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes y todos los otros concedi-

dos por la Constitución Nacional (arts. 10 y 72, inc. 24).

Podría argüirse, tal vez, contra esta opinión, que el art. 10 citado se refiere exclusivamente a las leyes de derecho privado, por aquello de que a pesar de la independencia, siguieron rigiendo en el Paraguay, como en las demás naciones sudamericanas, las leyes de Partidas, de Indias, etc. Pero, contra tal manera de interpretar el precepto legal mencionado, puede aducirse el concepto amplio, absoluto, en que está redactado el artículo abarcando en lo que debe reformarse *la legislación que existía anteriormente en todos los ramos*.

Así lo comprendía Alberdi, cuando decía en sus Bases:

“La Constitución debe garantizar la reforma de *“ todos los reglamentos coloniales*, que hacen ilusorios y nominales los derechos....”

Es elemental, por lo demás, que el Congreso puede interpretar un precepto constitucional, con tal que no sean violados los principios, garantías y derechos reconocidos.

Más aún: aventuramos la opinión de que la forma como actualmente se tramita y otorga la carta de naturalización a los extranjeros no está de acuerdo con el precepto constitucional.

En efecto: el art. 35 se limita a determinar las personas que deben ser consideradas como ciudadanos paraguayos (inc. 1º, 2º, 3º y 5º).

El inc. 4º se concreta a establecer que:

“4º — Los extranjeros naturalizados gozarán

“ de todos los derechos políticos y civiles, de
“ los nacidos en el territorio paraguayo, pu-
“ diendo ocupar cualquier puesto, menos el
“ de presidente, vicepresidente de la Repú-
“ blica, ministros, diputados y senadores”.

Como se ve, el art. 35 no establece las condiciones que debe llenar el extranjero que desee obtener la carta de naturalización. Estas condiciones o requisitos las determina el Art. 36, que dice:

“Art. 36. Para naturalizarse en el Paraguay
“ bastará que cualquier extranjero haya re-
“ sidido dos años consecutivos en el país, po-
“ seyendo alguna propiedad raíz o capital en
“ giro, o profesando alguna ciencia, arte o in-
“ dustria. Este término se puede acortar sien-
“ do casado con paraguaya, o alegando y pro-
“ bando servicios en provecho de la Repú-
“ blica”.

El art. 37 de la Constitución tiene, por consiguiente, otro alcance o finalidad, como lo demostramos en el Capítulo III de este trabajo, justificándose por ello más todavía el deber que tiene el Congreso Nacional de dictar la ley reglamentaria del art. 36 de la Constitución, que debe versar sobre la naturalización de extranjeros.



CAPITULO II

La ciudadanía en la antigüedad, en Grecia y Roma. — Ciudadanía y extranjería en la América Colonial. — El extranjero en las Leyes de Indias. — Antecedentes Nacionales: Concepto sobre Ciudadanía de la primera Asamblea Nacional. — La Constitución del año 1813. — El extranjero durante el Primer Consulado y la Dictadura del Dr. Francia durante el Segundo Consulado. — Tratado con la Provincia de Corrientes, de 1841. — La Constitución del año 1844. — Decreto-Ley sobre naturalización, de 1844, y sobre nacionalidad, de 1856.

En los tiempos antiguos, dice Fustel de Coulanges, el *ciudadano* era el hombre que tenía la religión de la ciudad. El *extranjero*, aquel que no tenía acceso al culto, aquel a quien los dioses no protegían y no tenía ni el derecho de invocarlos.

Este concepto de la ciudadanía se explica por el predominio absoluto que tenía en la preocupación de los hombres los asuntos de la religión.

En síntesis, el extranjero era considerado como un enemigo.

En Grecia, los Espartanos llegaban hasta la prohibición absoluta de la entrada de los extranjeros en su territorio, por temor a que los ciudadanos se contagiaban las costumbres y la vida licenciosa de los pueblos que conceptuaban inferiores a ellos.

A pesar del concepto generalizado en la antigüedad de considerarlo como enemigo al extranjero, las leyes de Solon para Atenas admitía la naturalización de los extranjeros, si bien, es cierto, bajo severas restricciones, por el elevado concepto en que tenía la ciudadanía ateniense.

En tiempo de D. Falero — dice Potter, en su obra *Antigüedades Griegas* — residían en el Atica diez mil hombres libres, que eran extranjeros, o de descendencia extranjera o libertos, que no tenían el derecho de ciudadanía, por lo que no podían disponer de sus bienes por testamento.

Según Aristóteles, los bárbaros estaban destinados por la naturaleza a ser esclavos de los griegos.

Sin embargo, Atenas confirió, bajo Clístenes, la ciudadanía no sólo a los habitantes libres del Atica, que no habían tenido hasta entonces la calidad completa, sino también a los extranjeros domiciliados en Atenas y hasta a los esclavos que por la emancipación habían llegado a la situación de huéspedes privilegiados (15 bis).

Pero en ninguna parte como en Roma — dice Ortolan — la idea sobre la ciudadanía ha tenido

(15 bis) Fustel de Coulanges, "*La cite antique*"; W. Wilson, "*El Estado*". T. 1º, pág. 111.

un concepto tan vigoroso, puesto que la institución imprimió su carácter a la familia, al matrimonio, a la propiedad, a la herencia, etc. Constituía, dice el autor citado, un título indeleble en el derecho romano, pues una vez adquirido no se perdía: la justicia podía privar a un ciudadano de la vida, condenándolo a muerte, pero jamás de la ciudadanía (16).

La calidad de ciudadano, de *cives romanus*, facultaba al goce de todos los derechos civiles y políticos. El ciudadano podía elegir y ser elegido para los cargos de las magistraturas, votar en los comicios, etc. Por lo mismo, ciudades enteras luchaban por obtener la ciudadanía romana que, al principio, sólo pertenecía a los *quirites* u originarios de Roma. Sin embargo, los plebiscitos la acordaban, algunas veces, en todo o en parte, sea colectivamente a determinadas ciudades, o individualmente a determinadas personas que merecían tal honor.

Lo opuesto a la “*cives romanus*” eran los extranjeros: *peregrinus*, *hostis* o *barbarus*.

Peregrinus, era el extranjero que se encontraba en Roma por curiosidad, por motivos de estudios, comercio o simplemente por placer (el moderno *tourismo*).

Hostis, eran los habitantes de los países que aún no se habían sometido a Roma, siendo, por tal causa, considerados como enemigos.

(16) M. Ortolán, “*Institutes de L’Empereur Justinien*”, T. 1º, pág. 378.

Barbarus, eran aquellos pueblos que se encontraban fuera de los límites de la civilización y de la geografía romanas (17).

La ley de las XII Tablas establecía el principio: “*adversus hōsten eterna auctoritas*”.

Pero el espíritu conquistador de Roma, el continuo trato con los pueblos sojuzgados, dulcificó el carácter e influyó para que el “*jus gentium*” adquiriera una importancia creciente, favoreciendo la desaparición gradual de las diferencias, dentro del derecho, entre los ciudadanos romanos y los habitantes de los pueblos conquistados. Bajo el imperio, esta tendencia aumentó hasta que el emperador Antonín Caracalla concedió, en 212 antes de la era cristiana, la ciudadanía romana a todos los habitantes del mundo romano.

“*In orbe romano qui sunt, ex-constitutione imperatoris Antonini cives romani effecti sunt*”, dice Ulpiano en un fragmento que ha pasado en el Digesto de Justiniano (18).

Siendo tan patente la influencia del derecho romano en la legislación de los pueblos de Occidente, como la española, que rigió en la América colonial, hemos creído oportuno la somera referencia que antecede

La ciudadanía española se regía, entre otras disposiciones reglamentarias, por las Leyes de Partidas

(17) M. Ortolán, Ob. cit., pág. 170 y 379.

(18) M. Ortolán, Ob. cit., pág. 286; W. Wilson, Ob. cit.

“ Naturaleza tanto quiere decir como debdo
“ que han los homes unos con otros por al-
“ guna derecha razón en se amar et se querer
“ bien. Et el departimiento que ha entre
“ natura et naturaleza es este, que natura
“ es una virtud que face seer todas las cosas
“ en aquel estado que Dios las ordenó: *et na-
“ turaliza es cosa que semeja a la natura*, et
“ que ayuda a seer et a mantener todo lo que
“ decende della”. Ley 1ª, Tít. XXIV, Parti-
da IV.

De diez maneras podía adquirirse la nacionalidad española, según lo legisla la Ley 2ª, Tít. XXIV, Part. IV:

“ La *primera* et la mejor es la que han los
“ homes con su señor natural, porque tam-
“ bien ellos como aquellos de cuyo linaje de-
“ cenden, nascieron et fueron raigados et son
“ en la tierra onde es el señor; la *segunda*
“ es la que viene por razón de vasallaje; la
“ *tercera* por crianza; la *cuarta* por caba-
“ llería; la *quinta* por casamiento; la *sexta*
“ por heredamiento; la *setena* por sacarlo
“ de cativo o por librarlo de muerte o de
“ deshonra; la *ochava* por aforramiento de
“ que non rescibe prescio el que lo aforra;
“ la *novena* por tornarlo cristiano; la *decena*
“ por moranza de diez años que faga en la
“ tierra magüer sea natural de otra”.

Como se vé, la nacionalidad española, dentro del antiguo derecho, se determinaba por la combina-

ción del *jus-soli* (1ª y 2ª de la Ley II) con el *jus-sanguinis* (6ª de la misma Ley II), a más de la naturalización (4ª, 7ª, 9ª y 10ª).

Las Leyes 1ª y 2ª del Tít. XXV, Part. IV, establecían lo que debía entenderse por vasallo y vasallaje.

“ *Señor* es llamado propiamente aquel que
“ ha mandamiento et poderío sobre todos
“ aquellos que viven en su tierra; et a este
“ atal deben todos llamar *señor*, también sus
“ naturales como los otros que vienen a él o a
“ su tierra”.

“ De *señorío* et de *vasallage* son cinco ma-
“ neras: la primera et la mayor es aquella
“ que ha el rey sobre todos los de su señorío,
“ a la que llaman en latín *merum imperium*,
“ que quiere tanto decir en romance como
“ puro et esmerado mandamiento de judgar
“ et mandar los de su tierra” (19).

En la América Colonial regían las leyes a que nos referimos precedentemente, puesto que eran tierras o países que pertenecían a la monarquía española. Y la política de aislamiento a que la metrópoli sometió a las colonias americanas, trajo como consecuencia lógica una serie de disposiciones gubernativas tendientes a impedir o dificultar el acceso a ellas del elemento extranjero.

Practicábase, dice Montes de Oca, el centralismo más completo en materia de gobierno, el mo-

(19) Lic. Gregorio López, “*Las siete partidas del rey Don Alfonso, el sabio*, (Año 1846), T. 2º, pág. 76-78.

nopolio más absurdo en materia de intercambio, la intransigencia más cruel en materia de conciencia. El extranjero debía ser necesariamente perseguido como elemento incómodo e inconciliable con los principios del centralismo político, del monopolio mercantil, de la absorción religiosa (20).

Tan riguroso era el aislamiento, que nadie podía embarcarse para las Indias e islas adyacentes, sin expresa y especial licencia otorgada por el Rey o el Presidente y Jueces de la Casa de Contratación de Sevilla, bajo pena, en caso de violación, de la pérdida por comiso o confiscación de todos los bienes adquiridos (véase Ley 1ª, Tít. 26, Lib. IX).

Y, para asegurar la eficacia de esta prohibición, la Ley 2ª, del mismo Título, establecía que si los Generales y Almirantes permitían embarcarse sin licencia a alguna persona en la flota de su comando, sufrirían la pena de la pérdida del oficio, cargo o empleo.

A los puertos de las colonias sudamericanas sólo era permitido la llegada de buques con pabellón español (21).

Los funcionarios de la Corona tenían el deber y obligación de limpiar de extranjeros las colonias.

(20) M. A. Montes de Oca, “*Lecc. de Derecho Constitucional*”, pág.

(21) Una real orden del 20 de Enero de 1784 disponía que... “ningún buque extranjero, particular, fuese admitido en los puertos de América con pretexto alguno, aunque sea la de hospitalidad y aunque alegue que se va

“ Considerando — dice una ley dictada en
“ 1667 — que no hay prohibición más repe-
“ tida que la de pasar a nuestras Indias
“ extranjeros sin nuestra expresa licencia,
“ como siempre se ha ordenado por muchas
“ cédulas y ordenanzas, y que nada importa
“ tanto como ponerlas en ejecución; tenemos
“ por necesario y conveniente volver a man-
“ dar, y mandamos a los virreyes, presiden-
“ tes y oidores de las audiencias de Lima y
“ Méjico, y a todos los presidentes, audien-
“ cias y gobernadores de ambos reinos, que
“ con toda diligencia y cuidado averiguen los
“ extranjeros que hubiere en los distritos de
“ sus gobiernos y jurisdicciones, y a todos
“ aquellos que no tuvieren licencia dada por
“ Nos, los remitan en la primera ocasión que
“ se ofrezca, registrados a la casa de contra-
“ tación de Sevilla, y *ejecuten en ellos las*
“ *penas impuestas por leyes y ordenanzas,*
“ *precisa e inviolablemente, poniendo tan par-*
“ *ticular desvelo y atención, como la mate-*
“ *ria pide, y guardando sus declaraciones, y*
“ *nos avisen de haberlo ejecutado*”.

Como si no fueran bastantes las disposiciones prohibitivas de carácter general dictadas para im-

“ a pique, y que los de guerra sean admitidos allanándose a
“ recibir guardas abordo y el depósito de efectos en Al-
“ macenes”.

—*Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias* (5ª Edic. 1841), Lib. IX, Tít. 27, Nota pág. 17.

pedir el acceso a las colonias americanas de toda persona, nacional o extranjera, que no tuviera la expresa y especial licencia de venir a ellas, el gobierno español se particularizó con el Paraguay al establecer en la Ley 58, Tít. 26, del Lib. IX:

“ Mandamos que los gobiernos del Paraguay no consientan ni permitan que por aquella Provincia entren ningún extranjero, portugués ni castellano, *por ninguna razón ni causa de que se pretenda valer*, si no llevare especial licencia nuestra, despachada por el Concejo real de las Indias; y *prenda y remita a estos reinos a todos los que sin esta calidad hallare* en su gobernación con sus bienes y haciendas...; *y si el gobernador lo permitiere, se le hará cargo e impondrá culpa grave* en su residencia”.

El extranjero no gozaba sino de un derecho civil muy imperfecto. Estaba sometido a los derechos de “aubana” o “albinagio”, esto es, que sus bienes pasaban a su fallecimiento al patrimonio o cámara real.

Estaba absolutamente prohibido tratar con los extranjeros, “bajo pena de la vida y perdimiento de bienes... — y destitución de los gobernadores, ministros y cabezas principales que hubieren sido culpados en los dichos tratos o pudiéndolos estorbar no lo hubieren hecho, las cuales penas se han de ejecutar irremisiblemente” — como ordenaba la Ley 7ª, Tít. 27, Lib. IX.

Para residir en las colonias españolas de Ame-

rica o para comerciar en ellas, era menester la naturalización. Y, para obtener ésta, “mandamos — “decía le Ley 31, Tít. 27, del Lib. IX — que (el “interesado) haya vivido en estos reinos o en las “Indias por espacio o tiempo de 20 años continuos; “y los 10 de ellos teniendo casa y bienes raíces y “estando casado con natural o hija de extranjero, “nacida en estos reinos o en las Indias”...

El valor de los bienes raíces que debía poseer el postulantes tenían que exceder de 4000 ducados. Dichos bienes tenían que ser adquiridos por acción propia o por donación o herencia, circunstancias, todas, que debían ser comprobadas por escritura pública.

El otorgamiento de la carta de naturalización correspondía, exclusivamente, a la jurisdicción y competencia del Concejo de Indias, y con citación Fiscal...

A pesar de tan severas disposiciones, en el mismo Lib. IX se encuentran algunas excepciones, dictadas especialmente a favor de “aquellos con oficios mecánicos” y de los que habían ayudado en los descubrimientos (Ley 10|13. T. 27. Lib. IX). Nos referimos a lo que se llamaba derecho de composición. Los *extranjeros compuestos* gozaban del derecho de ejercer el comercio sólo en determinados lugares y con caudales propios.

Como se ve, no se ha podido impedir o estorbar en forma más eficaz el progreso de las colonias, puesto que, conforme lo tiene demostrado las ciencias económicas y lo corrobora la experiencia de los

pueblos, sólo la inmigración de brazos y capitales europeos ha contribuído al rápido desenvolvimiento y progreso de estos países.

Justo es reconocer, sin embargo, que esta política de aislamiento, de hostilidad hacia el extranjero, no era practicada sólo por España, como suele afirmarse vulgarmente, para condenar con palabras llenas de acritud la conducta de los monarcas españoles. La misma política la realizaban, con mayor o menor rigor, las demás naciones marítimas o colonizadoras, como Inglaterra y Portugal.

En efecto; mientras Portugal no permitía a los buques extranjeros dirigirse al Brasil, el Parlamento Inglés dictaba en 1651, bajo Cronwell, la famosa Acta de Navegación por la que el comercio de Inglaterra con sus colonias sólo podía hacerse en buques construídos, poseídos y tripulados por ingleses. Los extranjeros no eran admitidos en los puertos ingleses sino para conducir frutos de sus respectivos países, quedando reservado a los ingleses el comercio internacional (22).

Este acto tan severo del Parlamento — decía Berkeley en una carta al Rey Carlos II, en 1671 — que nos prohíbe negociar con quien no sea Inglaterra, es un obstáculo tan grave y desastroso para nuestro comercio y navegación, que no podemos explotar nuestras plantaciones, el cultivo de los frutos que se dan naturalmente en este suelo (23).

(22) E. Laboulaye, *Historia de los EE. UU.*, T. 1º, pág. 105.

(23) E. Laboulaye, *Ob. cit.*, T. 1º, pág. 105-113.

La generalización del sistema, el rigorismo con que se aplicaba, obedecía a múltiples razones de orden político y económico.

En lo político, el espíritu de hostilidad y de desconfianza entre los Estados que sucedía a las largas y exterminadoras guerras; el sistema de los gobiernos absolutos, en los que los principios liberales y humanitarios proclamados posteriormente por la revolución francesa y por la revolución norteamericana no tenían la poderosa influencia que actualmente tienen.

En lo económico, el sistema mercantil con las conocidas desastrosas consecuencias: las guerras aduaneras o de tarifas, las crisis comerciales, industriales y financieras, en síntesis, el empobrecimiento general; porque es una ilusión, un engaño, eso de que la riqueza para los pueblos está sólo en el numerario, y de que se puede realizar, en forma permanente, la exportación de determinados productos manufacturados sin introducir, en cambio, algún otro producto.

Volviendo al tema de este estudio, cumple señalar que al proclamarse la independencia del Paraguay, su población estaba constituida, en lo que a su origen respecta, por cinco clases de habitantes:

- Los *españoles* de nacimiento;
- Los *naturalizados* con carta de ciudadanía española, y los “extranjeros compuestos”;
- Los *criollos* o *patricios*, que eran los nacidos en la Provincia, de padres españoles o extran-

jeros, o mestizos de indígenas y españoles o extranjeros;

—Los *indios* o americanos autóctonos, de los que habían los atraídos a la civilización europea y los en estado salvaje;

—Los *esclavos* de origen africano y mulatos (24).

Proclamada la independencia del Paraguay por el golpe militar del 14 de Mayo de 1811, fué convocado, por los autores del movimiento, un Congreso general de mil diputados que inauguró sus sesiones un mes y dos días después, o sea el 17 de Junio del mismo año. En aquella memorable Asamblea, el Dr. Rodríguez de Francia, uno de los principales caudillos de la emancipación, expuso los fundamentos de la revolución en un bien meditado discurso, en que se destilan las ideas de Rousseau, del Contrato Social; decía:

“El tiempo de la ilusión y engaño ya pasó;
“no estamos en aquellos siglos de ignorancia
“y de barbarie en que casualmente se for-
“maron muchos gobiernos, elevándose por
“grados en los tumultos de las invasiones o
“guerras civiles, entre una multitud de pa-
“siones feroces, y de intereses contrarios a
“la libertad y seguridad individual.”

(24) Los Robertson, escriben: “*Había (en el Paraguai) muy pocos negros i no abundaban los mulatos.—La gran masa de la población era una casta formada de españoles é indígenas, pero el blanco predomina tanto que los naturales parecían descendientes de europeos*”.—*Cartas s. el Paraguay, cit. por M. Domínguez en el folleto “Causas del Heroísmo Paraguayo”*. Asunción, 1903.

“Al presente nos hallamos en circunstancias más favorables. Nuevas luces se han adquirido y propagado, habiendo sido objeto de meditaciones de los sabios y de las atenciones públicas todo lo que está ligado al interés general, y todo lo que puede contribuir a hacer a los hombres mejores y más felices.”

“Se han desenvuelto y aclarado los principios fundamentales de las sociedades políticas; hombres de talento han analizado todos los derechos, todas las obligaciones, todos los intereses de la especie humana; han dado a las verdades de la moral y de la política una evidencia de que no parecían ser susceptibles, y no han dejado a la mala fe y a la corrupción otro auxilio que el de abusar vergonzosamente de las palabras para contestar la certidumbre de los principios. Aprovechemos de tan feliz situación, y la memoria de nuestras pasadas desdichas, aflicciones y abatimientos no nos servirán sino de lección y experiencia para evitarlos en lo venidero, formando una valla inexpugnable contra los abusos del poder.”

“El terreno está desmontado; ahora es preciso cultivarlo sembrando las semillas de nuestra futura prosperidad.”

“Todos los hombres tienen una inclinación invencible a la solicitud de su felicidad, y

“ la formación de las sociedades y estableci-
“ mientos de los gobiernos no han sido con
“ otro objeto, que el de conseguirlo median-
“ te la reunión de sus esfuerzos. *La natura-*
“ *leza no ha criado a los hombres esencial-*
“ *mente sujetos al yugo perpetuo de ninguna*
“ *autoridad civil; antes bien, hizo a todos*
“ *iguales y libres de pleno derecho.*”

“ ”

“ *Todo hombre nace libre, y la historia de*
“ todos los tiempos siempre probará que sólo
“ vive violentamente sujeto, mientras su debi-
“ lidad no le permite entrar a gozar los dere-
“ chos de aquella independencia con que le
“ dotó el Ser Supremo al tiempo mismo de
“ su creación.”

“ ”

“ En todo caso, estamos prontos y *resigna-*
“ *dos a conformarnos con la voluntad gene-*
“ *ral*, lisonjeándonos que éste Congreso dará
“ ese ejemplo de cordura y circunspección;
“ haciendo un uso justo, moderado y pruden-
“ te, de esta preciosa libertad en que se le
“ constituye; pero de tal modo que puesta la
“ patria a cubierto de toda oculta asechanza
“ y de los tiros de la arbitrariedad y despo-
“ tismo, se ponga en estado de ser verdadera
“ y perfectamente feliz.”...

“ Escrito en lenguaje sobrio y enérgico — como
“ dice el Dr. Báez — como para herir el entendi-
“ miento, ese discurso estaba encaminado a desper-

“tar en los ánimos de los congresales ideas de
“libertad y, particularmente, la idea de la inde-
“pendencia, y a inflamar sus sentimientos patrió-
“ticos.”

“Y debió producir mucho efecto en ellos, porque
“dice Molas que “todos los ciudadanos que habían
“concurrido al Congreso, manifestaron la más
“tierna y dulce sensación *al contemplarse libres y*
“*con plena facultad de votar*, según su conciencia,
“sobre la forma de gobierno que los había de regir
“en adelante, y que estuvieron firmemente persua-
“didos que el supremo árbitro del Universo favo-
“recería su causa, y el ángel tutelar del Paraguay
“velaría sobre ellos.”

“La expresada asamblea acordó crear una nueva
“Junta de Gobierno, que, como la anterior, estuvo
“dirigida por el mismo Francia.”

“

“Disuelto el Congreso, entró a funcionar la nue-
“va Junta. La primera decisión que le hizo tomar
“Francia, fué la de desistir de enviar diputado
“alguno a Buenos Aires. La segunda fué hacerle
“aprobar la siguiente nota que debía pasarse a la
“Junta porteña, y *que reproduce la doctrina de la*
“*soberanía originaria de los pueblos:*”

“Exemo. señor: Cuando esta Provincia opuso sus
“fuerzas a las que vinieron dirigidas de esa ciudad,
“*no tuvo ni podía tener otro objeto que su natural*
“*defensa*. No es dudable que, abolida y deshecha
“la representación del poder supremo, *recae éste o*
“*queda refundido naturalmente en toda la nación.*

“ Cada pueblo se considera entonces en cierto modo participante del atributo de la soberanía, y aun los ministros públicos han menester su consentimiento o libre conformidad para el ejercicio de sus facultades. De este principio tan importante, como fecundo en útiles consecuencias, y que V. E. sin duda lo habrá reconocido, se deduce ciertamente, que reasumiendo los pueblos sus derechos primitivos, se hallan todos en igual caso, y que igualmente corresponde a todos velar sobre su propia conservación.”

.....

“Alfin las cosas de la provincia llegaron a tal estado, que fué preciso que ella se resolviese seriamente a recobrar sus derechos usurpados para salir de la antigua opresión en que se mantenía, agravada con nuevos males de un régimen sin concierto, y para ponerse al mismo tiempo a cubierto del rigor de una nueva esclavitud de que se sentía amenazada...”

.....

“Este ha sido el modo como ella por sí misma (la provincia del Paraguay) y a esfuerzos de su propia resolución, se ha constituído en libertad y en el pleno goce de sus derechos; pero se engañaría cualquiera que llegase a imaginar que su intención había sido entregarse al árbitro ajeno y hacer dependiente su suerte de otra voluntad. En tal caso nada habría adelantado, ni reportado otro fruto de su sacrificio que el cambiar una cadena por otra y mudar de amo. Ni nunca V. E.,

“apreciador justo y equitativo, extrañará que en
“el estado a que han llegado los negocios de la na-
“ción, sin poderse divisar el éxito que puedan te-
“ner, el pueblo del Paraguay desde ahora se mues-
“tra celoso de su naciente libertad, después que ha
“tenido valor para recobrarla. Sabe muy bien que
“si la libertad puede a veces adquirirse o conquis-
“tarse, una vez perdida, no es igualmente fácil
“volver a recuperarla” (25).

Con motivo de la convocatoria de otro Congreso de mil diputados, que debía reunirse en Agosto del año 1813, la Junta de Gobierno subscribió con fecha 30 de Junio del mismo año, la siguiente declaración:

“Consiguientemente a la determinación de un
“Congreso General de la Provincia, acordada en 4
“de este mes (1813), acordamos los infrascritos
“Presidente y Vocales que el día 9 del próximo
“venidero Agosto se celebre dicho General Con-
“greso, cuyo número de sufragantes no baje de mil
“individuos de votos enteramente libres, y que sean
“naturales de esta Provincia. Siendo este Congre-
“so Soberano como debe serlo, no se le pongan aho-
“ra ni después, trabas, impedimentos, ni restric-
“ción alguna; que siendo esencial así el *derecho*
“del sufragio en todos los ciudadanos de todo pue-
“blo libre como la voluntad general libremente ex-
“presada para la validación y subsistencia de cual-

(25) C. Báez, “*Ensayo sobre el doctor Francia y la Dictadura en Sud América*, (Asunción, 1910), pág. 58-61.

“ quier establecimiento (gobierno) o disposición
“ concerniente a la misma Provincia.... Si la
“ Provincia por su transformación política volvió
“ de su antigua servidumbre a su libertad nativa;
“ si este tránsito es el recobro y restauración de sus
“ derechos perdidos, o largo tiempo usurpados; y
“ si estos derechos residen esencial y originariamen-
“ te en todos los ciudadanos, la Junta cree que en
“ la resolución presente ha conciliado estos obje-
“ tos en toda su extensión imaginable y compati-
“ ble con las circunstancias.... De este modo el
“ Congreso abrirá un período importante no sólo
“ por la grave e interesante ocurrencia que lo mo-
“ tiva, sino por ser ésta la vez primera en que to-
“ dos generalmente entran al inestimable goce de
“ sus derechos inmutables, sufragando al nombra-
“ miento de los mismos que han de reunirse a tra-
“ tar de los grandes intereses del Estado.... Pre-
“ vendrá usted también que son convocados y lla-
“ mados generalmente y sin distinción *todos los mo-*
“ *radores vecinos*, pues siendo tan universal co-
“ mo preeminente y de una prerrogativa superior
“ el uso y ejercicio de los derechos esenciales e im-
“ prescriptibles de la libertad natural del hombre,
“ no pueden, ni deben prevalecer las distinciones
“ particulares limitadas a determinadas perso-
“ nas...” “Asunción y Agosto 26 de 1813.—*Ful-*
“ *gencio Yegros, doctor José Gaspar de Francia,*
“ *Pedro Juan Caballero. — Mariano Larios Gal-*
“ *ván, secretario*”.

“En el antecedente documento insiste la Junta,

“ inspirada por Francia, en que la soberanía reside de originamente en todos los ciudadanos que representen la voluntad general” (26).

Por las transcripciones que anteceden, se ve que el primer gobierno que ha tenido el Paraguay independiente, ha considerado como ciudadano de la República a los *naturales de la antigua Provincia*, vale decir, a los nacidos dentro del territorio, esto es, a los *criollos* o *patricios* y a los *indígenas* reducidos a la vida civilizada, puesto que *únicamente éstos y aquéllos podían ser elegidos como diputados* al Congreso del año 1813. Es cierto que el decreto recordado convoca, *sin distinción, a todos los moradores vecinos....*, pero era al solo efecto de votarlos a los que podían ser elegidos. En los albores de nuestra independencia, pues, se practicó el mismo principio que en la actualidad rige en ciertos Estados de la Unión Norte-Americana, esto es, que se acuerda el derecho de votar a los no ciudadanos, mejor dicho a los extranjeros que reúnan en su persona ciertos requisitos (27).

La interpretación que damos a la frase “*naturales de la República*” que empleara la Junta de Gobierno, está fundada en el decreto del 19 de Junio de 1811, que establece que “los empleos conse-

(26) C. Báez, obra citada, pág. 79-80.

(27) E. S. Zeballos, *La Nationalité*, T. I, pág. 708.

Según Bryce, en quince Estados, es permitido votar a los extranjeros simplemente domiciliados, sin exigírseles a tal fin la naturalización. Autor cit. *La Republique Americaine*, ed. 1900, T. 1º, pág. 460 y 462.

“ jiles, políticos, civiles y militares, de Hacienda o
“ de cualquier género de administración, se pro-
“ vean *en los naturales o nacidos en esta Provin-*
“ *cia* sin que nunca puedan ocuparse por los espa-
“ ñoles europeos, a menos que la misma Provincia
“ determinase otra cosa; *pero en lo sucesivo todo*
“ *americano, aunque no sea nacido en esta Provin-*
“ *cia*, quedará enteramente apto para obtener dicho
“ cargo, siempre que uniforme sus ideas con las de
“ este Gobierno”.

Con posterioridad, el 21 de Diciembre de 1815, el doctor Francia dictó el Decreto-Ley que dice:

“No pudiendo por más tiempo resistir a los la-
“ tidos de mi conciencia sobre la continuación de
“ *algunos empleados extraños*, que aún permane-
“ cen en la ocupación y goce de oficios y cargos de
“ consecuencia con rebaja de la estimación y jus-
“ ta consideración debida a *los Patricios benemé-*
“ *ritos*, y muy idóneos para obtenerlos: he toma-
“ do con esta fecha la resolución, que expresa el
“ Decreto del tenor siguiente:

“Desde que la Provincia recobró el uso y ejer-
“ cicio de su libertad imprescriptible, ha sido la vo-
“ luntad general constantemente manifestada, el
“ *que los oficios y empleos de cualquier clase se*
“ *ocupen y sirviesen por los patricios* (naturales),
“ siempre abatidos, vilipendiados y postergados
“ hasta entonces. Toda razón, todos los derechos, y
“ la naturaleza misma, *reclaman la preferencia de*
“ *los hijos de un país* a la ocupación de los cargos
“ honrosos y lucrativos, *que ofrece y proporciona*

“ *su suelo nativo*. Penetrada de esta verdad la
“ Asamblea general de 1811 dejó establecida en el
“ particular una disposición muy conveniente. Pe-
“ ro no es la justicia sola la que conduce y obliga
“ a esta determinación. La seguridad general, la
“ salud pública, la consolidación de la libertad e
“ independencia civil de la República, constituyen
“ un doble motivo, que hace tan urgente como im-
“ portante esta medida en la presente crisis. Bien
“ sabida es la influencia, que en todas partes tie-
“ nen los empleados en lo que es opinión pública.
“ Si por la oposición o indiferencia de aquellos lle-
“ gase ésta a debilitarse, o a contrariar al sistema
“ adoptado, y al nuevo orden establecido, fácil es
“ calcular los males que entonces resultarían en la
“ sociedad. Es preciso que los funcionarios públi-
“ cos francos, si se admiten, o consienten, sean tam-
“ bién notoriamente adheridos a la causa sagrada
“ de nuestra regeneración política, y ningún Go-
“ bierno por poco ilustrado que fuese, podría dis-
“ pensarse de velar sobre este punto, que tanto in-
“ fluye en el bien y en la conservación general del
“ Estado. De lo contrario se expondría éste a abri-
“ gar y alimentar en su propio seno a los enemigos
“ de su felicidad, tal vez ocultos o disfrazados con
“ mengua de la justa consideración y atención de-
“ bida a los *patricios*, y con daño y menoscabo de
“ sus derechos. En esta virtud el Escribano de Go-
“ bierno notificará a Don Antonio Miguel de Ar-
“ cos y a Don José Baltazar Casafús, que desde
“ luego cesan en los empleos y oficios eclesiásticos

“ que ejercen, los cuales quedaran vacantes, a menos que obtengan de este Supremo Gobierno *carta de incorporación y ciudadanía, acreditando a este fin de un modo inequívoco*”, y con pruebas incontestables, que han tenido una adhesión constante y decidida a la actual constitución, libertad a independencia absoluta de esta República, reconociendo manifiestamente, *que es justa la demanda que hacen los Americanos de su Patria y libertad contra toda dominación exterior*. Dada en la Capital de la Asunción a veinte y uno de Diciembre de mil ochocientos quince” (28).

La nacionalidad, pues, se ha determinado en el Paraguay desde el momento mismo de su emancipación política, por el principio absoluto del *jus soli*.

La primera Constitución política del Paraguay, del año 1813, el *Reglamento de Gobierno*, como se

(28) C. Báez, obra citada, pág. 86-87.

Oportuno es recordar que el mismo principio, mejor dicho, las mismas reglas, regían en otras repúblicas sudamericanas recién emancipadas.

La Junta de Gobierno de Buenos Aires dictó, en efecto, con fecha 3 de Diciembre de 1810 un Decreto Ley en el que se establecía:

“1º Desde la fecha del presente decreto ningún tribunal corporación o jefe civil, militar o eclesiástico, dará empleo público a personas que no hayan nacido en estas provincias.

“2º Todo pretendiente a un empleo público deberá probar su ciudadanía natural por el correspondiente acto de nacimiento.

titula, era —como dice el doctor Blas Garay, en su *Historia del Primer Consulado* — “una constitución singularísima que únicamente se mostraba preocupada de fundar un poder fuerte, concentrando en sus solas manos, cuanto medio coercitivo era posible concederle, haciendo a un mismo tiempo de legislador, Juez y ejecutor y olvidando por completo defender a los ciudadanos contra los desmanes y desafueros de tan temible cuanto ilimitada autoridad”.

Este raro estatuto político, contrariamente a lo que se establece en documentos análogos, no se preocupó de la distribución y equilibrio de los poderes del Estado; de las atribuciones o facultades de los funcionarios públicos; de la forma cómo debía constituirse y administrarse el tesoro nacional, de la cualidad de ciudadano, de sus derechos y deberes, etc., etc.

“3º Las declaraciones anteriores comprenden todos los empleos de carácter eclesiástico, civil, político, militar, judicial, financiero, municipal, etc.

“4º Exceptúanse los empleados europeos que se hallan actualmente en funciones, quienes conservarán sus empleos, en tanto demuestren su amor al país y su adhesión al gobierno.

“5º Los ingleses, los portugueses y otros extranjeros que no estén en guerra con nosotros, podrán venir libremente al país; ellos gozarán de todos los derechos de los ciudadanos, y todos aquellos que se dedicaren a las artes y a la cultura de los campos, serán protegidos por el gobierno. — Buenos Aires, Diciembre 3 de 1810”.

Se limitó a poner la administración y el poder público en manos de dos funcionarios con el título romano de Cónsules, que tenían el deber, indudablemente patriótico, de conservar, defender y asegurar la independencia de la República como principal o única misión.

Cuanto a legislación, siguió en vigencia las leyes anteriores: la de Partidas y la Recopilación de Indias, en lo pertinente.

La nacionalidad, la ciudadanía y la naturalización, pues, se rigieron por los preceptos de estas leyes.

Por lo expuesto, y a pesar de los principios liberales en que fuera fundada la independencia del Paraguay, el gobierno dictatorial del Doctor Rodríguez de Francia, por el espíritu suspicaz y desconfiado de este gobernante, lo llevó nuevamente al país al más absoluto y absurdo de los aislamientos prohibiendo la entrada o inmigración de extranjeros, y, la salida al exterior de los domiciliados dentro de la República, sin distinción, fuesen nacionales o extranjeros (29).

(29) Con ser violatorio de los principios que rigen el derecho privado en los pueblos civilizados, los decretos del doctor Francia eran, sin embargo, más humanitarios que los que dictaba la Junta de Buenos Aires, de aquella época.

Por un decreto del 12 de Septiembre de 1813, la Junta de Buenos Aires, disponía:

“Art. 1º — Es prohibido a los españoles europeos reunirse en número de más de tres personas. Todos los que

Exigíase a los extranjeros contribuciones forzosas, a más de mantener en vigor el derecho de *aubana*, esto es, la prohibición de testar y recibir herencia por testamento: el heredero legal de los extranjeros era el Fisco, salvo que tuvieran hijos, nacidos y domiciliados en la República.

Estaba prohibido a los extranjeros, mejor dicho, a los europeos, contraer matrimonio con hija del país de raza blanca, bajo pena de extrañamiento y confiscación de bienes; sólo podían casarse con las “indias de los pueblos, mulatas conocidas y reputadas públicamente como tales y con negras” (30).

infringieren esta disposición, se les sorteará y serán indefectiblemente fusilados. En el caso de reuniones más numerosas sospechosas de maquinar contra la patria, nocturnas o en lugares secretos, todos los concurrentes sufrirán la pena de muerte.

Art. 2º — Es prohibido a los españoles montar a caballo en la capital, en la jurisdicción municipal, sin una autorización especial del jefe de policía bajo so pena de muerte o de otras que se consideren justas según la calidad de las personas.

Art. 3º — Todos los que son detenidos en el momento de huir para Montevideo o para otros lugares ocupados por los enemigos del país, sufrirán inmediatamente la pena de muerte. Sufrirán la misma pena los que, sabiéndolo no denunciaren a los que tuvieran la intención de escaparse. — Buenos Aires, 23 Diciembre 1812. — *Chiclana*. — *Sarratea*. — *Pueyrredón*. — *Pérez y Rivadavia*, secretarios.” (Ver A. Alcorta, *Curso de Derecho Internacional Privado*, T. 1º, p. 299 y siguientes).

(30) Parecidas prohibiciones y leyes restrictivas regían en los países del Río de la Plata. — Una ley del año 1819

Muerto el Doctor Rodríguez de Francia, el 20 de Septiembre de 1840, se constituyó, como es sabido, un gobierno provisional que se tituló “Junta de Gobierno Provisorio”, el que fué derrocado el 22 de Enero de 1841, por el motin militar encabezado por el subteniente Dionisio Ojeda y el sargento Romualdo Duré. La nueva Junta constituída por los revolucionarios presidida por el Alcalde Juan José Medina, fijó el día 19 de Abril de ese año para la reunión de “un Congreso de quinientos diputados *naturales del Paraguay, electos libremente*, cuya voluntad debía ser la suprema ley en todos sus establecimientos y determinaciones”. Por sucesos posteriores, la fecha del Congreso fué fijada para el 12 de Marzo del mismo año 1841 (31).

La Asamblea se constituyó en la fecha indicada, siendo presidida por Don Carlos Antonio López. Llenó su cometido de asamblea constituyente creando el gobierno provisional por tres años, conocido en nuestra historia con el nombre de Segundo Consulado.

referente a herencias y legados de españoles imponía como impuesto hasta el 50 o/o de lo inventariado. — Un decreto de Pueyrredón del 11 de Abril de 1817 exigía de los españoles obtener permiso especial para contraer matrimonio. — Leyes del año 1821 y 1829 imponían el servicio militar a los extranjeros, de lo que surgieron varios conflictos diplomáticos. V. Francisco Dura: *Naturalización y Expulsión de Extranjeros*, págs. 47 y sgtes.

(31) B. Garay, *Historia del Paraguay*, pág. 173-175; B. Garay, *La Revolución de la Independencia del Paraguay* (Madrid, 1897).

Este gobierno inició sus gestiones con actos que denotaban un propósito reaccionario, contra el sistema dictatorial, despótico, del Doctor Rodríguez de Francia.

Dió libertad a la mayoría de los presos y, juntamente con otras acertadas medidas gubernativas, inició gestiones de orden diplomáticas tendientes a sacar al Paraguay del aislamiento en que se encontraba.

Subscribió con los Plenipotenciarios del Gobierno de Corrientes, Don Gregorio Valdez y Don Juan Mateo Arriola, con fecha 31 de Julio de 1841, dos Tratados: uno, “*de Amistad, Comercio y Navegación*”, y otro, “*provisorio de límites entre el Paraguay y el Estado de Corrientes*” (32).

(32) Tratado de amistad, comercio y navegación con Corrientes, de 6 de Setiembre de 1841.

“Los infrascriptos Cónsules de la República del Paraguay, habiendo examinado, y hallado en debida forma los poderes de Don Gregorio Valdez y Don Juan Mateo Arriola enviados extraordinarios del Excmo. Gobierno de Corrientes cerca de éste, para acordar un tratado de amistad, comercio y navegación han conferenciado y convenido los artículos siguientes:

“*Artículo Primero.* — Queda establecida la amistad y recíproca libertad de comercio entre los súbditos de ambos gobiernos y en esta conformidad los buques comerciantes venidos legalmente de Corrientes llegarán con toda seguridad, y libertad hasta la Villa del Pilar”.

“*Artículo Segundo.* — Las transacciones mercantiles serán libres entre los contratantes”.

Llama la atención el espíritu de verdadera confraternidad, de leal americanismo, en que está con-

“*Artículo Tercero.* — El comerciante podrá pedir si le conviniere el depósito en los almacenes del Estado, del todo o parte de su factura con calidad de pagar el dos por ciento y de reembargar libre de otro derecho todo lo que no vendiere al tiempo de su regreso.

“*Artículo Cuarto.* — Los hijos de ambos estados serán considerados como naturales de uno y otro país para el uso libre de sus derechos”.

“*Artículo Quinto.* — Los pasos de la Patria, Yabebiri e Itapúa, se han señalado para el comercio terrestre”.

“*Artículo Sexto.* — El mismo paso de la Patria de esta banda y de la otra el de Garayo se destinan para la correspondencia oficial de ambos gobiernos que acordarán las providencias convenientes a este objeto y el de la comunicación particular”.

“*Artículo Séptimo.* — Continuarán los derechos de introducción y extracción conforme a las respectivas planillas que se han manifestado para ambas partes contratantes, a excepción de los relativos a la yerba, tabaco en rama y manufacturados en cigarros, miel, dulces y caña que ajustarán por notas oficiales los mismos gobiernos contratantes”.

“*Artículo Octavo.* — Queda a salvo el derecho de los cónsules a las comunicaciones oficiales de otros gobiernos, en cuanto no se oponga a este tratado”.

“*Artículo Nono.* — El presente tratado será ratificado por el Excmo. gobierno de Corrientes dentro del término de un mes de su fecha.”

cebido el Art. 4º del tratado de amistad, que dice:
“Los hijos (nacionales) de ambos Estados *serán*

“En testimonio de todo lo cual lo firman por duplicado a los fines consiguientes los cónsules con su secretario, y los enviados exrtaordinarios, sellándolos con sus sellos respectivos”.

“Hecho en la Asunción del Paraguay a treinta y uno de Julio de mil ochocientos cuarenta y uno”.

“*Carlos Antonio López. — Mariano Roque Alonso. — Vicente Roa, secretario. — Gregorio Valdez. — Juan Mateo Arriola*”.

Tratado provisorio de límites entre el Paraguay y el Estado de Corrientes, de 6 de Setiembre de 1841.

“Los infrascriptos cónsules de la República del Paraguay, habiendo examinado los poderes de D. Gregorio Valdez y D. Juan Mateo Arriola enviados extraordinarios del Excmo. Gobierno de Corrientes cerca de este sobre los derechos territoriales de ambos países, tuvieron presente que los primeros sin especial delegación del Soberano Congreso general y los segundos como representantes sólo de una parte integrante de la República Argentina no pueden establecer una demarcación fija y deseando afirmar con mayores vínculos el tratado de amistad, comercio y navegación que han concluído este día, convinieron provisionalmente entre tanto que ambas partes invistan plenos poderes para un acuerdo definitivo en los artículos siguientes”:

“*Artículo Primero. — Queda reconocido por pertenencia de la República a esta banda del Paraná el territorio que corresponde a la jurisdicción de la Villa del Pilar hasta Yabebiri*”.

considerados como naturales de uno y otro país para el uso libre de sus derechos”.

Este tratado, no hacía sino ratificar las declara-

“*Artículo Segundo.* — Sin perjuicio de los derechos de la República del Paraguay y de la Argentina se reconoce como perteneciente a la primera las tierras del campamento llamado San José de la Rinconada y de los pueblos extinguidos Canclaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio Miní, Corpus y San José hasta la tranquera de Loreto: y por el de la segunda: San Carlos, Apóstoles, Mártires y los demás que están en la costa del Uruguay”.

“*Artículo Tercero.* — Los emigrados que se hallan en los territorios contenidos en el artículo antecedente no serán molestados por las partes contratantes siempre que guarden las leyes respectivamente establecidas”.

“*Artículo Cuarto.* — La Isla de Apipé o Borda y las que se hallan más cerca al territorio de Corrientes en el río Paraná quedan a su favor, y al de la República las que estén en igual caso”.

“*Artículo Quinto.* — El presente tratado será ratificado por el Excmo. Gobierno de Corrientes dentro del término de un mes de su fecha”.

“Y en testimonio de todo lo cual lo firman por duplicado a los fines consiguientes los cónsules con su secretario, y enviados extraordinarios, sellándolo con sus sellos respectivos”.

“Hecho en la Asunción del Paraguay a treinta y uno de Julio de mil ochocientos cuarenta y uno”.

“*Carlos Antonio López.* — *Mariano Roque Alonso.* — *Vicente Roa,* secretario. — *Gregorio Valdez.* — *Juan Mateo Arriola*”.

Archivo diplomático y consular (volumen I), Asunción, 1908.

ciones que hiciera el primer gobierno del Paraguay autónomo, respecto a los argentinos (33).

El Paraguay, pues, practicó, a su nacimiento a la vida independiente, una forma de la nacionalización automática, teoría del que es destacado sostenedor y propagandista el ilustrado publicista argentino Doctor Garay.

De acuerdo al tratado suscrito con Corrientes, los nacionales de uno y otro Estado contratante, tenían el goce de todos los derechos políticos y civiles en cualquiera de los dos Estados.

No de otra manera puede entenderse el amplio concepto de considerarlos como *naturales*, vale decir, como ciudadano natural “*para el uso libre* (sin excepciones ni cortapisas) *de sus derechos*”. Estos derechos sólo podían ser los civiles y políticos.

El 13 de Marzo de 1844 se reunió otro Congreso, con el carácter de asamblea constituyente y dictó, la “Ley que establece la Administración Política de la República del Paraguay”. Es la llamada Constitución del año 1844.

Refiriéndose a esta ley, dice el Coronel Centurión:

“Si bien esta especie de Constitución distribuyó

(33) “Los hijos de Buenos Aires son y deben reputarse del Paraguay, y los hijos de esta Provincia son “y deben mirarse también como *patricios* de Buenos Aires. “Serán nuestros enemigos todos los que se declarasen contra aquel pueblo hermano...” — Asunción del Paraguay, 14 de Octubre de 1811”. Archivo Diplomático y Consular del Paraguay, Tomo 1º, pág. 9.

“ el poder en sus tres conocidas ramas, los detalles de la misma los hacían converger en una sola persona, que era el Presidente. — Quedó erigido el absolutismo en ley y la arbitrariedad en principio....” (34).

El Art. 1º del Título 2º de esta Constitución preceptúa, que: “El Congreso Nacional se compondrá por ahora de doscientos Diputados *elegidos en la forma hasta aquí acostumbrada debiendo ser ciudadanos* propietarios de las mejores capacidades y patriotismo”.

El Art. 2º del Título IV, referente al Poder Ejecutivo, dispone: “Ninguno podrá ser electo Presidente de la República *que no sea ciudadano del fuero común natural* de la República del Paraguay y que además tenga 45 años de edad, capacidad, honradez y patriotismo conocidos....”

La Constitución a que venimos refiriéndonos se limita a establecer que los cargos de Presidente de la República y de Diputados al Congreso, deben ser ocupados sólo por *naturales o ciudadanos* de la República, por lo que, lógico es concluir, que se refiere y remite a las leyes y costumbres que venían rigiendo la vida política de la nación.

Esta Constitución, a pesar de sus defectos, constituía un notable progreso institucional para el país.

Entre las disposiciones de carácter general contiene esta hermosa declaración de principios.

“Los hombres son de tal manera iguales ante la

(34) Coronel J. C. Centurión, *Memorias*.

“ ley, que ésta, bien sea penal, preceptiva o tuitiva
“ debe ser una misma para todos, y favorecer igual-
“ mente al poderoso que al miserable”.

Es el mismo precepto del Art. 110 del Estatuto Provisional para las “Provincias Unidas del Río de la Plata” del 5 de Mayo de 1815.

El Título X se refiere a los derechos de libre circulación de las personas, al comercio, la instrucción pública, la prensa, etc.

Por el Art. 10 de este título se abolió el tráfico de esclavos.

Un Decreto - Ley del 2 de Diciembre del mismo año 1844, establece las reglas de naturalización de extranjeros.

Para poder naturalizarse en la República era menester tener veintidós años de edad, seis de residencia, y poseer bienes raíces o capital en algún establecimiento industrial o ejercer alguna profesión útil.

La ley concedía sin embargo, por excepción, el derecho de naturalización a determinadas personas.

La autoridad que entendía en la petición y otorgamiento de la carta de naturalización era “*el magistrado civil del lugar*”; pero, antes de recibir el postulante la carta de naturalización debía prestar juramento de obediencia y fidelidad a las leyes y al Gobierno de la República.... (35).

(35) Decreto del 2 de Diciembre de 1844. Sobre naturalización:

“Artículo I. — Para que el extranjero pueda tener
“ carta de naturalización, es necesario que pruebe:

Teniendo en consideración, las ideas dominantes de la época en que ésta ley fué dictada y los problemas planteados al gobierno de la República por la obstinación del dictador argentino Rosas en no querer reconocer la independencia nacional, es indiscutible que la ley de naturalización del año 44 ha sido bastante liberal y adelantada.

Gozando los naturalizados de todos los derechos civiles y políticos y de la protección nacional en caso necesario como si fueran originarios de la re-

“1º Que es de veintidós años cumplidos.

“2º Que se halla en goce de los derechos civiles como
“ciudadano del país a que pertenece, salvo que
“que lo hubiese perdido por motivos meramente
“políticos.

“3º Que haya residido en la República por seis años
“consecutivos.

“4º Que posea bienes raíces dentro del territorio de la
“República, o que tiene parte en fondos de algún
“establecimiento industrial, o ejerce alguna pro-
“fesión útil.

“Artículo II. — Pueden solicitar carta de naturalización
“independientemente de la prueba de los requisitos ante-
“riores:

“1º Los inventores o introductores de cualquier indus-
“tria.

“2º Los que tengan adoptado un paraguayo o para-
“guaya.

“3º Los que hicieren una campaña en defensa de la
“la República, o fuesen heridos en servicio de
“ella.

“4º Los que por sus talentos o capacidades fuesen ad-
“mitidos a los empleos literarios o industriales de
“la República.

“5º Los que prestaren cualesquiera servicios relevantes.

pública, los equiparaba a los ciudadanos naturales “con la reserva hecha por las leyes fundamentales”, que eran las referentes a la Presidencia de la República y la representación nacional.

Los naturalizados, pues, podían ocupar cargos en la magistratura, en la Administración pública, en la milicia, etc.

Como documento institucional, es innegable que la Constitución de 1844, contenía grandes lagunas. El gobierno de Don Carlos Antonio López trató de

“Artículo III. — Antes de solicitar carta de naturalización harán una declaración en escritura auténtica ante el magistrado civil del lugar, por la cual se obliguen a residir en la República y no salir de ella sin permiso del Supremo Gobierno y en la misma ocasión declararán también su naturaleza, estado, número de hijos, y sus nombres, sexo y edad de ellos, e instruirán su pedimento con copia de dicho documento.

“Artículo IV. — Los extranjeros casados con paraguayas pueden solicitar carta de naturalización por un simple memorial con concepto a las declaraciones que ordena el artículo anterior.

“Artículo V. — Dada la carta de naturalización el extranjero no la recibirá sin prestar primero en la Secretaría de Gobierno juramento de obediencia y fidelidad a las leyes y al Gobierno de la República, de reconocerla por su patria, defenderla y cumplir las obligaciones de buen ciudadano.

“Artículo VI. — Obtenida la carta de naturalización, gozarán desde entonces de todos los derechos civiles y políticos, y protección nacional como si fuesen oriundos de la República, con la sola reserva hecha por las leyes fundamentales del Estado”. Véase *El Paraguaya Independiente*.

remediar en parte esas deficiencias por medio de Decretos que tenían fuerza de ley. Entre aquellos debemos mencionar el referente a la nacionalidad, del 10 de Julio de 1856, que disponía:

“Art. 1º — Es ciudadano paraguayo el que nace en la República del Paraguay, e igual en derechos y deberes a todo ciudadano”.

“Art. 2º — Exceptúanse de la disposición del artículo precedente los hijos de los agentes diplomáticos o consulares nacidos en el territorio paraguayo”.

“Art. 3º — En conformidad a lo dispuesto en el artículo primero, los hijos de extranjeros casados en el país, no podrán ser inscritos en la matrícula de ningún consulado extranjero” (36).

Aunque algo ambigua la frase “igual en derechos y deberes a *todo ciudadano*”, se comprende que la nacionalidad quedó expresamente regida por el principio del *jus-soli*, lo que viene a corroborar que éste ha sido el principio dominante en la determinación de la nacionalidad en el Paraguay.

(36) Véase *El Paraguayo Independiente*.



CAPITULO III

Nacionalidad y ciudadanía: Diferencia entre ambos conceptos; ídem entre Nación y Estado, población y pueblo.

El Art. 35 de la Constitución Nacional: “jus-soli” y “jus-sanguinis”: conflictos de cancelle-rías que plantean. — Examen del inc. 1º del Art. 35: antecedentes nacionales y estudio comparado de las Constituciones Americanas.

El “jus sanguinis” y los incs. 2º y 3º del Art. 35 de la Constitución: diversos casos de opción que pueden presentarse. — Lo que debe entenderse por la “ciudadanía natural” a que se refiere la Constitución. — Sentido del Art. 37. — Legislación comparada.

La Constitución Nacional confunde el concepto *nacionalidad*, que es el vínculo jurídico - moral que une la persona a la nación de que forma parte, con el concepto *ciudadanía*, que es más bien el ejercicio de la potestad política.

Es indispensable, dice un prestigioso autor, establecer las distinciones fundamentales que existen entre los términos científicos que vulgarmente se

emplean como sinónimos, para evitar lamentables confusiones (37).

Las ideas de *nación* y *estado*, *población* y *pueblo*, *nacionalidad* y *ciudadanía*, no son idénticas.

La *nación* es el grupo humano que proviene, generalmente, de un mismo origen etnográfico, vive sobre un territorio dado, tiene la misma costumbre y está unido por un mismo ideal de convivencia y una común historia de esfuerzos, de glorias y sacrificios (38).

El *Estado* es, según Posada, la sociedad definida geográficamente como permanente comunidad de vida, cuando se revela dotada de un poder suficiente, cuando tiene capacidad para establecer su orden, o sea cuando se halle asistido de un poder en condiciones adecuadas para crear, establecer, mantener y transformar, al compás de la vida, un orden de derecho (39).

Población es sinónimo de habitante, y quiere decir la masa etnográfica que vive dentro de un te-

(37) E. S. Zeballos, *La Nacionalité*, Tomo 1º, página 87.

(38) “La Nación es una agrupación de hombres que tiene el mismo origen y la misma raza, hablan la misma lengua, habitan la misma región, unidos por las bases de la comunidad de tradición, de aspiraciones, de afecciones, de tendencias uniformes y constantes”. (Fiore, *Droit Int. Codifié*, Art. 37).

(39) Y agregaba el sabio profesor de la Universidad de Madrid, en la memorable conferencia que diera en la Facultad de Derecho de Buenos Aires:

“Surge el Estado, en el proceso humano, como consecuencia de la naturaleza ética de los hom-

territorio, nación o Estado, sin distinción de sexo, edad ni nacionalidad.

El *pueblo*, en derecho político, es la parte de la población legalmente calificada para producir las

“ bres, como rectificación de la lucha brutal, y se
“ afirma y deviene intensamente Estado, en su más
“ pura significación jurídica, en la medida en que
“ los hombres son hombres, o sea en la medida en
“ que éstos, como individuos y como miembros de
“ los grupos sociales de que forman parte, reaccio-
“ nan frente o contra todo intento o hecho revela-
“ dor de una dominación arbitraria, que lo es toda
“ dominación que tenga su único título en la razón
“ del más fuerte; o bien contra toda maniobra de
“ engaño o combinación de la astucia sin reparos
“ morales... ”.

“ El Estado puede considerarse como la suprema
“ expresión orgánica de la solidaridad social: y es,
“ objetivamente contemplado, la sociedad misma, la
“ nación en las sociedades contemporáneas en la fun-
“ ción de suscitar y definir una conciencia colectiva,
“ un espíritu común jurídico, y de elaborar y cons-
“ tituir y hacer efectivo un poder capaz de realizar
“ la armonía de los intereses, de someter a razón las
“ ambiciones y los apetitos de dominación y de ab-
“ sorción, de sujetar y modificar los egoísmos, de
“ unificar las oposiciones sociales y de encauzar los
“ desbordamientos de la pasión: en síntesis, el Es-
“ tado resume y simboliza la fuerza ética del grupo
“ en sus reacciones intensivas y expansivas contra el
“ hombre de las cavernas y contra los instintos atá-
“ vicos del animal que el individuo humano trae a
“ la vida ”. *Teoría Social y Jurídica del Estado* ”.
Edic. Buenos Aires, 1922, págs. 239-241.

manifestaciones de la voluntad, ejercitando la soberanía de la nación (40).

La jurisprudencia de la Alta Corte Nacional de Justicia de los Estados Unidos establece que “el *pueblo* es una parte de la sociedad política investido del derecho de votar, es decir, calificado al efecto de ejercer los derechos políticos o de intervenir en los actos políticos, actos de soberanía, por el gobierno de la nación” (41).

Por consiguiente, diremos — siguiendo al doctor Zeballos — la gran mayoría de la población del Paraguay no forma parte del *pueblo* propiamente dicho; sólo forman parte de él los hombres que según la ley electoral se encuentran en condiciones legales de votar (42).

El *pueblo*, pues, constituye, al decir del Dr. Zeballos, una minoría privilegiada a la que está re-

(40) Zeballos, Obra cit., pág. 99; P. Fiore, *Le Droit Int. Codifié*.

(41) Paschall — Cit. por Zeballos en la pág. 101 de su obra *La Nacionalité*, Tomo 1º.

(42) Tienen derecho a votar todos los ciudadanos nativos o naturalizados con excepción de los siguientes: los menores de 18 años de edad; los dementes declarados tales en juicio; los sordomudos; los soldados, cabos y sargentos de tropas de línea en servicio activo o de guardia nacional movilizada de mar y tierra, así como los agentes de guardias civiles o de seguridad; los procesados como reos que merezcan penas infamantes; los quebrados fraudulentos no rehabilitados, y los que por cualquier otro concepto no pueden ejercitar el sufragio o han perdido la ciudadanía... Art. 49, Ley Nº 300 (Creando el Reg. Cívico permanente).

servada el gobierno del Estado, razón por la que es menester que sea ilustrado, honesto e imbuído de los más nobles sentimientos.

Verdad es que tanto la Constitución de los Estados Unidos como las Constituciones de casi todas las demás naciones americanas, y hasta ilustrados jurisconsultos, hacen la misma confusión que la del Paraguay respecto de los conceptos nacionalidad y ciudadanía (43).

(43) El Chief Justice Tanney, decía en el histórico proceso “*Drew Scott v. John A. Sandford*” (año 1857): “Las palabras *pueblo de los Estados Unidos* y *ciudadano* son términos sinónimos y significan la misma cosa. Lo que vulgarmente llamamos *pueblo soberano* está constituido por cada ciudadano, miembro de la soberanía. Sin duda alguna, una persona puede ser ciudadano, esto es, un miembro de la comunidad que forma la soberanía, aun que no ejercite parte alguna del poder político. Las mujeres y los menores no pueden votar ni desempeñar ciertos empleos o funciones públicas, y, sin embargo, son ciudadanos”. (15 Law - Ed. - pág. 691).

En otro juicio famoso, “*Minor versus Happerset*” (año 1875), el Chief Justice Waite asentó: “...No hay duda que *las mujeres son ciudadanos*, puesto que ellas son personas, y, según la enmienda 14, todas las personas nacidas en los Estados Unidos son ciudadanos de esta nación”.

Un prestigioso profesor argentino, dice: “Ciudadanía es sinónimo de nacionalidad; luego, el ciudadano no es el elector, el que goza de los derechos políticos; sino el argentino, el individuo nativo o nacionalizado que goza de los derechos civiles”. González Calderón, *Derecho Constitucional Argentino*, Tomo 2º, pág. 222.

La Constitución Nacional acepta el principio del “*jus-soli*” al establecer en el Art. 35 que son ciudadanos paraguayos: 1º *Los nacidos en territorio “paraguayo”*.

Cualquiera que sea la nacionalidad de los padres y residan éstos permanentemente o de un modo accidental en el país, sea voluntaria o involuntariamente, motivado por negocios o por otra causa, los nacidos dentro del territorio paraguayo son nacionales de este país. (44).

De acuerdo con los principios del derecho internacional, también son paraguayos los nacidos en las legaciones, en los buques mercantes, particulares, que navegan en aguas jurisdiccionales, o en alta

(44) Para asegurar la eficacia del precepto constitucional transcripto, la ley del Registro Civil preceptúa que: “las declaraciones de nacimiento se harán dentro de los veinte días siguientes al parto, al Encargado del registro a quien se presentará el recién nacido; que el nacimiento lo declarará el padre, la madre, las parteras, facultativos o personas que hayan asistido, etc.” (Art. 15 y 16, Ley del 26 de Septiembre de 1880).

Oportuno es recordar que el plazo de veinte días que prescribe la ley es excesivamente largo; que los profesionales (médicos y parteras) no cumplen con la escrupulosidad deseable el deber que, en forma facultativa, la ley les impone.

Sería conveniente modificar el precepto legal imponiendo, como un deber a los profesionales, hacer la denuncia del nacimiento en formularios impresos que se les repartiría gratuitamente por la Oficina del Registro Civil; formularios que contendrían los datos necesarios para identificar al recién nacido.

mar, con el pabellón nacional o en buques de guerra de la nación (45).

Obedece esto a que la jurisdicción nacional se extiende hasta la línea ideal del *talweg* en los ríos internacionales, que las Legaciones y buques de guerra se consideran, por ficción legal, como prolongaciones del territorio nacional y a que el pabellón cubre al buque en el mar libre.

El precepto constitucional a que venimos refiriéndonos tiene como antecedente nacional el Decreto-Ley sobre nacionalidad, del 10 de Julio de 1856 (46), y, como fuente, las constituciones de los Estados Unidos y de las demás naciones sudamericanas, aparte de la influencia ejercida por los comentaristas famosos de esas Constituciones como Story, Paschall, etc., y Alberdi, con sus *Bases*.

Para los países de escaso número de habitantes, y cuyo progreso depende, en gran parte, del aporte de brazos de los países plétóricos de población, constituye, indiscutiblemente, una necesidad vital el mantenimiento del “*jus-soli*” para la determinación de la nacionalidad de sus habitantes.

A más de que los mismos Estados europeos, que hoy mantienen el postulado contrario, sustentaban hasta el siglo XVIII el principio de que el hombre

(45) Las Legaciones y Consulados de la Nación deben tener un libro de registro para inscribir los nacimientos, matrimonios o muertes ocurridos en las Legaciones o a bordo de los buques (Art. 5º, Ley cit.).

(46) *Decreto del 10 de Julio de 1856 Sobre Nacionalidad*, V. cap. II, pág. 47 de esta obra.

tiene por patria el lugar de su nacimiento, es incontrovertible que el “*jus-soli*” constituye un medio insustituible para mantener la homogeneidad de la población, evitando un cosmopolitismo peligroso a la estabilidad y a la armonía nacional (47).

Por el gran poder de asimilación o absorción de estos países nuevos, los hijos de extranjeros se consideran poderosamente unidos al suelo donde nacieron; estado de conciencia que se robustece y arraiga por obra de la escuela y el régimen de la democracia.

El “*jus-sanguinis*” — dicen Surville y Arthuys — da base más científica a la nacionalidad, puesto que es indudable la transmisión por los padres a los hijos de las costumbres nacionales, de los sentimientos, tradiciones e ideales; mientras que el nacimiento en un país puede ser un hecho puramente accidental.

Aparte de que los prestigiosos profesores no hacen sinó defender el concepto europeo como medio de conservar la nacionalidad de los hijos de sus emigrantes nacidos en los países de inmigración, no siempre se produce el caso de la influencia paterna sobre la conciencia de sus hijos, sobre todo en las clases inferiores del pueblo, que es precisamente la que emigra (48).

(47) E. S. Zeballos, obra cit., pág. 628; Surville et Arthuys, *Cours elem. de Droit Int. Privé* (5ª edic.), pág. 00.

(48) Otro autorizado autor francés, Despagnet, después de defender la superioridad del “*jus-sanguinis*”, asienta:

Del mantenimiento de uno u otro principio por los Estados, surgen los conflictos por la doble o múltiple nacionalidad de que, contra su voluntad, se vé investida una persona.

Tal ocurre, por ejemplo, en el caso del hijo de un francés o un italiano que por la Constitución Nacional es paraguayo, como es francés o italiano por las respectivas leyes de estos Estados, y sujeto, por lo tanto, a las obligaciones y deberes de todo ciudadano, como el servicio militar (49).

“Es bueno, sin embargo, tener en consideración, en una
“cierta medida, el lugar del nacimiento, que unido a una
“manifestación seria de adoptar la nacionalidad del país
“de nacimiento, facilite esta adquisición. Se permite, de
“esta suerte, al extranjero adquirir la plenitud de los de-
“rechos en el país de la residencia, y el Estado evita ser
“invadido por extranjeros que se mantienen tales de gene-
“ración en generación con el riesgo de comprometer la
“unidad nacional.”

(49) Los conflictos de cancillerías que suscita la doble nacionalidad, constituye, desde años atrás, tema obligado de los Congresos y Conferencias Internacionales.

A más de los proyectos elaborados en los mencionados Congresos, numerosas instituciones científicas, como el Instituto de Derecho Internacional, por ejemplo, han propiciado soluciones que, hasta ahora, no han podido llevarse a la práctica por medio de Convenciones o Tratados.

En las Conferencias Internacionales Americanas se ha planteado el estudio del asunto.

En la V Conferencia Internacional Panamericana celebrada en Santiago de Chile en Marzo de 1923, el informe presentado por el Ponente de la Comisión Jurídica, señor Alejandro Alvarez, decía:

Sabido es que en América predomina el principio del “*jus - soli*”, si bien, es verdad, combinado en casi todas las legislaciones, con el principio del “*jus-sanguinis*”, para no perder a los hijos de los nacionales que emigran o se ausentan accidentalmente, en el afán de aumentar la población.

“La determinación de la nacionalidad de las personas, es materia de capital importancia, pues afecta no sólo al Derecho interno de cada país, sino también al Derecho internacional público y al privado. En las relaciones cada vez más múltiples y frecuentes entre los Estados, casi siempre va explícita o implícitamente envuelta una cuestión de nacionalidad”.

“Desgraciadamente, no hay disposiciones legislativas uniformes para determinarla: dos sistemas existen al respecto, el “*jus-soli*” y el “*jus-sanguinis*”, que no es del caso exponer aquí”.

“Esta diversidad de legislaciones produce graves conflictos entre los Estados, principalmente entre los de América y los de Europa, debido a la circunstancia de que aquéllos son países de inmigración y adoptan de preferencia el sistema de “*jus-soli*” y éstos son de emigración y siguen de preferencia el sistema de “*jus-sanguinis*.”

“No hay todavía principios de Derecho Internacional que den solución satisfactoria a este punto; al contrario, la regla en vigor es que cada Estado aprecia la nacionalidad de las personas en conformidad con su propia legislación, sin tomar en cuenta si por las leyes de otros países ese mismo individuo es considerado también como nacional.”

“La falta de principios hace que los Estados reglen por convenios esta materia de la determinación de la nacio-

La Constitución de los EE. UU. de América se ocupa del punto que motiva este estudio en la Enmienda XIV que, como es sabido, fué dictada después de la guerra de Secesión.

Establece dicho precepto que:

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en

“nalidad, o ciertos aspectos de ella, en especial el relativo al servicio militar obligatorio”.

“Los países de América desean celebrar una Convención general al respecto, como aparece por el Tema XV del Programa”.

“Varias proposiciones se han presentado a la presente Conferencia. Pasamos a exponerlas:

“1.—*La Delegación Argentina* dice que es imprecisa la fórmula empleada en el Tema XV y que ella la interpreta en el sentido de que los países de América desean establecer reglas o principios uniformes para determinar la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en el territorio de cualquiera de ellos. Y agrega: Así entendida la fórmula propuesta, cabe decir que, en su aspecto fundamental al menos, halla la solución perseguida una base uniforme en el principio del “*jus-soli*”, incorporado al Derecho Americano. La uniformidad redúcese, no obstante, al principio en sí mismo, pues, su predominio no ha impedido que, como en el Derecho Europeo ocurre con el concepto del “*jus-sanguinis*”, una variedad no escasa de criterios oriente, en el Derecho del Nuevo Mundo, la sistematización general de las reglas pertinentes”.

“Y después de exponer el sistema de legislación de los diversos países de América al respecto, termina proponiendo la siguiente regla:

“Con excepción de los hijos de Ministros extran-

“los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción,
“son ciudadanos (*citizens*) de los Estados Unidos
“y del Estado donde están domiciliados”.

“Ningún Estado promulgará ni ejecutará una
“ley que afecte o restrinja los privilegios o inmu-
“nidades de los nacionales de los Estados Unidos.

“jeros y de miembros de las Legaciones residentes,
“todos los nacidos de padres extranjeros dentro de
“la jurisdicción del territorio de cualquier país
“americano, tienen la nacionalidad del país de su
“nacimiento”.

“2.—*La Delegación del Brasil* después de hacer una
“erudita exposición sobre el tópico relativo a la naciona-
“lidad en América, propone como medio de evitar en
“cuanto fuere posible los conflictos de legislación: que
“la situación de los hijos de extranjeros nacidos dentro
“de la jurisdicción de cada una de las Repúblicas ameri-
“canas, mientras permanezcan *domiciliados en ellas*, se
“rija por la ley vigente en el territorio respectivo”.

“Esta proposición es una novedad en el Derecho Inter-
“nacional y tiende a solucionar de manera satisfactoria,
“en nuestro Continente, esta grave cuestión. La regla
“propuesta merece un cuidadoso estudio de parte de la
“Comisión Jurídica encargada de dar solución a este
“punto”.

“3.—*La Delegación del Uruguay* desea que se resuelva
“la cuestión de doble nacionalidad, dando al interesado
“el derecho de opción, y propone la siguiente fórmula:
“Todo hijo de extranjero, nacido en el Continente Ameri-
“cano, tendrá la nacionalidad del país de su nacimiento,
“salvo que, llegado a la mayoría de edad, y encontrándose
“en el país de origen, expresara sus deseos de optar por
“la nacionalidad de éste”.

“ Ningún Estado privará a persona alguna de la
“ vida, de la libertad, ni de la propiedad, sin ob-
“ servar las formas legales; ni podrá negar o re-
“ husar a persona alguna la protección de las le-
“ yes, igual para todos, en los límites de su juris-
dicción”.

“ Además de estas proposiciones que tienden a resolver
“ los conflictos de legislación en materia de nacionalidad,
“ se han discutido también otros que tienden a buscar
“ una solución para casos determinados, en especial para
“ lo relacionado con el servicio militar. A este respecto
“ la Delegación del Uruguay propuso la siguiente fórmula:
“ Las Repúblicas americanas admiten como excepción a la
“ prestación del servicio militar de sus nacionales en el
“ país de origen, la obligación de prestarlo en el de naci-
“ miento o la prestación ya efectuada, o la exención confor-
“ me a las leyes del mismo”.

“ Varias Delegaciones manifestaron su adhesión a esta
“ fórmula”.

“ 4.—*La Delegación del Paraguay* sometió a la conside-
“ ración de la Comisión la proposición siguiente:

“ Considerando que las cuestiones que surgen de
“ la doble nacionalidad de las personas, son múlti-
“ ples, de distintos aspectos y de indiscutible im-
“ portancia para todos los Estados; que las Consti-
“ tuciones de todas las Repúblicas Americanas, com-
“ binan, en lo que se refiere a la determinación de
“ la nacionalidad, el principio de “*jus-soli*” con el
“ “*jus-sanguinis*”, con la sola diferencia de que
“ algunos dan mayor extensión o importancia que
“ otros a uno de ambos principios fundamentales;
“ que interesa a los Estados americanos disminuir,
“ en lo posible, los casos de conflictos o discusio-
“ nes, finalidad que se obtendría con ir resolviendo

Antes de ser sancionada esta enmienda o reforma, la Constitución no contenía ninguna disposición especial referente a la nacionalidad o ciudadanía Americana. Por tal causa se habían promovido muchísimas cuestiones ante los tribunales, las que motivaron las eruditas y luminosas sentencias de los

“parcialmente las cuestiones que se plantean, la
“Quinta Conferencia Internacional Americana, re-
“suelve:

“1. Recomendar a los Gobiernos americanos que
“incluyan en sus leyes pertinentes la excepción de
“prestar el servicio militar a favor del nacional
“que hubiese ya prestado, obligatoriamente, dicho
“servicio en otra nación. La excepción del servicio
“por este concepto sólo será respetada en tiempo
“de paz”.

“2. Recomendar, igualmente, que la situación
“jurídica de los hijos de sus nacionales nacidos
“en otra República americana, y que según las
“leyes de ésta, son ciudadanos de esta nación, sea
“respetada mientras esté domiciliado o conserve el
“domicilio del nacimiento”.

“En vista de la divergencia de opiniones que se han
“producido sobre la materia en cuestión, y de su mani-
“fiesta complejidad, la Comisión estimó que ella no podía
“abordar con éxito el tema y que convendría deferirlo
“a la Asamblea de Juristas, encargada de la Codificación
“del Derecho Internacional”.

“La Delegación de los Estados Unidos de América,
“haciéndose intérprete de este sentimiento, formuló la
“siguiente moción, que fué aceptada por unanimidad y
“que la Comisión somete a la aprobación de la Confe-
“rencia:

más célebres jueces de la S. Corte de los Estados Unidos, creando esa prestigiosa jurisprudencia sobre Derecho público, universalmente elogiada y respetada.

La fuente de la “*Enmienda XIV*” de la Constitución de los Estados Unidos es el “*Common law*” inglés, dice una ponderada sentencia de la Alta Corte de Justicia de esta nación.

“El principio fundamental del “*Common Law*”, “con relación a la nacionalidad inglesa, fué el nacimiento, dentro de la lealtad, llamada también “obediencia del rey. El principio comprendía a todos los nacidos dentro de la fidelidad al rey y de la sujeción a su protección (*Protectio trahit subjectionem, subjectio protectionem*) (50).

“Considerando las divergencias existentes entre “las disposiciones legales y constitucionales de las “Repúblicas Americanas, y estimando que la resolución final podría afectar reglas constitucionales “de los diversos Estados del Continente,

“*La Quinta Conferencia Internacional Americana resuelve:*

“Referir, para su mayor estudio, a la Comisión “pertinente de la Junta de Jurisconsultos que deberá reunirse en Río de Janeiro, las proposiciones “formuladas con respecto al Tema XV, sobre consideración de la situación de los hijos de extranjeros nacidos dentro de la jurisdicción de cualquiera “de las Repúblicas Americanas”. — Actas de las sesiones plenarias de la 5ª Conf. Int. Americana. (Santiago de Chile, 1923), T. 1º, pág. 561-565.

(50) Dr. C. F. Gómez, “*Ciudadanía y nacionalización*”, pág. 81; Dr. Francisco Dura, “*Naturalización y expulsión*

Con la conquista inglesa fué introducida en América la regla del “*Common Law*, según la cual todo individuo nacido bajo el poder (*allegiance*) de la corona, de padres ingleses o extranjeros domiciliados o que se encuentran accidentalmente en el país, son súbditos ingleses.

Este principio feudal se funda en el “*jus-soli*”, dice Webster. “Por el solo hecho del nacimiento sobre un pedazo de tierra inanimada, se establece “una relación indisoluble con esta tierra” (E. S. Zeballos, ob. cit., Tº 1º, pág. 694).

La *enmienda XIV*, pues, eliminó el principio del vasallaje o deber de fidelidad (*allegiance*) para substituirlo por el *domicilio* que es su equivalente en el sentido de la sumisión a la jurisdicción y a las leyes nacionales (51).

Como se observará, la regla de la Constitución Norteamericana se diferencia de nuestro precepto constitucional en que, en el Paraguay no se exige, para considerarlo nacional de la república al recién nacido, que el padre, madre o padres del mismo estén sujetos a la jurisdicción nacional, como exige la Norteamericana, salvo, naturalmente, la que resulta del fuero común a la que están sujetos todos los habitantes de la nación, con excepción de los diplomáticos extranjeros.

Por lo mismo, los *indígenas* (indios aborígenes)

de extranjeros”; Dr. Joel Dulce, “*Naturalización de los extranjeros*”.

(51) E. S. Zeballos, ob. cit. pág.

de los Estados Unidos no son considerados como ciudadanos porque, por una ley de excepción, no están sujetos a la jurisdicción nacional ordinaria; tienen el privilegio de vivir de acuerdo a sus usos o costumbres propias, ancestrales.

La Constitución de la República Argentina preceptúa en el Art. 67, inc. 11, que:

“Corresponde al Congreso dictar:leyes generales para toda la nación, sobre naturalización y ciudadanía, *con sujeción al principio de la ciudadanía natural*”.

Fundados en esta disposición, sostienen los más ilustres comentaristas de la Constitución Argentina que es el único Estado en que la nacionalidad está determinada por el principio absoluto del “*jus soli*” (52).

A pesar de la reconocida autoridad de los juriscultos a quienes nos referimos, disentimos de la opinión que sustentan, fundado en las razones que exponemos más adelante.

Los EE. UU. del Brasil sancionan el mismo principio en el Art. 69 de su Constitución (53), al establecer que son considerados ciudadanos brasileños: “1º Los nacidos en el Brasil, aunque fuese de

(52) V. González Calderón, “*Derecho Constitucional Arg.*”; E. S. Zeballos, “*La Nationalité*”; A. de Vedia, “*Derecho Constitucional*”; Dr. Carlos F. Gómez, “*Ciudadanía y Nacionalización*”; etc.

(53) “Constitución de la República de los EE. UU. del Brasil”, del 24 de Febrero de 1891. Edic. oficial.

padre extranjero, con tal que éste no se encuentre al servicio de su nación...”.

Bolivia, en su Constitución del año 1880 reformada en 1888, preceptúa, en el Art. 31, que: “Son bolivianos, de nacimiento: 1º los nacidos en el territorio de la República” (54).

No basta, sin embargo, ser natural de la república para tener derecho al ejercicio del voto.

El Art. 33 de la Constitución legisla sobre el punto y establece que, para ser considerado ciudadano, es menester: ser boliviano; tener 21 años de edad los solteros, o 18 cumplidos los casados; saber leer y escribir; poseer una propiedad inmueble, o una renta anual de 200 bolivianos no proveniente de salario obtenido en el servicio doméstico, y estar inscrito en el Registro Cívico.

En sus relaciones con las potencias extranjeras, no ha mantenido Bolivia, en toda su integridad, el principio del “*jus-soli*” sancionado por su Constitución.

Por el Tratado con Alemania de Julio de 1908 se conviene, en efecto, que *serán reconocidos* o considerados como *súbditos alemanes los hijos de éstos nacidos en territorio boliviano*, como también serán considerados bolivianos los hijos de éstos nacidos en Alemania (Art. 6º del Tratado, cit. por Zeballos).

Un Tratado semejante había ya suscrito con Italia en Octubre de 1890.

54) Arturo B. Carranza, “*Digesto Const. Americano*” T. 1, pág. 369.

Cumple observar que Bolivia no tenía necesidad de esos Tratados para asegurarse la nacionalidad de los hijos de bolivianos nacidos en aquellos países, puesto que la Constitución boliviana sanciona ese derecho en su Art. 32, y las leyes alemanas no reconocen como súbdito o ciudadano alemán al hijo de extranjero nacido en Alemania.

Chile sanciona el mismo principio que nuestra Constitución en el Art. 5º al preceptuar: “Son chilenos, 1º Los nacidos en el territorio de Chile” (55).

En Chile también se suspende — como en Bolivia — la calidad de ciudadano activo, con derecho al sufragio, por la condición de sirviente doméstico.

Como se notará, nuestra Constitución no contiene esta prohibición; es más liberal.

Colombia que ha modificado varias veces su Constitución política también sigue el principio del “*jus soli*” pero combinado con el “*jus-sanguinis*” y el “*domicilio*”.

Según la Constitución de 1886 que no ha sido modificada en lo que respecta al objeto de este estudio, por las diversas reformas posteriores; “Son ciudadanos colombianos: 1º Por nacimiento:

“Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre también lo hayan sido, o que siendo hijos de extranjeros, se hallen domiciliados en la República.

“Los hijos legítimos de padre y madre colombiana-

(55) Colección de Códigos de la República de Chile. (Valparaíso, 1912). Edición oficial.

“nos que hubieren nacido en tierra extranjera y
“luego se domiciliaren en la República, se consi-
“derarán colombianos de nacimiento para los efec-
“tos de las leyes que exijan esta calidad.

“2º — Por origen y vecindad:

“Los que siendo hijos de padre o madre natura-
“les de Colombia, y habiendo nacido en el extran-
“jero, se domiciliaren en la República; y cuales-
“quiera hispano-americanos que ante la Municipa-
“lidad del lugar donde se establecieron pidan ser
“inscriptos como colombianos” (Art. 8º) (56).

Si los padres extranjeros del recién nacido se en-
cuentren solo accidentalmente, de paso, dentro de
la República, el recién nacido no es colombiano.

Ecuador que se rige por la Constitución de Di-
ciembre del año 1906, hace la distinción entre la
nacionalidad y la ciudadanía estableciendo, que
“los ecuatorianos lo son por nacimiento o por
“naturalización” (Art. 9º).

“Art. 10. — Son ecuatorianos por nacimiento:

“1º Los nacidos en el territorio del Ecuador de
“padre o madre ecuatorianos.

“2º Los nacidos en el mismo territorio de pa-
“dres extranjeros que residan en él.

“3º Los nacidos en el Ecuador de padres des-
conocidos” (57).

De manera que los hijos de extranjeros cuyos pa-
dres no tengan establecida su residencia en el Ecua-

(56) A. B. Carranza, tomo I, pág. 227, obra citada.

(57) A. B. Carranza, tomo I, págs. 462-463.

dor no tienen la nacionalidad ecuatoriana. Se trata pues, de un sistema en el que prevalece más bien el “*jus-sanguinis*” puesto que según el inciso 1º sólo son considerados como ecuatorianos los hijos de ciudadanos ecuatorianos.

Panamá. La Constitución de esta República promulgada en Febrero de 1904, establece en el Art. 6º que son panameños:

“1º Todos los que hayan nacido o nacieren en el territorio de Panamá, cualquiera que sea la nacionalidad de sus padres.

“2º Los hijos de padre o madre panameños que hayan nacido en otro territorio, si vinieren a domiciliarse en la República y expresen la voluntad de serlo” (58).

Como se notará, la Constitución panameña, también combina el “*jus-soli*” con el “*jus-sanguinis*” y el “*domicilio*”.

Perú, que también ha reformado varias veces su Constitución política, establece en la del año 1860 que “los peruanos lo son por nacimiento o por naturalización”.

El Art. 34, dice: “Son peruanos por nacimiento: “1º Los que nacen en el territorio de la República.

“2º Los hijos de padre peruano o de madre peruana, nacidos en el extranjero...” (59).

(58) A. B. Carranza, tomo II, pág. 434

(59) A. B. Carranza, tomo I, págs. 298-299, obra citada.

Perú ha reformado su constitución el año 1919; pero no hemos logrado conseguir el ejemplar de la nueva constitución.

Como se ve la nacionalidad peruana, también se rige por el principio del “*jus-soli*” combinado con el “*jus-sanguinis*”.

Venezuela que ha reformado como 15 veces su Constitución política, ha respetado siempre el principio del “*jus-soli*” como base para la determinación de la nacionalidad de sus hijos.

La Constitución del año 1909, establece en el Art. 13 “que los venezolanos lo son por nacimiento o por naturalización (60).

a) Son venezolanos por nacimiento:

“Todos los nacidos en el territorio de Venezuela”.

Pero también acepta el principio del “*jus-sanguinis*” al establecer en el inciso 2º del mismo artículo que “Los hijos de padres venezolanos cualquiera que sea el lugar de su nacimiento” (también son venezolanos por nacimiento).

Uruguay. — La nueva Constitución de la República Oriental del Uruguay, vigente desde 1918, que inauguró en América el novedoso sistema del Ejecutivo Colegiado, establece que:

“Art. 6º — Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son naturales y legales”.

Art. 7º — Ciudadanos naturales son todos los hombres nacido. “en cualquier punto del territorio

(60) A. B. Carranza, tomo I, págs. 425-426, obra citada.

“ de la República. *Son también ciudadanos natura-*
“ *les* los hijos de padre o madre orientales, cual-
“ quiera que haya sido el lugar de su nacimiento,
“ por el hecho de avecindarse en el país e inscri-
“ birse en el Registro Cívico” (61).

La solución que dá esta Constitución al concepto *ciudadanía natural* es la que más conviene a los países de escasa población.

Se notará que, acepta como nuestra Constitución, el principio del “*jus-soli*” combinado con el “*jus-origine*” en toda su amplitud.

Costa Rica. — La Constitución de este país que ha sufrido varias reformas, establece en el Título 2º Art. 4º, que:

“Los costarricenses son naturales o naturalizados.

“Art. 5º — Son naturales:

“1º Los nacidos en el territorio de la Repú-
“ blica, excepto aquellos que, hijos de padre o ma-
“ dre extranjero, debieren seguir esta condición
“ conforme a la ley.

“2º Los hijos de padre o madre costarricen-
“ se, nacidos fuera del territorio de la República y
“ cuyos nombres se inscriben en el Registro Cívi-
“ co, por voluntad de sus padres, mientras sean
“ menores de veintidós años, o por la suya propia
“ desde que lleguen a esa edad.

“3º Los hijos de padre o madre extranjeros
“ nacidos en el territorio de la República que, des-

(61) Const. de la Rep. O. del Uruguay. Imp. Nac. Montevideo, 1919.

“pues de cumplir veintiún años, se inscriban por
“su propia voluntad en el Registro Cívico, o por
“la de sus padres antes de dicha edad.

“4º Son también naturales los habitantes de
“la provincia de Guanacaste que se hubiesen esta-
“blecido definitivamente en ella, desde su incorpo-
“ración a esta República hasta el Tratado del 15
“de Abril de 1858, celebrado con la de Nicara-
“gua” (62).

Por una ley de Julio de 1888, se establece en el
Art. 3º, que: “El natural de cualquiera de las Re-
“públicas de Guatemala, Honduras, El Salvador y
“Nicaragua, será tenido como de origen costarri-
“cense si reúnen las dos condiciones siguientes:

“1º Si expresamente, por declaración escrita,
“ante la autoridad política del lugar de su resi-
“dencia, o tácitamente por la aceptación de un
“cargo público, manifiesta la intención de hacerse
“costarricense; y

“2º Si la nación a que él pertenece concede
“a los costarricenses las mismas facilidades para
“la naturalización” (63).

Obedece esta disposición a que, como es sabido,
las repúblicas Centroamericanas pactaron una
unión que posteriormente fué disuelta, existiendo
siempre en el propósito de muchos de sus hombres
dirigentes la intención de volver a constituir la

(62) A. B. Carranza, tomo II, pág. 402, obra citada.

(63) A. B. Carranza, tomo II, pág. 429, obra citada.

Unión Centroamericana estableciendo una Confederación.

Por otra ley de Mayo de 1889 (64), se modificó las reglas referentes a la nacionalidad acentuándose el sistema del “*jus-sanguinis*” que es la que predomina en la determinación de la nacionalidad en Costa Rica.

Honduras. — Según la Constitución del año 1894, la nacionalidad de los hondureños se determinan por los Arts. 6º y 7º que dicen:

“Art. 6º — Los hondureños son naturales o naturalizados.

“Art. 7º — Son naturales:

“1º—Los nacidos en Honduras de padres hondureños.

“2º—Los hijos nacidos en Honduras de extranjeros domiciliados, y los hijos de padre o madre hondureños nacidos en el extranjero, que opten por la nacionalidad hondureña”.

“Los tratados pueden modificar las disposiciones de este último número, con tal que haya reciprocidad” (65).

Pero esta modificación, según el doctor Zeballos, ha sido reformada posteriormente.

La nacionalidad, pues, se rige por los siguientes preceptos: Todas las personas nacidas o por nacer sobre el territorio de la República, son hondureños. La nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos

(64) E. S. Zeballos, tomo I, pág. 10, obra citada.

(65) A. B. Carranza, tomo II, pág. 288, obra citada.

sobre el territorio de Honduras y la de los hijos de hondureños nacidos en territorios extranjeros serán determinados por los tratados. Si no existen tratados, los individuos nacidos en Honduras de padres extranjeros domiciliados en el país, serán considerados como hondureños.

En Honduras, pues, rige también el principio del “*jus-soli*” con la restricción especificada en el precepto legal transcripto.

Guatemala. — La Constitución guatemalteca, de 1879, con las modificaciones introducidas en ella, posteriormente, establece en el Título 1º, Arts. 5º y 6º, que son naturales de Guatemala:

“1º Todas las personas nacidas o que nazcan
“ en el territorio de la República, cualquiera que
“ sea la nacionalidad del padre, con excepción de
“ los hijos de los agentes diplomáticos.

“2º—Los hijos de padre guatemalteco o hijos
“ ilegítimos de madre guatemalteca”, nacidos en el
“ extranjero, desde el momento en que residan en
“ la República; y aun sin esta condición, cuando
“ conforme a las leyes del lugar del nacimiento les
“ corresponde la nacionalidad de Guatemala, o tu-
“ vieren derecho a elegir y optaren por la guate-
“ malteca”.

“Art. 6º — Sé consideran también como guate-
“ maltecos naturales a los originarios de las otras
“ repúblicas de Centro América que manifiesten
“ ante la autoridad competente el deseo de ser gua-
“ temaltecos”. (66).

(66) A. B. Carranza, tomo II, pág. 44, obra citada.

El principio del “*jus-soli*,” predomina, como se vé, en la determinación de la nacionalidad.

La Constitución guatemalteca, y la de Costa Rica, establecen la concesión mútua a favor de los ciudadanos de uno y otro Estado a optar por la ciudadanía, con tal que haga el interesado la manifestación o declaración que la ley especial exige ante la autoridad competente de la República. Este derecho está por otra parte consagrado por el conocido tratado de Wáshington de 1907, tratado que, como se sabe, ha sido concluído entre las cinco repúblicas Centroamericanas.

Nicaragua. — La Constitución del 30 de Marzo de 1905, establece en el título 2º que los nicaragüenses son naturales y naturalizados.

“Art. 5º — Son naturales:

“1º Los nacidos en Nicaragua, de padres nicaragüenses o extranjeros domiciliados.

“2º Los hijos de padre o madre nicaragüense nacidos en el extranjero, si optaren por la nacionalidad nicaragüense.

“Los tratados pueden modificar estas disposiciones siempre que establezcan reciprocidad.

“3º Los naturales de otras repúblicas de Centro América que residan en Nicaragua y no manifiesten ante autoridad competente su deseo en contrario” (67).

Según el Art. 32 de la ley sobre Extranjería, no es permitida la renuncia de la nacionalidad nicara-

(67) A. B. Carranza, tomo II, págs. 261-262, obra citada.

güense y el nacional la conserva siempre aun cuando se encuentre fuera del país.

De manera que, aun en el caso de ser naturalizados en el extranjero, el nicaragüense no pierde su “*status-civitatis*”, salvo la mujer que se case con un extranjero (68).

La Constitución nicaragüense, como se ve, combina para la determinación de la nacionalidad el “*jus-soli* con el “*jus-sanguinis*” condicionado con el “*domicilio*”.

Salvador. — La Constitución de este país del año 1886, establece en el Art. 42 que son salvadoreños por nacimiento:

“1º Los nacidos en el territorio de Salvador, “excepto los hijos de extranjeros no naturalizados.

“2º Los hijos legítimos de extranjero con salvadoreña, nacidos en territorio del Salvador, “cuando dentro del año subsiguiente a la época en “que lleguen a la mayor edad, no manifiesten ante el Gobernador respectivo que optan por la nacionalidad del padre; los hijos legítimos de salvadoreño con extranjera y los hijos ilegítimos de salvadoreña con extranjero, nacidos en El Salvador.

“3º Los hijos legítimos de salvadoreño y los ilegítimos de salvadoreña, nacidos en país extranjero y no naturalizados en él.

“4º Los descendientes de hijos de extranjeros

(68) E. S. Zeballos, tomo II, pág. 26, obra citada.

“ o de extranjero con salvadoreña, nacidos unos y
“ otros en el Salvador’.

Art. 44. — También se consideran como salvadoreños naturales a los centroamericanos que manifiesten ante el gobernador respectivo el deseo “ de ser salvadoreños” (69).

La nacionalidad, pues, se rige en este país por el principio absoluto del “*jus-sanguinis*”, salvo para los hijos de extranjeros a quienes se les impone el deber de la opción.

Obedece, dice el doctor Zeballos, este concepto, a la circunstancia de que El Salvador es un país que tiene una gran densidad de población y por lo tanto no tiene interés en aumentarla por la imposición de la nacionalidad a los hijos de extranjeros (70).

República Dominicana. — La República Dominicana dispone en la Constitución promulgada en el mes de Junio del año 1907, que son dominicanos, Art. 6º:

“1º — Todos los nacidos en el territorio de la
“ República, sea cual fuere la nacionalidad de sus
“ padres, exceptuando los hijos legítimos de los ex-
“ tranjeros que se encuentren en servicio de su
“ nación o que no hubieren fijado su residencia en
“ la República.

“2º Los nacidos en el extranjero de padres
“ dominicanos en servicio de la República.

“3º Los hijos de padres dominicanos nacidos

(69) A. B. Carranza, tomo II, págs. 162-163, obra citada.

(70) E. S. Zeballos, tomo II, obra citada.

“ en el extranjero, si están domiciliados en la República y no declararen al venir a ella, ante el Presidente del Ayuntamiento de su domicilio, por sí o por quienes los representen legalmente, que no tienen una nacionalidad extranjera.

“4º Todos los naturalizados conforme a esta Constitución y a las leyes” (71).

Esta Constitución distingue la nacionalidad de la ciudadanía, puesto que de la nacionalidad se ocupa en el Título 2º y de la ciudadanía en el Título 4º.

Hace, pues, una división más científica.

Si bien, funda la nacionalidad en el principio del “*jus-soli*”, lo hace en forma restringida, puesto que exige que los padres del recién nacido tengan su residencia en la República, en lo cual se diferencia de nuestro precepto constitucional.

Haití. — La Constitución de 1889, establece en el Art. 3º que son haitianos:

“1º Todo individuo nacido en Haití o de padre haitiano.

“2º Todo individuo nacido igualmente en Haití, o de madre haitiana, sin ser reconocido por su padre.

“3º Todo individuo nacido en Haití, de padre extranjero, o, si él no es reconocido por su padre, de madre extranjera, con tal que descienda de la raza africana.

(71) A. B. Carranza, tomo II, págs. 364-365, obra citada.

“4º Todos aquellos que hasta este día han sido reconocidos como haitianos” (72)

Según se notará, los hijos de extranjeros que no sean de raza africana no son considerados como nacionales de Haití, lo que quiere decir, que el origen y la raza juegan un papel importantísimo en la determinación de la nacionalidad en esta República. Predomina, pues, en la determinación de la nacionalidad haitiana el “*jus-sanguinis*”.

Cuba. — La Constitución sancionada en Febrero de 1901, establece en el Art. 4º que: “la condición de cubano se adquiere por nacimiento o por naturalización”.

“Art. 5º — Son cubanos por nacimiento:

“1º Los nacidos, dentro o fuera del territorio de la República, de padres cubanos.

“2º Los nacidos en el territorio de la República de padres extranjeros, siempre que, cumplida la mayor edad, reclamen su inscripción como cubanos, en el Registro correspondiente.

“3º Los nacidos en el extranjero de padres naturales de Cuba que hayan perdido la nacionalidad cubana, siempre que, cumplida la mayor edad, reclamen su inscripción, como cubanos, en el mismo Registro” (73)

Se notará, que también predomina en esta Constitución el principio del “*jus-sanguinis*”. Más aún, la nacionalidad de quien ha nacido en Cuba

(72) A. B. Carranza, tomo II, pág. 124, obra citada.

(73) A. B. Carranza, tomo II, pág. 78, obra citada.

de padres extranjeros queda en suspenso hasta que llegue a la mayoría de edad, lo que quiere decir, que el “*jus-soli*”, casi no tiene significación en la determinación de la nacionalidad.

Una ley especial, de Octubre de 1902, preceptúa las reglas y formalidades que deben llenarse por el interesado para que la opción de la nacionalidad cubana sea válida.

Méjico. — La Constitución mejicana que conocemos — y decimos que conocemos, pues es sabido que dicha Constitución ha sido reformada últimamente — establece en el Art. 30 que: “Son mejicanos:

“1º Todos los nacidos dentro o fuera del territorio de la República, de padres mexicanos.

“2º Los extranjeros que se naturalicen conforme a las leyes de la Federación.

“3º Los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República o tengan hijos mexicanos, siempre que no manifiesten resolución de conservar su nacionalidad”.

Como se ve, en esta Constitución, predomina el principio del “*jus-sanguinis*”.

De la breve relación que antecede resulta que, de las veintiún repúblicas americanas, *en diez y seis predomina* el principio del “*jus-soli*”, mientras que, el sistema del “*jus-sanguinis*” rige en forma absoluta en Méjico y El Salvador; en Venezuela y Cuba, combinado con el “*jus-soli*” y en Haití, condicionado, además, con el origen racial, puesto que

sólo los hijos le extranjeros de raza africana, nacido en Haití, son considerados como haitianos.

La Constitución Nacional adopta también el principio de “*jus-sanguinis*” condicionado con el avecindamiento o domicilio al establecer en otros incisos del ya citado Art. 35, que: “Son ciudadanos nos paraguayos:

“2º *Los hijos de padre o madre paraguayos, por el solo hecho de avecindarse en el Paraguay.*

“3º *Los hijos de paraguayos nacidos en territorio extranjero, hallándose el padre en actual servicio de la República; éstos son ciudadanos paraguayos aun para los efectos en que las leyes fundamentales o cualesquiera otras requieran nacimiento en territorio paraguayo.*”

Hechos históricos conocidos ejercieron, seguramente, influencia sobre los constituyentes, para sancionar en el mismo artículo y sobre el mismo punto dos principios absolutamente antinómicos.

Tanto durante el Gobierno del Dr. Francia como de los dos López, muchos ciudadanos se vieron obligados a expatriarse o fueron desterrados, radicándose en el extranjero. La Convención constituida a raíz de la aniquiladora guerra de cinco años contra la triple alianza, no pudo menos que contemplar la situación de los hijos de aquellos compatriotas que, contra su voluntad, se vieron obligados, bajo la tiranía, a residir fuera del país (74).

(74) Entre los ciudadanos que se encontraban fuera del país, podemos mencionar a los más representativos: Juan

Iguales o parecidos acontecimientos, por lo demás, han ocurrido en los demás países sudamericanos.

Durante la tiranía de Rozas, en la Argentina, los hombres más ilustres, como Sarmiento, Mitre, Mármol y muchos otros, se vieron obligados a emigrar a Chile o al Uruguay.

En Bolivia, el Uruguay y Chile ocurrían iguales sucesos. (75)

Y, cuando, muchos años después de la fecha y circunstancias en que fué dictada la Constitución, hemos contemplado las expatriaciones o emigraciones de miles de ciudadanos útiles, sanos y fuertes — después del 2 de Julio de 1908, de la revolución radical de 1911-1912, y de la militar — Schaerista de 1921-1922 — no podemos menos que admirar la sabiduría y espíritu de previsión de la Constituyente, pues, mediante el precepto constitucional citado, la nación podría readquirir para su bandera los hijos de aquellos que quedaron radicados fuera del país por hechos ajenos a su voluntad.

Francisco Decoud, Manuel Pedro de Peña, Serapio Machaín, Fernando Iturburu, Luciano Recalde, Carlos Loizaga, Segundo Machaín, Gregorio Machaín, F. Alonso, Benigno Ferreira, Juan B. Egusquiza, José T. Sosa, Bedoya, etc.

V. Zinny, *Historia de los Gobernadores del Paraguay*, pág. 429; Notas biográficas de Manuel Pedro de Peña (B. Aires, 1911).

(75) El prócer uruguayo Artigas se vió obligado a asilarse en el Paraguay, donde vivió y murió.

Según el inciso 2º del Art. 35, tanto los hijos de los paraguayos como de las paraguayas son considerados nacionales del Paraguay por el solo hecho de domiciliarse en el país.

La preposición *o* que emplea el precepto transcrito no deja lugar a dudas.

Los constituyentes que fueron testigos del admirable espíritu de sacrificio, del elevado patriotismo y carácter férreo de la mujer paraguaya en la cruenta guerra contra la triple alianza, le han hecho justicia al reconocerle capacidad y aptitudes para saber modelar el alma de sus hijos en el amor de la patria de sus mayores.

De acuerdo al principio de interpretación de que “*ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*”, debe entenderse que están comprendidos dentro del precepto citado los hijos legítimos e ilegítimos, o sean los naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos.

Cuando la cuestión se plantea respecto de un hijo legítimo de padre y madre paraguayos, o de un hijo ilegítimo de padre o madre paraguayos, el precepto constitucional no ofrece ninguna dificultad, puesto que probado el avecindamiento, el derecho a la nacionalidad o ciudadanía como dice la Constitución se adquiere de pleno derecho.

La vecindad es lo que el Código Civil denomina domicilio real: el lugar donde una persona tiene el asiento principal de su residencia y de sus negocios. Para que la habitación pueda ser considerada como domicilio de una persona, debe ser habitual

y no accidental, aunque no se tenga la intención de fijarse allí para siempre. Por otra parte, el cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de la traslación con ánimo de permanecer en el nuevo lugar elegido (arts. 89, 92 y 97 del Código Civil).

De modo que basta que una persona que se halla comprendida dentro de lo preceptuado por el inciso 2 del Art. 35, se domicilie en el Paraguay y pruebe que descende de padre o madre paraguayo, para que se le reconozca *ipso-facto*, sin más requisitos, el derecho de ciudadanía o nacionalidad paraguaya. La persona que se encuentra en el caso especificado no necesita de la residencia previa, consecutiva, de dos años, ni de las demás condiciones exigidas en el Art. 36 de la Constitución a los extranjeros que desean naturalizarse (76).

(76) El Dr. Manuel Domínguez sostiene igual opinión en el Capítulo sobre *Ciudadanía*, de su tesis doctoral “*Sobre la traición a la Patria*”. Por “llevar sangre paraguaya —” dice — supone el Estado que al radicarse entre nosotros “opta por la nacionalidad de sus padres, y por ende no “espera para *naturalizarle* la manifestación expresa de su “voluntad... Por el solo hecho de *avecindarse* le da los “derechos y le impone los deberes del *ciudadano extranjero* “*naturalizado*... pág. 99, ob. cit.

Señalamos a la atención del lector que lo escrito en *bastardilla* no lo dice el texto constitucional. Sé trata de una interpretación que, por autorizada que la consideremos, disentimos de ella por las razones que más adelante exponemos.

De lo que venimos exponiendo surgen las siguientes cuestiones:

1º El hijo legítimo de un matrimonio en que el padre es extranjero y la madre paraguaya ¿puede acogerse al beneficio del precepto constitucional que sanciona el inciso 2º del Art. 35?...

Entendemos que sí, a pesar de comprender que según los principios generalmente aceptados del derecho internacional, la mujer, por su matrimonio, sigue la nacionalidad del marido y que por nuestras leyes civiles corresponde a éste el gobierno de la familia y el ejercicio de la patria potestad.

Pero, contra esta argumentación, indudablemente de peso, puede aducirse con éxito lo estatuido por el inciso 1º del mismo Art. 35, por el que se considera como ciudadano (nacionales) del Paraguay *a todos los nacidos* en territorio paraguayo, y que, entre las causas por las que se pierde el derecho de ciudadanía (o nacionalidad) que taxativamente determina el Art. 40 de la Constitución, no se encuentra el matrimonio con extranjeros.

El Tratado de Derecho Internacional Privado de Montevideo se limita a disponer que los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuanto afecta sus relaciones personales, se rigen por las leyes del domicilio matrimonial; que si no hubiesen fijado domicilio conyugal, las mencionadas relaciones se rigen por la ley del domicilio del marido, etc. (arts. 12 y 42) (77).

(77) V. Tratado de Derecho Civil Internacional. Arts.

Con igual legislación civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina, tribunal de reconocida ilustración y autoridad, ha establecido, en las contiendas de competencia que ha tenido que decidir, la jurisprudencia de que mientras subsista el matrimonio, la mujer sigue la condición y nacionalidad del marido.

Las sentencias dictadas se fundan en las Leyes de Partidas, ley anterior al Código Civil vigente.

Pero, posteriormente, después de la cuestión planteada por el entonces Procurador General de la Nación, Doctor Malaver (año 1892), en un sesudo dictamen en que sostenía la necesidad de modificar el criterio del tribunal por no existir ninguna ley que dispone que la mujer argentina pierde su nacionalidad por el hecho de su matrimonio con un extranjero, rige, actualmente, la jurisprudencia de que la mujer sigue la nacionalidad del marido al solo efecto de determinar la jurisdicción del tribunal.

No existiendo, tampoco, en el Paraguay ninguna ley que hace perder a la mujer paraguaya su nacionalidad por el hecho de su matrimonio con un extranjero, lógico es concluir que el hijo de ella, legítimo o ilegítimo, puede ampararse en lo preceptuado por el inc. 2º del art. 35 de la Constitución Nacional.

2º Aquel que se encuentra comprendido den-

12, 40 y 43, y, sobre la jurisdicción a que corresponde, Art. 56 y siguientes.

tro de lo establecido por el inc. 2º del art. 35 ¿necesita de la carta de naturalización para el ejercicio de sus derechos políticos?

¿La necesitan, igualmente, aquellos que se encuentran en el caso del inc. 3º del mismo art. 35, es decir, los hijos de paraguayos nacidos en el extranjero hallándose el padre en actual servicio de la República?... .

Opinamos que no, porque el mismo art. 35 los declara ya, categóricamente, expresamente, en forma imperativa, *ciudadanos paraguayos* y porque sólo deben naturalizarse los extranjeros (art. 36).

Pareciera, sin embargo, que al establecer la Constitución que “al Congreso corresponde declarar respecto de los que no han nacido en el territorio paraguayo, si están o no en el caso de obtener “naturalización”... (art. 37), ha querido comprender a todos los que han nacido fuera del país; pero, de acuerdo al principio jurídico de que habiendo ambigüedad debe optarse por lo más racional y verosímil, opinamos que el precepto citado se refiere, exclusivamente, a los extranjeros que deseen naturalizarse.

No se puede lógicamente sostener que la Constitución ha dejado al arbitrio o voluntad de las mismas personas a quienes impone la ciudadanía en forma imperativa, el de aceptarla o no dentro del propio territorio, como ocurriría si es que debieran obtener previamente carta de naturalización los declarados ciudadanos en los inc. 2º y 3º del citado art. 35.

La nacionalidad o ciudadanía es el vínculo que liga al individuo con el Estado, vínculo que comporta derechos y deberes ineludibles.

La nacionalidad, dice un autor, constituye una preocupación superior, casi sagrada, de la naturaleza humana. Ningún Estado lo deja al arbitrio del individuo.

Por otra parte, la frase “*si están o no en el caso de obtener la naturalización* con arreglo al art. 35”... puede entenderse también en el sentido de que el Congreso debe declarar previamente si el postulante necesita la naturalización, o, para emplear las palabras de la ley, “*si está o no en el caso*”... de los que deben solicitar la naturalización, puesto que si lo considera comprendido dentro de lo estatuido por los inc. 2º y 3º, puede y debe declarar que no necesita naturalizarse, por tratarse de un ciudadano de pleno derecho.

Más aún: la frase “*con arreglo al art. 35*” no tiene sentido lógico si no se le da la interpretación que antecede, salvo que se la refiera, exclusivamente, al inc. 5º.

Se dirá, tal vez, que esta interpretación del precepto constitucional es algo forzada, casuística, pero, para convencerse de lo contrario, basta leer detenidamente los arts. 36 y 37 y se observará que sólo el art. 36 se refiere a la naturalización de extranjeros (78).

(78) “Art. 36. — Para naturalizarse en el Paraguay “basta que cualquier extranjero haya residido dos años

Ya hemos dejado constancia, en una nota precedente, que el prestigioso maestro de Derecho Constitucional, Dr. M. Domínguez, sostiene una opinión contraria, y, por cierto, con una férrea argumentación.

“Nosotros opinamos — dice — que sólo el nacido en territorio paraguayo y el hijo de nacionales al servicio actual del país que nace en el extranjero, son ciudadanos naturales”... (79).

“consecutivos en el país, poseyendo alguna propiedad raíz o capital en giro, o profesando alguna ciencia, arte o industria. Este término se puede acortar siendo casado con paraguaya, o alegando y probando servicios en provecho de la República.

“Art. 37. — Al Congreso corresponde declarar respecto de los que no hayan nacido en el territorio paraguayo, si están o no en el caso de obtener naturalización con arreglo al Art. 35, y el Presidente de la República expedirá en consecuencia la correspondiente carta de naturalización.” (V. Const. Nacional).

(79) “Admitamos — dice el Dr. Domínguez — que el hijo de padre paraguayo, nacido en Corrientes, pudiera ser presidente de la República del Paraguay. Entonces sucedería que un extranjero, y de los más netos, pues que sería natural de la República Argentina y por tanto en la plenitud de sus derechos de ciudadano argentino, podría regir los destinos de nuestro país. Y si los Ministros y Representantes de la Nación fueran también argentinos del modo indicado, ¿no correría el Paraguay el peligro, siquiera lejano, de ser anexionado? Porque los argentinos hijos de padres paraguayos (es dable suponer, sobre todo si a más de haber nacido en Buenos Aires, allí se educaron y crecieron) podrían conservar más cariño

La Constitución, sin embargo, no define lo que entiende o debe entenderse por *ciudadanía natural*.

En el sistema del “*jus-soli*” se entiende por ciudadanía natural la del nacimiento de la persona; mientras que, en el sistema del “*jus-sanguinis*”, la ciudadanía natural no se determina por el territorio del nacimiento, ni por la voluntad individual, sino por la sangre de los padres (80).

Los Estados que fundan sus leyes en el principio del “*jus-sanguinis*” sostienen, como base de la

“a su patria natural que a la tierra que le adopta en virtud de un simple precepto constitucional”.

“Los constituyentes que legislaron sobre las ruinas de la patria, cuando los menos escépticos opinaban que el Paraguay difícilmente sobreviviría a la situación a que le redujo la guerra; en circunstancias en que los vencedores podían nombrar a su antojo a los gobernantes y en momentos en que ninguna precaución que pusiese a salvo la nacionalidad paraguaya estaba demás, pensarían en ese peligro, ciertamente remoto, apenas probable en los casos normales, pero muy próximo y muy de temerse el año 70”.

“La inmensa responsabilidad de los que rigen los destinos de la República, exige garantías especiales de celo y patriotismo, y esta es la razón por qué se hayan dejado abiertas las puertas de los cargos más importantes sólo a los ciudadanos naturales”. (Dr. Manuel Domínguez, tesis: *Disertación sobre la traición a la patria, y, ciudadanía*, pág. 100).

(80) Mucho mejor fundamento tiene, teóricamente, el “*jus-sanguinis*”.

“Siendo incapaz de manifestar el recién nacido su deseo de pertenecer a tal o cual nación, es razonable pensar que él desea conservar la de sus padres. Esta ley conviene al

nacionalidad (la “ciudadanía” de la Constitución) *natural* que el hijo sigue o tiene la nacionalidad de los padres.

Es el mismo criterio del catolicismo, en el que el niño nace católico por voluntad de los padres (Zeballos).

El mismo Dr. Domínguez reconoce, sin embargo, en su citada obra, que el concepto de la “ciudadanía natural” varía según el principio en que se inspira la legislación, diciendo, con la claridad que acostumbra tratar todas las cuestiones que caen bajo su brillante pluma:

“Si las leyes quieren dar un alcance especial o
“ variar el sentido de una voz, comienzan por ex-
“ plicar el sentido en que van a usarla. Tal hace
“ la Constitución de Portugal, Inglaterra, Costa
“ Rica, San Salvador, Ecuador y Perú al conside-
“ rar como naturales a los hijos de portugueses, in-
“ gleses, etc., nacidos en el extranjero. Si así no
“ se hiciera, en Portugal e Inglaterra la frase ciu-
“ dadano por nacimiento o ciudadano natural ex-

hijo como al padre, porque los sentimientos de aquél están modelados sobre los de éste, por ley de herencia, por cualidades de raza”, etc. (Weiss, *La Nacionalité*, tomo 4º, pág. 50).

—“No es dudoso que el lazo de la sangre constituye una presunción de nacionalidad más lógico que el del suelo, cuando éste no reposa sino sobre el hecho accidental del nacimiento en un lugar dado”. (T. Ducrocq, “*De la Nationalité au point de vue du denombrement*”, etc., pág. 2).

“presaría lo que en todas partes — la acepción que
“le dan los diccionarios de la lengua. *Nuestra*
“*Constitución no le da un valor especial; calla so-*
“*bre el particular;* luego la toma en su significa-
“ción usual y genuina, esto es, expresando la con-
“dición del que nace en territorio paraguayo.”

Por consiguiente, si la Constitución *calla el con-*
cepto o sentido en que emplea la cualidad de *ciu-*
dadano natural, lo lógico y razonable es atribuirle
el concepto amplio de los dos principios que reco-
noce, y no el restrictivo y excluyente de uno solo.
Y como la Constitución reconoce el “*jus-soli*” en el
inc. 1º del art. 35, y el “*jus-sanguinis*” en los inc.
2º y 3º del mismo artículo, debemos concluir que
tan *ciudadano natural* es el nacido dentro del terri-
torio como fuera de él, desde el momento que el
nacido fuera se domicilia en el Paraguay. El do-
micilio, pues, importa, según el régimen constitu-
cional, la opción, voluntad o “*animus*” de ser pa-
raguayo.

El argumento de que los arts. 89, 53 y 46 exigen
que el Presidente y Vicepresidente de la Repúbli-
ca, Senadores y Diputados, sean “natural de la
República” o “ciudadano natural”, es más efec-
tista que incontrovertible, según queda demostrado,
y, además, porque sólo a los extranjeros naturali-
zados veda, expresamente la Constitución, la ocu-
pación de aquellos elevados cargos públicos (art. 35,
inc. 4º) (81).

(81) “Los extranjeros naturalizados gozarán de todos
“los derechos políticos y civiles de los nacidos en el terri-

Esta interpretación está de acuerdo con la del H. Congreso de la Nación que la adoptó al ponerlo en posesión de la Presidencia de la República, por dos veces, a un ciudadano nacido fuera del territorio de la nación, y sin haber estado el padre al servicio de la república.

Aquel acontecimiento pone de relieve a la consideración pública el hecho generalizado en la historia de los pueblos, de que no es indispensable el nacimiento dentro del territorio de la nación para llegar a ser un buen ciudadano, amante de la patria y celoso guardián de su honor y dignidad de su progreso y porvenir.

Es infantil sostener que aquel que ha nacido dentro del territorio es, forzosamente, más patriota, con mayor espíritu de sacrificio, por ese solo hecho, que el ciudadano "*jus-sanguinis*".

Todas las naciones europeas nos demuestran lo contrario. Nosotros mismos tenemos el ejemplo en destacadas personalidades que, habiendo nacido en el Paraguay, han optado por la nacionalidad de sus padres, habiendo llegado a las más altas dignidades en la patria adoptada.

Todo lo cual nos está diciendo que el concepto de la patria es algo subjetivo, íntimo, personal e inexplicable por generalizaciones filosóficas en esta

"torio paraguayo, pudiendo ocupar cualquier puesto menos el de Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros, Diputados y Senadores" (Cons. Nacional). Ver también Arts. 46, 53 y 89.

época de cosmopolitismo, de la interdependencia de los pueblos y de los hombres, de la facilidad de comunicaciones y de la igualdad de los derechos civiles.

Poderosos Estados que marchan a la cabeza de la civilización, como los Estados Unidos de América, nos demuestran con su concepto liberal de la ciudadanía, que ningún riesgo corren la independencia, la unidad nacional ni el porvenir de la nación con facilitar el acceso a las altas magistraturas de la nación aun a los extranjeros naturalizados, puesto que el régimen de la democracia, en el que el pueblo, como soberano, elige sus autoridades, se guardará muy bien de poner el timón del gobierno en manos que no cuidarían celosamente del acervo nacional (82).

Si los mismos extranjeros naturalizados han re-

(82) Un hermoso ejemplo de lo que venimos afirmando tenemos en el caso del súbdito británico Oliver Henry Wallop al que se refiere la noticia telegráfica de *La Nación*, de Buenos Aires, del número del 11 de Septiembre de 1925.

“Wallop se había dirigido a los Estados Unidos hacen muchos años, naturalizándose en el Estado de Wyoming y casándose con una joven de Kentucky. Llegó a ser elegido Diputado de la Legislatura del Estado. Muerto el hermano mayor de él, el Conde de Portsmouth, le correspondía por herencia el título, juntamente con el derecho a ocupar una banca en la Cámara de los Lores del Imperio Británico.

“Wallop ha declarado que aceptaría el título si es que no se le exige la renuncia a la ciudadanía americana.”

¡Qué admirable ejemplo de lealtad!

(El autor).

sultado, en todos los tiempos, colaboradores eficientes del progreso nacional, con muy raras excepciones tal vez, como también han existido entre los mismos nativos, en todas las naciones, algún “specimen” de traidor a la patria, no hay razón para negar a los ciudadanos de origen “*jus-sanguinis*”, el mismo elevado sentimiento de patriotismo, la misma lealtad y espíritu de sacrificio que se le supone al ciudadano nativo.

Las consideraciones que anteceden nos mueven a sostener el principio amplio, liberal, de que son *ciudadanos naturales* todos los comprendidos dentro de los incs. 1º, 2º y 3º del art. 35 de la Constitución Nacional (83).

3º El nacido en el extranjero de un padre paraguayo que ha perdido la ciudadanía por algunas de las causas especificadas en el Art. 40 de la Constitución, ¿tendría derecho a ampararse o acogerse al beneficio del inc. 2º del art. 35?... ¿Lo tendría, igualmente, el hijo nacido en el extranjero, del ciudadano extranjero que se naturaliza en el Paraguay o del ciudadano paraguayo que se naturalizó en el extranjero?...

En el primer caso, entendemos que sí, porque lo

(83) Se recordará que la nueva Constitución del Uruguay considera en el Art. 7º como ciudadanos naturales a los de origen, al preceptuar: “Son también ciudadanos naturales *los hijos de padre o madre orientales, cualquiera que haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecindarse en el país* e inscribirse en el Registro Cívico”. Constitución de la Rep. O. del Uruguay. Montevideo. Imp. Nac., 1919.

que se pierde no es la cualidad de paraguayo sino la ciudadanía que es, como ya hemos dicho, el ejercicio de la potestad política inherente a la nacionalidad. Se pierde el derecho de votar y de ser elegido de ocupar ciertos cargos públicos; pero los deberes inherentes a la nacionalidad, como el servicio militar, por ejemplo, son obligaciones que deben ser cumplidas por aquel que se encuentra en alguno de los casos del Art. 40 de la Constitución.

Más que pérdida de ciudadanía es una suspensión ilimitada del derecho (84).

(84) Una sentencia de la Corte de Apelación de Tacna (Chile) del 9 de Octubre de 1907, resolvió que: “el hecho de servir en un ejército extranjero sin el permiso previo del Congreso, tiene por consecuencia, en Chile, la pérdida de la cualidad de ciudadano, pero no la de la nacionalidad puesto que ninguna disposición legal autoriza que así sea y no lo exonera tampoco del servicio militar”. —E. S. Zeballos, obra citada, tomo 1º, pág. 658.

—De notar es que el Art. 40 de la Constitución Nacional está redactado en los mismos términos que el Art. 9 de la Constitución de Chile, con la única diferencia de que no contiene los incisos 1º y 3º de esta última.

“Art. 9. (11) — Se pierde la ciudadanía:

“1º Por condena a pena aflictiva o infamante.

“2º *Por quiebra fraudulenta.*

“3º Por naturalización en país extranjero.

“4º *Por admitir empleos, funciones o pensiones de un Gobierno extranjero sin especial permiso del Congreso.*

“Los que por una de las causas mencionadas en este artículo hubieren perdido la calidad de ciudadanos podrán impetrar rehabilitación del Senado” (Const. Nacional de Chile).

Por lo demás, algunas de las causas de pérdidas de la ciudadanía son, verdaderamente, inexplicables. Tal, por ejemplo, el hecho de admitir “distinciones”.

Si un ciudadano se ha hecho acreedor, por su conducta ejemplar o por sus obras, a que un Gobierno extranjero le dispense una *distinción honorífica*, como la ciudadanía honoraria, un título académico, la designación como Juez-árbitro en una disputa internacional, una condecoración, etc., no puede sino constituir una justa causa de congratuación nacional, por el reconocimiento de los méritos de ese ciudadano, hecho que comporta un acrecentamiento del prestigio moral de la nación.

La aceptación de un empleo público, residiendo en el extranjero, o de una jubilación, residiendo en el país, por servicios prestados anteriormente en algún país extranjero, tampoco constituyen causa razonable de pérdida de ciudadanía, entendida ésta como pérdida de nacionalidad (85).

A mayor abundamiento, recordaremos el precepto constitucional de que el ciudadano está exento y perfectamente limpio de toda deshonra o infamia en que hubieren incurrido algunos de sus parientes

(85) La Suprema Corte de la Nación Argentina ha establecido en una sentencia, que:

“La aceptación de empleos u honores de gobiernos extranjeros, sin la correspondiente venia, priva al ciudadano “del ejercicio de los derechos políticos, pero no hace perder “la ciudadanía.” *Fallos*: tomo 92, pág. 55, Octubre de 1901.

(Art. 28). Los errores o faltas de los padres no alcanzan a los hijos.

Por lo expuesto, la interpretación restrictiva del precepto constitucional recordado se impone, razón por la que opinamos que el hijo de aquel que se encuentra en alguno de los casos supuestos puede hacer uso del derecho que le acuerda el inc. 2º del Art. 35.

En cambio, los hijos de los que se encuentran en el segundo caso, no tienen aquel derecho porque el naturalizado que vuelve a su patria de origen o de donde es oriundo recobra, según algunas legislaciones, la nacionalidad primitiva, y el hijo de aquel que renunció a la ciudadanía o nacionalidad paraguaya, naturalizándose en otro país, de quien dejó de ser paraguayo, ya no puede invocar a su favor el precepto constitucional de la referencia.

La Constitución de los Estados Unidos no hace ninguna concesión al “*jus-sanguinis*”. La nacionalidad o ciudadanía (*citizen*) se determina por el nacimiento y el domicilio: es menester que el padre o la madre del recién nacido tenga su domicilio en los Estados Unidos o que esté sometido a su jurisdicción como dice la *Enmienda XIV*, para que el recién nacido sea ciudadano de la Unión.

La Constitución de la República Argentina establece que:

“Para ser elegido Presidente o Vicepresidente
“ de la República, se requiere haber nacido en te-
“ rritorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo
“ habiendo nacido en el extranjero ” (Art. 76).

En la ley de ciudadanía N° 346, dictada por el Congreso Nacional Argentino en cumplimiento de lo preceptuado por el inc. 11 del Art. 67, se contempla lógicamente los dos principios sancionados por la Constitución (86).

(86) “TITULO I.—De los argentinos.

“Art. 1°—Son argentinos:

“1° Todos los individuos nacidos, o que nazcan
“en el territorio de la República, sea cual fuere la
“nacionalidad de sus padres, con excepción de los
“hijos de Ministros extranjeros y miembros de las
“Legaciones residentes en la República;

“2° Los hijos de argentinos nativos, que habiendo
“nacido en país extranjero optaren por la ciudadanía de origen;

“3° Los nacidos en las Legaciones y buques de
“guerra de la República;

“4° Los nacidos en las Repúblicas que formaban
“parte de las Provincias Unidas del Río de la
“Plata, antes de la emancipación de aquéllas, y
“que hayan residido en el territorio de la Nación,
“manifestando su voluntad de serlo.

“5° Los nacidos en mares neutros bajo el pabellón
“argentino.

“TITULO II.—De los ciudadanos por naturalización:

“2. — Son ciudadanos por naturalización:

“1° Los extranjeros mayores de 18 años que residen en la República dos años continuos y manifiestan ante los Jueces Federales de Sección su voluntad de serlo;

“2° Los extranjeros que acrediten ante dichos Jueces haber prestado, cualquiera que sea el tiempo de su residencia, algunos de los servicios siguientes:

Como hemos dicho ya, ilustrados comentaristas de la Constitución Argentina sostienen que es un error generalizar la excepción contenida en el art. 76 transcripto.

“1º Haber desempeñado con honradez empleos de
“ la Nación o de las Provincias dentro o fuera de
“ la República;

“2º Haber servido en el ejército o en la escuadra,
“ o haber asistido a una función de guerra en
“ defensa de la Nación;

“3º Haber establecido en el país una nueva indus-
“ tria o introducido una invención útil;

“4º Ser empresario o constructor de ferrocarriles
“ en cualquiera de las Provincias;

“5º Hallarse formando parte de las colonias esta-
“ blecidas o que en adelante se establecieran, ya
“ sea en territorios nacionales o en los de las Pro-
“ vincias con tal que posean en ellas alguna propie-
“ dad raíz;

“6º Habitar o poblar territorios nacionales en las
“ líneas actuales de fronteras o fuera de ellas;

“7º Haberse casado con mujer argentina en cua-
“ lesquiera de las Provincias;

“8º Ejercer en ellas el profesorado en cualesquie-
“ ra de los ramos de la educación o de la industria.

“3. — El hijo de ciudadano naturalizado que
“ fuere menor de edad al tiempo de la naturaliza-
“ ción de su padre, hubiese nacido en país extranje-
“ ro, puede obtener del Juez Federal la carta de
“ ciudadanía por el hecho de haberse enrolado en
“ la Guardia Nacional en el tiempo que la ley dis-
“ pone.

“4. — El hijo de ciudadano naturalizado en
“ país extranjero, después de la naturalización de
“ su padre puede obtener su carta de ciudadanía,

Refiriéndose a la ley de ciudadanía, dice el Dr. Zeballos: “En el Art. 1º esta ley afirma el principio del “*jus-soli*”, con la única excepción de los hijos de los diplomáticos extranjeros; mientras

“ si viniendo a la República, se enrola en la Guardia Nacional a la edad que la ley ordena.

“TITULO III.—Procedimientos y requisitos para adquirir la carta de ciudadanía.

“5. — Los hijos de argentinos nativos, nacidos en el extranjero que optaren por la ciudadanía de origen, deberán acreditar ante el Juez Federal respectivo su calidad de hijo de Argentino.

“6. — Los extranjeros que hubiesen cumplido las condiciones de que hablan los artículos anteriores, obtendrán la carta de naturalización; que les será otorgada por el Juez Federal de Sección ante quien la hubiesen solicitado.

“ Cuando el solicitante lo pidiere al Juez Federal de Sección, el título de ciudadanía podrá serle entregado, previa comprobación de su identidad, por el juez de la localidad donde resida, y si en esa localidad no hubiera juez, por el de la localidad más inmediata. Las mismas autoridades, a pedido del interesado, le recibirán el juramento en el acto de la entrega del título de ciudadanía”.
“ Comuníquese al Poder Ejecutivo”. Ley nº 10.256.”

“TITULO IV.—De los derechos políticos de los Argentinos:

“7. — Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de 18 años, gozan de los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República.

“8. — No podrán ejercerse en la República los derechos políticos por los naturalizados en país

“ que en el mismo artículo, párrafo 2º, ella opone
“ al *principio inflexible* de la Constitución el siste-
“ ma de la opción para los hijos de argentinos na-
“ tivos nacidos en el extranjero (87).

“ extranjero; por los que hayan aceptado empleos
“ u honores de Gobiernos extranjeros sin permiso
“ del Congreso; por los quebrados fraudulentos;
“ ni por los que tengan sobre sí sentencia condena-
“ toria que imponga pena infamante o de muerte.
“ 9. — Sólo el Congreso puede acordar rehabili-
“ tación a los que hubiesen perdido el ejercicio de
“ la ciudadanía.

“ TITULO V.—Disposiciones generales.

“ 10. — La carta de ciudadanía, así como las
“ acciones para obtenerlas, serán gratis.

“ 11. — Por el Ministerio del Interior se remitirá
“ a todos los Jueces de Sección en suficiente núme-
“ ro de ejemplares impresos de “cartas de ciudada-
“ nía”, de modo que sean otorgadas bajo una
“ misma forma.

“ TITULO VI.—Disposiciones transitorias:

“ 12. — Los hijos de los Argentinos nativos y los
“ extranjeros que están actualmente en el ejercicio
“ de ciudadanía argentina, son considerados como
“ ciudadanos naturales o naturalizados sin sujeción
“ a ninguno de los requisitos establecidos por esta
“ ley, debiendo únicamente inscribirse en el Registro
“ Cívico Nacional.

“ 13. — Quedan revocadas todas las disposiciones
“ en contrario a la presente ley.

“ 14. — Comuníquese.

Ley Nº 346, de Octubre 8 de 1869 de *Ciudadanía Argentina*. — Recopilación de Leyes Usuales de la República Argentina, 1922, pág. 19 al 21.

(87) *La Nacionalité*, tomo 2º, pág. 332.

“La existencia de una ley entre nosotros — dice
“ el Dr. Carlos F. Gómez — (88) que adopte los
“ dos sistemas referidos, que por su naturaleza se
“ excluyen, es un absurdo jurídico, constitucional
“ e histórico.”

“La ciudadanía ó nacionalidad sólo se adquie-
“ re — dice González Calderón — por uno de es-
“ tos dos hechos, según el sistema de nuestra Cons-
“ titución: por *nacimiento* o por naturalización. El
“ que no nace en el territorio argentino o en algu-
“ no de los lugares que el Derecho público consi-
“ dera como prolongación necesaria del territorio
“ nacional, es para ella un extranjero, mientras no
“ se naturaliza, porque no admite para definir la
“ nacionalidad otro principio que no sea el de la
“ ciudadanía natural.”

Y a los que observan que el Art. 76 ha estableci-
do una excepción al principio, contesta que están
en un error ‘por desconocimiento de los motivos de
carácter histórico que guiaron a los Constituyentes’ y cita en su apoyo el Art. 76 del proyecto de
Alberdi (89).

(88) v. obra: *Ciudadanía y Naturalización*, pág.

(89) Dos observaciones podrían formularse a la in-
terpretación que hago del texto constitucional, aunque esta
interpretación sea no sólo literal, sino también, como se ha
visto, auténtica: 1ª la ciudadanía de origen, “*jus-sangui-
nis*”, es asimismo natural por fundarse en el sello indele-
ble que imprime la sangre a la personalidad humana; 2ª
el Congreso de Estados Unidos, donde el “*jus-soli*” jamás
se desconoció, ha establecido, en la ley del 10 de Febrero

A. de Vedia, en su obra *Constitución Argentina*, sostiene la misma conclusión.

A pesar del respeto que nos merecen tan autorizadas opiniones, la ley de ciudadanía mencionada reconoce el “*jus-sanguinis*” al establecer el derecho de opción a favor del hijo del ciudadano nativo nacido en el extranjero.

de 1855 (sec. 1993), que: “Todos los niños hasta ahora nacidos o que en adelante nacieren fuera de los límites y jurisdicción de los Estados Unidos, cuyos padres hayan sido o fueren, al tiempo del nacimiento de aquéllos, ciudadanos de los mismos, son declarados ciudadanos de los Estados Unidos; pero los derechos de la ciudadanía no recaerán en los niños cuyos padres jamás residieron en los Estados Unidos”. Por consiguiente, se dirá, un principio idéntico puede adoptarse en nuestra legislación.

A la primera observación, contesto diciendo: que los autores de la cláusula argentina entendieron por ciudadanía natural la que queda “*ipso-jure*” determinada por el simple hecho del nacimiento en el territorio de la Nación, como ya lo he demostrado; y nadie puede pretender que las palabras por ellos empleadas con un sentido propio y determinado, ahora signifiquen precisamente todo lo contrario de lo que quisieron decir. ¿Se equivocaron, debieron entender por eso que llamaban ciudadanía natural otra cosa diferente? No es de mi incumbencia el averiguarlo. Lo que interesa, para dar al texto su sentido auténtico, es lo que ellos quisieron significar, bien o mal, con aquellas palabras.

Cuando la Constitución prescribe, por ejemplo, que el Congreso no puede suprimir las aduanas exteriores que existían en cada Provincia al tiempo de su incorporación (Art. 67, inc. 9º), ¿cómo podría decirse que la Aduana de Buenos Aires, la que tuvo precisamente en vista esta

Conocemos un caso de opción aceptado por los Tribunales argentinos y que, por conceptuarlo ilustrativo, lo transcribimos en la nota (90).

cláusula, no ha sido una aduana exterior al tiempo de la incorporación de esa Provincia? De análoga manera, ¿cómo puede sostenerse que la ciudadanía de origen es también ciudadanía natural, si los constituyentes del 60 dijeron que no lo era? ¿Cómo puede pretenderse que autorizaron al Congreso para introducirla en la ley de ciudadanía cuando manifestaron terminantemente que la repudiaban?

En cuanto a la segunda observación, haré notar que en la Constitución norteamericana no hay cláusula expresamente prohibitiva, como nuestro inciso 11º, lo que es ya un serio argumento contra la pertinencia de la observación. Autores eminentes, como Cambell Black, se concretan a decir, con respecto a la ley de 1855, que es una confirmación del “*common-law*”. “Por el derecho común — agrega — “cuando un súbdito está viajando o residiendo temporalmente en el exterior, con la expresa o implícita licencia “y sanción del soberano y tiene la intención de regresar, “como él permanece bajo la protección del soberano y “conserva los privilegios y continúa con las obligaciones “que le impone su obediencia (*allegiance*’ al mismo, sus “hijos, aunque nacidos en un país extranjero, no nacen “bajo sumisión extranjera, y son una excepción a la regla “según la cual el lugar del nacimiento determina la ciudadanía.” (González Calderón, *Derecho Constitucional Argentino*, tomo 2º, págs. 239-240).

(90) Posadas, Julio 20 de 1925. — AUTOS Y VISTOS. — Estas actuaciones promovidas por Don Herminio S. Prado, sobre opción a la ciudadanía argentina; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que de conformidad con el Art. 1º, inciso 2º de la ley Nº 346, “Son argentinos... los hijos de argentinos nativos, que habiendo nacido en país extranjero optaren por la ciudadanía de origen”,

Entendemos que la excepción establecida por el Art. 76 de la Constitución Argentina importa un principio o excepción de carácter general para to-

estableciendo el Art. 5 de la misma ley, que: “los hijos de argentinos nativos, nacidos en el extranjero, que optaren por la ciudadanía de origen, deberán acreditar ante el Juez Federal respectivo su calidad de hijo de argentino”. SEGUNDO: Que el peticionante ha justificado debidamente en autos, ser hijo de un argentino nativo y haber nacido en el Brasil por una circunstancia especial, que determinó la estadía transitoria de sus padres en dicho país. TERCERO: Que ha justificado igualmente Don Herminio S. Prado, su residencia en esta Capital, desde el año 1891, habiéndose criado y educado en esta ciudad, donde goza de arraigo, por sus condiciones de honestidad y su norma de vida ejemplar, que lo hacen acreedor al mejor concepto. CUARTO: Que llenados así, a juicio del proveyente, los extremos legales citados, procede hacer lugar a la petición. Por estas consideraciones y de conformidad con el dictamen fiscal que antecede, el Juzgado REVUELVE: Declarar ciudadano argentino por opción legal, al peticionante Don Herminio S. Prado, nacido en Uruguayana, Brasil, el año 1890, y domiciliado en esta ciudad. En consecuencia, extiéndase *apud-acte* el juramento de ley y hágase saber al solicitante la obligación que tiene de enrolarse. — Comuníquese al Ministerio de Justicia y al Distrito Militar N° 40. — Hágase saber, regístrese y archívese. — Expídase testimonio de este auto para el interesado. — F. PEREZ. — Ante mí: N. Domínguez Tejeira, secretario.

—Otro caso de opción, que conocemos, es el del doctor Adolfo Decoud; pero la opción del Dr. Decoud, por la ciudadanía argentina, se funda en el inc. 49 del Art. 1° de la Ley de Ciudadanía (V. nota N° 86), y no en el inc. 2° que contempla el “*jus-sanguinis*”.

Por curioso e interesante para el derecho público para-

dos los hijos de ciudadanos nativos, nacidos en el extranjero, puesto que, conforme observa el Sr. A. de Vedia, el mencionado art. 76 *no contiene la*

guayo, transcribimos los considerandos de la sentencia, que dice:

“La ley sobre ciudadanía, fecha 8 de Octubre de 1869, contiene dos clasificaciones: La de los “Argentinos” (Título I, Art. 1º) y la de los “Ciudadanos por naturalización” (Título II, artículos 2, 3 y 4). Cada una de ellas corresponde a situaciones definidas por la Constitución y por la ley.

“Según el inciso 4º de dicho artículo 1º, “son argentinos los nacidos en las Repúblicas que formaban parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, antes de la emancipación de aquéllas y que hayan residido en el territorio de la Nación, manifestando su voluntad de serlo”. El doctor Decoud invoca esa disposición al pedir se le considere y reconozca ciudadano argentino de origen.

“¿Háse justificado esa petición?

“Desde luego la afirmativa se impone, pues encuéntrase en el caso llenados todos los extremos legales.

“En efecto; por la partida de fs.... se comprueba:

“1º Que el doctor Decoud nació en el Paraguay, o sea, en una de las actuales Repúblicas que formaron parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata; y

“2º Que esto tuvo lugar el 25 de Agosto de 1852, o sea, antes de la sanción del Congreso Argentino del 4 de Junio de 1856 por la cual se aprobó el reconocimiento de la independencia y soberanía de la República del Paraguay, hecho por el Encargado de las Relaciones Exteriores y Director Provisorio de la Confederación Argentina (*Colección de tratados*, tomo IX, página 87). Esa sanción determina la fecha de la emancipación legal del Paraguay, y es a ésta a que se refiere la citada ley de ciudadanía de 1869).

limitación o restricción “al tiempo de promulgarse esta Constitución”, que preceptúa la Constitución Norteamericana (91).

“Si la segregación de aquella provincia, consumada de hecho en 1811, hubiese importado su emancipación definitiva ante el derecho argentino, no habría tenido ni razón de ser el acto de reconocimiento de su independencia y soberanía realizado por el Director Provisorio de la Confederación: Sabido es que ese acto se llevó a cabo por medio de un Enviado Especial, con acuerdo y complacencia del Gobierno de aquel país, y en la misma ciudad de Asunción, su capital (documentos de fs. 79 a 86, tomo IX, colección citada).

“Por lo demás: que entre las Repúblicas aludidas en el inciso 4º del artículo 1º de la ley de 1869 se cuenta la del Paraguay, esto lo constata el diario de sesiones del Senado correspondiente a ese año, página 332. En la discusión de dicha ley y al tratarse del inciso citado, se mencionó expresamente a la Banda Oriental del Uruguay”, al Paraguay y al Departamento de Tarija.

“Aparte del nacimiento en las condiciones indicadas, hállanse en el “*sub-judice*”, satisfechos los demás requisitos sin los que, por sí sólo, no bastaría aquél para los efectos de la disposición legal que se invoca: tales son: la residencia en la República y la manifestación de voluntad requerida.

“Por estos fundamentos, y de conformidad al dictamen fiscal, el Juzgado resuelve se considere y reconozca al peticionante doctor Adolfo Decoud, ciudadano argentino no de origen”. — *Emilio Villafañe*. — (Juzgado Federal de Buenos Aires).

(91) “Ninguna persona excepto un ciudadano natural o un ciudadano de los Estados Unidos al tiempo de la adopción de esta Constitución será elegible para el cargo de Presidente de la República”, etc., etc. (Art. 11, inciso 5º).

Para fundar su opinión contraria a nuestra tesis, dice el Ilustrado Catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Dr. González Calderón: “*Por un descuido de los constituyentes* ha venido a quedar como *disposición permanente* una excepción que tuvo su razón de ser, muy justa, en aquellos días de la organización nacional.”

Como fácilmente se comprende, el argumento no tiene ningún fundamento jurídico.

La ley debe cumplirse tal como es, no siendo permitido eludir su texto literal, cuando es claro, so pretexto de penetrar su espíritu.

Siendo la Constitución la ley suprema de la Nación (Art. 31); estando expresamente reconocida la igualdad de todos los habitantes ante la ley (Art. 16) y, preceptuándose, que las declaraciones *derechos y garantías sancionados no serán entendidos como negación* de otros no enumerados (Art. 33)..., no es lógico sostener, como supuesta interpretación auténtica, una negativa en presencia de una franca afirmativa.

Frecuentemente ocurre en el estudio y discusión de los proyectos de ley que se sanciona un texto legal nuevo. En tal caso lo que debe hacerse es cumplir la ley hasta que sea reformada por el órgano competente, en nuestro caso por la Convención Constituyente.

Por todo lo expuesto, y teniendo además en consideración el espíritu liberal de la Constitución Argentina; la grande influencia que ha ejercido en la redacción de la misma el proyecto de Alberdi; el

reconocimiento a favor del ciudadano naturalizado a ocupar las más altas magistraturas de la Nación, con excepción de la Presidencia y Vicepresidencia de la República (92) y lo sancionado por el Art. 76, opinamos que la Constitución Argentina no repudia el principio del “*jus-sanguinis*”, sino que, por por el contrario, lo reconoce.

En presencia del texto claro, absoluto, del Art. 76, nada valen en nuestro modesto concepto las opiniones vertidas por los ilustres miembros de la Convención Constituyente, como Mitre, Sarmiento y otros; así como tampoco pueden variar el texto de la ley de Ciudadanía el dictamen emitido por el Doctor Montes de Oca, como miembro de la Comisión informante de la C.C. D.D., durante la discusión de la ley vigente.

Refiriéndose al Art. 1º del anteproyecto del Doctor Valentín Alsina, decía, en efecto, el Dr. Montes de Oca: “En esto el proyecto del señor diputado “ está de acuerdo con la ley dada en la Confederación; pero la comisión no puede aceptar esos dos “ principios, porque son contradictorios; porque “ son principios opuestos, que se destruyen el uno “ al otro. La comisión tenía que aceptar o la ciudadanía de origen, o la ciudadanía natural.

(92) El Art. 40 exige cuatro años de ciudadanía en ejercicio para ser Diputado Nacional. El Art. 47, seis años de ciudadanía para ser Senador de la Nación, y el Art. 97 también seis años de ciudadanía para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia Nacional. (Cons. Nac. Argentina).

“Si nosotros reconocemos — decía — el derecho
“de los hijos de argentinos, nacidos en país extran-
“jero, para ser ciudadanos argentinos, no podemos
“desconocer al mismo tiempo el derecho de los hijos
“de ciudadanos extranjeros, nacidos en la Repúbli-
“ca, para optar entre las dos ciudadanías. Si nos
“hubiéramos inclinado por lo primero, desatendien-
“do, olvidando lo que prescribe la Constitución,
“habríamos olvidado también y desatendido los
“importantes y graves intereses de la República.
“Son muy pocos los argentinos que salen fuera del
“territorio; son muy pocos los hijos de argentinos
“nacidos en país extranjero; y serían, por consi-
“guiente, muy pocos los ciudadanos que vinieran
“a ser declarados tales por esta ley, si se diera;
“pero no sucede lo mismo con los nacidos en el ter-
“ritorio, son mucho más numerosos; y como de-
“cía el miembro informante de la Convención de
“Buenos Aires, como decía también el Sr. Sarmien-
“to, encargado de publicar el periódico que se lla-
“maba *El Redactor*, para la ilustración de esa
“misma Convención, si no se obligara a los indi-
“viduos nacidos en el territorio de la República a
“aceptar la ciudadanía argentina, vendríamos a
“tener en el curso de muy poco tiempo, que la Re-
“pública Argentina estaría compuesta de alema-
“nes, de ingleses, de franceses, de extranjeros que
“levantarían su bandera, pretendiendo que se les
“atendiese siempre con preferencia a los ciudada-
“nos; de extranjeros que no tendrían verdadera-
“mente patria; porque, estando lejos de aquella

“cuya ciudadanía de origen habrían aceptado, so-
lamente reconocerían a sus gobiernos para exi-
gir, en contra del gobierno de su país nativo,
preferencias y prerrogativas en el país de su na-
cimiento.”

La impugnación del Doctor Montes de Oca fué rebatida por el proyectista Doctor Alsina, quien decía: no hay contradicción en la adopción del principio de las dos ciudadanías, la de nacimiento y la de origen, tal como eran propuestas; la primera, forzosa y determinada por el hecho del nacimiento y la disposición de la ley; la otra legal, e impuesta también, pero con subordinación a un hecho opcional, es decir, a que el hijo de argentino, nacido en el extranjero, viniese al territorio; caso en el cual sería argentino desde que pisara ese territorio, y por el solo hecho de pisarlo (F. Dura, ob. cit., págs. 93 a 95).

Y, habiendo el Congreso votado el proyecto de la Comisión, basado en el del Doctor Valentín Alsina, resulta evidente que, según la ley de ciudadanía argentina vigente, se admite el principio del “*jus-sanguinis*”.

Bolivia, en el inciso 2º del Art. 31 y en el inciso 1º del Art. 32, reconoce el mismo principio que sanciona nuestra Constitución Nacional en los incisos 2º y 3º del Art. 35, puesto que dice: “Son ciudadanos bolivianos: Los que nacieren en el extranjero de padre o madre bolivianos en servicio de la República o emigrados por causas políticas, son bolivianos aun para los casos en que la ley

“ exige la condición de haber nacido en el territorio boliviano.”

“Son también bolivianos: los hijos de padre o madre bolivianos, nacidos en territorio extranjero, por el solo hecho de avecindarse en Bolivia” (inc. 1º, Art. 32) (93).

Los *Estados Unidos del Brasil*, también reconocen el mismo principio en los incisos 2º y 3º del Art. 69, que dicen: “Son ciudadanos brasileños: los hijos de padre brasileño y los legítimos de madre brasileña, nacidos en país extranjero, si establecieron domicilio en la República.” “Los hijos de padre brasileño que estuvieren en otro país al servicio de la República, aunque no vuelvan a residir en ella” (94).

Los *Estados Unidos del Brasil*, han dictado el decreto legislativo Nº 904 del 12 de Noviembre de 1902 que establece las reglas sobre naturalización de extranjeros; ley, que ha sido modificada por los decretos legislativos del 12 de Diciembre de 1907 y del 14 de Mayo de 1908. En el Art. 1º de la ley citada se reproduce exactamente el Art. 69 e incisos del ya citado artículo 69 de la Constitución.

Chile, en su Art. 5º, inc 2º establece que “Son chilenos: Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, por el solo hecho de avecindarse en Chile...”

(93) A. B. Carranza, *Digesto Constitucional Americano*, T. 1º, p. 369.

(94) A. B. Carranza, ob. cit., T. 1º, pág. 50.

La segunda parte de este inciso contiene el mismo precepto que el inciso 3º de nuestro artículo 35.

Por la circunstancia de que el doctor Machain, uno de los miembros destacados de la Convención Constituyente, había hecho sus estudios universitarios en Chile y de que la Constitución de este país es muy anterior a la nuestra, se ha dicho, más de una vez entre nosotros, que los incisos 2º y 3º del Art. 35 de la Constitución Nacional es copia de la chilena.

Colombia, en el Art. 8º, inc. 1º, 2º apartado y en el inc. 2º del mismo artículo, reconoce el mismo principio que nuestra Constitución Nacional en los incisos 2º y 3º (v. pág. 96).

La *República Oriental del Uruguay*, en el Art. 7º de su Constitución reconoce el mismo principio (v. pág. 99); *Guatemala*, en el inc. 2º del Art. 5º de su Constitución también reconoce el mismo principio (v. pág. 102).

En forma menos liberal, las Constituciones del *Perú* (la del año 1860) en el Art. 34, inc. 2º, y, de *Costa Rica*, en el Art. 5º, inc. 2º (v. pág. 99) establecen el mismo principio, esto es, reconocen la ciudadanía ‘*jus sanguinis*’, pero exigen la inscripción previa, durante la minoridad del ciudadano, en el Registro Cívico.

Con parecidas restricciones las Constituciones del *Ecuador* en el Art. 11 y de *Panamá* en el inciso 2º del Art. 6º (v. pág. 97) también sancionan el mismo principio que el precepto constitucional de nuestra referencia, exigiendo igualmente que, para

poder ser considerados como ciudadanos de nacimiento los nacidos en suelo extranjero de padres ecuatorianos o panameños, deben venir a residir en la República y expresar su voluntad de ser ciudadanos; diferenciándose en esta última exigencia de la Constitución Nacional que considera ciudadano “por el solo hecho de avecindarse en el Paraguay”.

Honduras, en el Art. 7º, inc. 2º (v. pág. 101); *Nicaragua*, en el Art. 5º, inc. 2º (v. pág. 103); *El Salvador*, en el inc. 3º del Art. 42 (v. pág. 104) y la *República Dominicana* en el Art. 6º, inc. 3º (v. pág. 105) también sancionan o reconocen el principio del “*jus-sanguinis*” puesto que preceptúan que son nacionales los hijos de ciudadanos que han nacido en el extranjero estableciendo sólo ciertas condiciones o requisitos como la inscripción previa, la residencia o el domicilio.

Méjico, Venezuela, Cuba, Haití y El Salvador, dan preferencia al “*jus-sanguinis*” sobre el “*jus-soli*” aceptando este último principio con marcada restricción.

Por la breve relación que antecede se ve que, en diesiseis naciones americanas, se resuelve la nacionalidad de los habitantes, de conformidad con el principio del “*jus-soli*”.

Verdad es que no hay igualdad absoluta entre las disposiciones constitucionales vigentes en dichos Estados; pero, los puntos de divergencias no son tan fundamentales como para hacer creer que un acuerdo no sería obra relativamente fácil.

Si las naciones americanas que aceptan preferen-

temente el “*jus-soli*” establecieran una legislación uniforme, para reglar la nacionalidad de sus habitantes, mediante una Convención, creemos que los cinco Estados restantes que siguen con preferencia el principio del “*jus-sanguinis*”, terminarían por evolucionar en el sentido de no romper la armonía legislativa continental... Obra es ésta, sin embargo, que sólo el tiempo y la intensificación de las relaciones comerciales, políticas e intelectuales puede llegar algún día a realizar.



CAPITULO IV

De la naturalización de extranjeros*. — Situación privilegiada de éstos en nuestro régimen constitucional. — Causas que determinan la naturalización en los EE. UU. de América. — El Art. 36 de la Constitución Nacional. — Legislación comparada. — Necesidad de la reforma de la Constitución en lo referente a los derechos de los naturalizados. — Requisitos que deben contemplarse en la ley de ciudadanía y naturalización: Jurisdicción a que debe confiarse. — La naturalización automática y el “heimathlosat”. — De la suspensión y pérdida de la ciudadanía.

En el capítulo I de este estudio hemos esbozado el problema político-social que plantea a la Nación la situación actual de los extranjeros.

Hemos apuntado, igualmente, algunas de las causas que, en nuestro concepto, dificultan o no facilitan la nacionalización de los mismos.

* R. Otaño, *La naturalización*; Pascual Quiroga, *Los extranjeros en la R. Argentina*; Marcos M. Avellaneda, *La naturalización de los extranjeros*; Eduardo Crespo, *Ref. a la ley de nacionalidad y ciudadanía*; Florencio M. Ortiz, *Condición jurídica de los extranjeros ante el Dcho. Int. Privado*; J. Westlake, *Droit Int. Privé*; P. Fiore, *Derecho Int. Codificado*, etc., etc.

Bien comprendemos que la solución de cuestión tan vital al porvenir de la nacionalidad no depende, solamente, de la ley que propiciamos; pues, siendo múltiples los factores que actúan, múltiples también deben ser las medidas tendientes a la solución. Entre éstas está indicada la enmienda o reforma de la Constitución Nacional.

Es notorio que, dentro de nuestro régimen institucional, el extranjero goza de una situación relativamente privilegiada con respecto al nacional, lo que no es justo ni equitativo.

Establece, en efecto, el Art. 33 de la Constitución que: “Los extranjeros gozan, en todo el territorio de la Nación, de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer sus industrias, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar *contribuciones forzosas extraordinarias.*”

Si la igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas, si todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y admisibles a los empleos sin otra condición que la idoneidad (Art. 26), mal está que se acuerde a los no ciudadanos, una situación más ventajosa dentro de la misma comunidad política.

Si el objeto de la Constitución ha sido, como reza su magnífico preámbulo — portada monumental, al decir de un jurisconsulto argentino — “establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y hacer duraderos los beneficios

de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y *para todos los hombres del mundo que lleguen a habitar el suelo paraguayo...*" bastaba con las declaraciones de derechos y garantías especificados en el Art. 18 y siguientes, para quedar ampliamente garantizados la igualdad y la libertad civil de los habitantes de la República, sean nacionales o extranjeros.

Por inexplicable contraste, a las ventajas que la Constitución acuerda a los extranjeros sobre los nacionales, los naturalizados se encuentran en una relativa inferioridad con respecto al ciudadano natural, puesto que tienen todas las cargas, deberes y obligaciones del ciudadano natural, sin gozar de la amplitud de los derechos políticos de éstos.

Se arguye frecuentemente que en ciertos países, como los EE. UU. de América, por ejemplo, los extranjeros tratan de naturalizarse a la mayor brevedad posible de su arribo al país, sin ser instados a ello; pero la clave de ese anhelo de obtener la carta de naturalización está en que, aquella gran nación, ha cuidado, desde los albores de su independencia, en hacer deseable la ciudadanía americana por la perfecta igualdad civil y política que la Constitución establece entre el natural y el naturalizado, con la única excepción de que éste no puede llegar a la Presidencia y Vice-Presidencia de la República y, además, porque la ley no establece una perfecta igualdad civil entre los ciudadanos y extranjeros puesto que éstos no pueden adquirir bienes inmuebles en aquella nación.

“Si el incentivo de la naturalización fuera sólo
“ el ejercicio de los derechos políticos o la aspira-
“ ción a los honores, la mayor parte de los inmi-
“ grantes, extraños a la política, poco se curarían
“ probablemente de la ciudadanía americana, a
“ no ser para traficar con el voto. Móvil más ur-
“ gente y poderoso es el de la adquisición de los
“ derechos civiles, especialmente el de la propie-
“ dad” (V. Congreso Jurídico Ibero - Americano
de 1892. *Memoria del General A. Flores*, pág. 418.

En la mayoría de las naciones latino-americanas, en el afán de atraer la inmigración, se ha seguido una política contraria: se ha establecido una perfecta igualdad civil entre nacionales y extranjeros, acordándose a éstos el goce de todos los derechos civiles, inclusive el de adquirir bienes inmuebles en el lugar y extensión que quisieren. En el Paraguay, en esto del reconocimiento del derecho privado humano, se ha ido más lejos que ningún otro país, según lo tenemos ya demostrado.

La experiencia, que es la gran maestra de la vida, va convenciéndonos de que se ha errado el camino, por lo que es urgente evolucionar prudentemente.

Pero, en esto de las conquistas obtenidas por las ciencias sociales y políticas en el terreno de las realizaciones prácticas, no es posible reaccionar bruscamente porque eso importaría como pretender, al decir del doctor Zeballos, que las aguas del río remontasen la corriente.

Notorios sucesos de nuestra época van, sin em-

bargo, contra el postulado enunciado: el Facismo o Musolinismo, en Italia, con éxito en todos los órdenes de la actividad gubernamental, a pesar de la opresión de la libertad individual y colectiva, constituye toda una enseñanza.

Pero, la experiencia del procedimiento no ha dado resultados en España ni en Chile. Y se explica. Los acontecimientos humanos son consecuencias de muchos factores de índole moral o material y, cambiados esos factores, el medio y el ambiente psicológico, los sucesos se desvían, como una gota de pintura en la paleta cambia el matiz de la tela...

La Constitución republicana del Brasil constituye una tendencia reaccionaria muy plausible dentro de Sud América, al establecer que son ciudadanos brasileños:

“Los extranjeros que, encontrándose en el Brasil el 15 de Noviembre de 1889, no declarasen, dentro de seis meses después de entrar en vigencia la Constitución, el ánimo de conservar la nacionalidad de origen” (inc. 4º).

“Los extranjeros que poseyeren bienes inmuebles en el Brasil y fueren casados con brasileña o tuvieren hijos brasileños, con tal que residan en el Brasil, salvo si manifestaren la intención de no cambiar de nacionalidad” (inc. 5º).

Dentro del régimen institucional americano, lo preceptuado por el inc. 5º del Art. 69 de la Constitución brasileña tiene su antecedente en el Art. 30, inc. 3º de la Constitución Mejicana del año 1874 que preceptúa: son mejicanos: “los extranjeros que

“adquieran bienes raíces en la República o tengan hijos mexicanos, siempre que no manifiesten resolución de conservar su nacionalidad”.

Según una información telegráfica publicada por *La Nación* de Buenos Aires en el N° del 25 de Noviembre del corriente año, recientemente se ha presentado al Congreso Mejicano un proyecto de ley reglamentando los derechos de los extranjeros propietarios de inmuebles; proyecto que transcribimos en la nota por envolver cuestiones de indiscutible interés institucional (95).

(95) “MEJICO, 16 (Havas).—El Presidente Calles y sus ministros han preparado un proyecto de ley reglamentando los derechos de los extranjeros a adquirir propiedades en el territorio de Méjico, en salvaguardia de la tranquilidad del Estado y de sus intereses. El proyecto respeta los derechos adquiridos legalmente con anterioridad y no afecta a ningún interés legítimo. El texto del proyecto, entregado el sábado a la Cámara para su aprobación, es el siguiente:

“Artículo 1º — Ningún extranjero podrá, individualmente, tener o adquirir dominio directo, sobre tierras o aguas en una zona de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y cincuenta kilómetros de las costas, ni ser socio de sociedades mejicanas que posean tal dominio en la misma faja de terreno.

“Art. 2º — Los extranjeros que la hayan adquirido legalmente, antes de la promulgación de esta ley, están obligados a deshacerse de las propiedades referidas en el Art. 1º y de los derechos que el mismo establece, en el plazo de diez años, a contar de la vigencia de esta ley, a menos que adquieran la nacionalidad mejicana.

“Art. 3º — Para que un extranjero pueda formar parte

El Art. 36 de la Constitución Nacional establece :
“Para naturalizarse en el Paraguay bastará que cualquier extranjero haya residido dos años consecutivos en el país, poseyendo alguna propiedad raíz o capital en giro, o profesando alguna ciencia, arte o industria. Este término se puede acortar siendo casado con paraguaya o alegando y probando servicios en provecho de la República”.

Como se ve, la Constitución es suficientemente liberal en lo que respecta a las condiciones que exige para conceder la naturalización.

“de una sociedad mejicana que tenga o adquiera dominio sobre tierras, aguas, acciones o concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles minerales en el territorio de Méjico, tendrá que convenir previamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores que se considerará como ciudadano mejicano respecto a los bienes que le correspondan en la sociedad, y no invocará, por lo mismo, protección de su gobierno, bajo pena, faltando al convenio, de perder dichos bienes.

“Art. 4º—Tratándose de sociedades mejicanas agrícolas no se concederá el permiso de que habla el artículo anterior cuando quede en manos de extranjeros un 50 por ciento del interés total de la sociedad.

“Art. 5º — Las sociedades que posean bienes destinados a fines agrícolas fuera de la zona prohibida, y no estén conformes con la presente ley, serán obligadas a desahacerse de ellos en el plazo de diez años.

“Art. 6º — Los derechos adquiridos por extranjeros legalmente, con anterioridad a esta ley, podrán ser conservados por los actuales propietarios hasta su muerte.

“Art. 7º — Cuando un extranjero tuviese que adquirir por herencia derechos cuya adquisición estuviese pro-

Dos años de residencia, algún bien inmueble o capital en giro o alguna profesión útil y honesta (ciencia, arte o industria) como medio propio de vida... no es mucha exigencia.

Sólo tres naciones americanas, Chile, Bolivia y Costa Rica, son más liberales. En efecto:

La Constitución Chilena sólo exige un año de residencia en la República y la petición, por escrito, de la carta de ciudadanía a la Municipalidad del departamento en que el solicitante vive (art. 5º, inc. 3º).

“libida, el Gobierno permitirá registrar la escritura bajo la condición de transmitir dichos derechos a otra persona capacitada conforme a la ley.

“Art. 8º — Los extranjeros que tengan algún derecho adquirido antes de la vigencia de esta ley deberán manifestarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores en el plazo de un año, bajo pena de pérdida de los derechos.

Art. 9º — Todo acto o contrato contrario a los artículos 1º y 3º será legalmente nulo.

“Art. 10. — Esta ley no deroga las restricciones establecidas por leyes especiales a personas extranjeras para adquirir derechos dentro del territorio de Méjico.”

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
EN LA CÁMARA

“MEJICO, 16. (Havas). — El Ministro de Relaciones Exteriores concurrió hoy a la Cámara de Diputados, con el propósito de informar sobre la ley que trata de las propiedades de los extranjeros, e hizo declaraciones que eran esperadas con interés.

“Dijo, entre otras cosas, que la prohibición que esta ley dispone no es nueva en la legislación de Méjico, pues

Igual requisito exige la Constitución de Bolivia en el Art. 32, inc. 2º; y la de Costa Rica en el Art. 6º, inc. 3º.

Con excepción de Brasil, El Salvador, Ecuador y Honduras, que también exigen dos años de residencia, al extranjero, para poder solicitar la carta de naturalización, todas las demás repúblicas americanas, exigen, a más de otros requisitos, la residencia mínima de tres años consecutivos en la República.

La ley sobre ciudadanía y naturalización del Brasil, es una de las más completas que conocemos. Al establecer los requisitos exigidos para la naturalización determina también el procedimiento que debe seguirse. A título ilustrativo la traducimos (96).

“ desde la época de la dominación española, en el año
“ 1623, fué expedida una ley que facultaba sólo a los ca-
“ tólicos y amigos del país a adquirir bienes en las zonas
“ en que actualmente se prohíbe.

“ Agregó que con posteridad, y en diferentes formas, se
“ han impuesto medidas taxativas a los extranjeros para
“ adquirir bienes en las zonas prohibidas.

“ Las declaraciones del ministro han desvanecido muchas
“ dudas y han sido recibidas con viva satisfacción por
“ parte de la mayoría del Parlamento.”

(96) *Decreto legislativo N° 904 del 12 de Noviembre de 1902. — Reglas sobre naturalización de extranjeros.*

Francisco de Assis Rosa é Silva, Presidente del Senado:
hago saber a los que la presente vieren que el Congreso
Nacional decreta y promulga la siguiente ley:

Artículo 1º — Son considerados ciudadanos brasileños
(Art. 69 de la Constitución):

1º Los nacidos en el Brasil, aunque de padre extranjero,
no residiendo éste en servicio de su nación;

A pesar de la creencia vulgarizada de que la ley sobre naturalización de extranjeros de los EE. UU. de América es de las liberales, a estar a la información que poseemos, no la es, sin embargo.

“Un extranjero dice la ley, puede ser admitido
“ a hacerse ciudadano de los Estados Unidos de la
“ siguiente manera, y no de otra. PRIMERO: De-
“ clarará bajo juramento ante un tribunal de *cir-*
“ *cuito* o de *distrito* de los Estados Unidos, o de un
“ tribunal de *distrito* o *supremo* en los territorios,
“ de una oficina de Registro en los Estados que

2º Los hijos de padre brasileño y los legítimos de madre brasileña, nacidos en país extranjero, si establecieren domicilio en la República.

3º Los hijos de padre brasileño que estuviesen en otro país al servicio de la República, aunque no vuelvan a domiciliarse en ella;

4º Los extranjeros que, encontrándose en el Brasil el 15 de Noviembre de 1889, no declarasen hasta el 24 de Agosto de 1891, el ánimo o propósito de conservar la nacionalidad de origen, según el procedimiento establecido en los Decretos Nos. 58 A. de 14 de Diciembre de 1889 y 396, de 15 de Marzo de 1890;

5º Los extranjeros que poseyeren bienes inmuebles en el Brasil y fueren casados con brasileñas o tuvieren hijos brasileños, con tal que residan en el Brasil, salvo si manifestaren la intención de no cambiar de nacionalidad;

6º — Los extranjeros que requiriesen la naturalización de acuerdo con la presente ley.

Art. 2º — Los extranjeros naturalizados gozarán de todos los derechos civiles y políticos y podrán desempeñar cualquier cargo o función pública, con excepción de los siguientes:

“ tengan jurisdicción legal, dos años por lo menos
“ antes de su admisión, que es intención suya *bona-*
“ *fide* hacerse ciudadano de los Estados Unidos y
“ renunciar para siempre a toda sujeción y fide-
“ lidad a cualquier príncipe extranjero, potentado,
“ estado o soberanía, y (particularmente, nombrán-
“ dolo) al príncipe, potentado o soberanía de la cual
“ el extranjero sea súbdito o ciudadano en ese tiem-
“ po. SEGUNDO: Deberá al tiempo de su petición
“ para ser admitido, declarar bajo juramento de-
“ lante de los tribunales (ante nombrados) que se

1º Presidente o Vicepresidente de la República;

2º De Senador o Diputado al Congreso Nacional sin que tengan, para lo primero, más de seis años de ciudadanía brasileña, y, para lo segundo, más de cuatro años.

Art. 3º — La naturalización no substraer a los naturalizados a las obligaciones por ellos contraídas en el país de origen antes de su desnacionalización.

Art. 4º — Compete privativamente al Presidente de la República conceder el título de naturalización a los extranjeros que lo requiriesen por sí, o por procurador, con poderes especiales.

Art. 5º — El solicitante de la naturalización, en la petición dirigida al Gobierno Federal, hará las declaraciones necesarias cuanto a su filiación, nacionalidad, estado, profesión y especificará el número de hijos que tuviere de legítimo matrimonio y el domicilio de estos hijos; debe, además, probar con documentos:

1º Su identidad personal;

2º Mayoridad legal;

3º Residencia en el Brasil por el tiempo mínimo de dos años;

“ someterá a la constitución de los Estados Unidos,
“ y que absoluta y enteramente renuncia y abjura
“ de toda sumisión y fidelidad a cualquier príncipe
“ extranjero, potentado, estado o soberanía, y par-
“ ticularmente (nombrándolo) al príncipe, estado,
“ potentado o soberanía de la que era antes ciuda-
“ dano o súbdito. Estas fórmulas deben ser regis-
“ tradas por el escribano del tribunal. TERCE-
“ RO: Debe probar a satisfacción del tribunal que
“ admite al extranjero, que éste ha residido en los
“ Estados Unidos cinco años por lo menos, y dentro

4º Buena conducta moral y civil probado por documento oficial.

Art. 6º — El requisito de la residencia será dispensado:

1º Al extranjero casado con brasileña;

2º Al que poseyere bienes inmuebles en el Brasil;

3º Al que tuviere parte en algún establecimiento industrial por su aptitud o capacidad profesional en cualquier ramo de industria útil al país;

4º Al que se recomiende por su talento y capacidad literaria o por su aptitud profesional en cualquier ramo de la industria;

5º Al hijo de extranjero naturalizado, nacido fuera del Brasil, antes de la naturalización del padre.

Art. 7º — Para los efectos legales constituyen prueba bastante los certificados extraídos de los libros de las reparticiones oficiales, como así también los testimonios por escrito otorgados por cualquiera autoridad judicial, municipal o policial de la Unión o de los Estados.

Art. 8º — El título de naturalización firmado por el Presidente de la República y refrendado por el Ministro del Interior, será registrado en la respectiva secretaría, después de haber otorgado recibo del mismo el naturalizado,

“ del Estado o territorio del tribunal un año por lo
“ menos, y que, durante ese tiempo, se ha com-
“ portado como hombre de buena condición mo-
“ ral, practicando los principios de la Consti-
“ tución de los Estados Unidos, y bien dispues-
“ to al orden y prosperidad de los mismos; pe-
“ ro el juramento del solicitante no puede en nin-
“ gún caso suplirse por la prueba de su residencia.
“ CUARTO: En caso que el extranjero solicitan-
“ te de la ciudadanía haya nacido con algún título
“ hereditario o sido de alguna orden de nobleza en

por sí o por procurador; título que quedará sin efecto (que será anulado) si no es solicitado dentro del plazo de seis meses.

Art. 9º — Para la naturalización de los extranjeros residentes en los Estados, se procederá en la siguiente forma:

1º La solicitud se presentará a la Secretaría competente del Gobierno Estadual, que lo transmitirá al Ministerio del Interior para los efectos de la concesión y el registro del título, el que será reenviado al Gobierno referido, para ser entregado al naturalizado;

2º Al Presidente o Jefe del Gobierno Municipal, que lo remitirá informado al Presidente del Estado, a los fines del inciso anterior.

Art. 10. — En la Secretaría competente del Gobierno Estadual se llevará un libro apropiado al registro de los títulos de naturalización.

Art. 11. — El plazo para la entrega de los títulos (de naturalización) en los Estados será de un año contado desde la fecha del recibimiento en la Secretaría del Gobierno. Cumplido dicho plazo y, no siendo reclamado el título, será

“ el reino o estado del cual procede, debe, además
“ de los requisitos anteriores, hacer expresa renun-
“ cia del título u orden de nobleza ante el tribunal
“ y su renuncia debe ser consignada en el acta del
“ tribunal.”

“ Por la sección 2166, se le permite la naturaliza-
“ ción al que ha servido en los ejércitos o milicias
“ de los Estados Unidos, con sólo un año de resi-
“ dencia, y sin la declaración previa de la sección
“ 2165.”

“ Por la sección 2167 se admite al extranjero me-

devuelto al Ministerio del Interior a los efectos especificados en el Art. 8º.

Art. 12. — Independientemente de cualquier formalidad serán expedidos títulos declarativos de ciudadanos brasileños a los que los requieran por sí, probando encontrarse dentro de las condiciones exigidas en los incisos 2º, 3º, 4º y 5º del Art. 1º de esta ley; a tal fin:

1º El Ministro del Interior es competente para firmar los títulos referidos debiendo aplicarse en cuanto al procedimiento para la concesión y registro del título las disposiciones de los Arts. 7º y 8º.

2º Para los extranjeros tácitamente naturalizados en virtud de lo establecido por el inciso 4º del Art. 69 de la Constitución, equivalen a título bastante de ciudadano brasileño, los siguientes documentos expedidos hasta la fecha de esta ley:

1º Los títulos de elector federal;

2º Los decretos y órdenes (reales) de nombramientos para los cargos públicos, federales o estaduais.

Art. 13. — No es permitida la naturalización de los extranjeros que dentro o fuera del país hayan sido condenados por homicidio, hurto, robo, bancarrota, falsedad, con-

“ nor de 21 años que ha residido en los Estados
“ Unidos los tres años anteriores al cumplimiento de
“ esa edad, à solicitar la ciudadanía sin la declara-
“ ción exigida en la condición primera de la sección
“ 2165; pero deberá hacerla al tiempo de la admi-
“ sión a la ciudadanía, probar los cinco años de re-
“ sidencia y declarar bajo juramento que en los dos
“ últimos años ha sido su intención *bona-fide* ha-
“ cerse ciudadano de los EE. UU.”

“ Por la sección 2168 se declara que si un extran-
“ jero, después de haber hecho la declaración exi-

trabando, estelionato, lenocinio o falsificación de monedas.

Art. 14. — Queda libre de toda costa, sellos y emolumen-
tos los papeles referentes a la naturalización de extranjeros
y la prueba de ser ciudadano brasileño.

Art. 15. — En el decreto reglamentario que el Gobierno
expedirá para la ejecución de esta ley, a más de un for-
mulario del pedido de naturalización, establecerá las nece-
sarias providencias para la organización en breve plazo de
un cuadro estadístico de todos los extranjeros residentes en
territorio nacional y tácitamente naturalizados en virtud de
la Constitución y leyes anteriores.

Art. 16. — Revócanse todas las disposiciones en con-
trario.

En el Decreto N° 6948, del Poder Ejecutivo, del 14 de
Mayo de 1908 al incluir la precedente ley, se establecen
algunas disposiciones reglamentarias para el mejor cumpli-
miento de la ley. Traduciremos los artículos más intere-
santes y pertinentes a este trabajo.

.....
“ Art. 4° — Los extranjeros que pretendan naturalizarse
ciudadanos brasileños, deberán, por sí o por procurador,
dirigirse al Presidente de la República por intermedio del

“ gida en la condición primera de la 2165, muere
“ antes de llegar a ser naturalizado, su viuda e hi-
“ jos sean considerados como tales ciudadanos de
“ los Estados Unidos, una vez prestados por ellos
“ los juramentos legales” (V. Francisco Dura,
obra citada, pág. 167-169).

En lo referente a la amplitud de los derechos que
acuerdan a los naturalizados las diversas naciones

Ministro de Justicia y Negocios Interiores, mediante una
petición firmada, con la firma autenticada por Escribano,
en la que declarará su nacionalidad, profesión, estado, es-
pecificando si tiene hijos y si es de legítimo matrimonio.

Esta petición deberá ser acompañada con los documentos
a que se refiere el Art. 5º de la ley...”

.....
Art. 6º — “Para probar la identidad personal bastará
que la firma del naturalizado sea autenticada por un Es-
cribano Público. En caso que la petición de naturalización
sea hecha por apoderado, a los efectos de la identidad per-
sonal, bastará el título habilitante o poder del procurador.

La prueba de la mayoría legal podrá ser hecha con
el certificado de bautismo, partida del Registro Civil, pasa-
porte o cualquier otro medio admitido en derecho.

La prueba de no estar procesado, ni condenado por algu-
no de los crímenes o delitos a que se refiere el Art. 13 de
la ley, será hecha con un certificado de la autoridad del
domicilio del peticionante o en documento otorgado por los
Agentes Diplomáticos o Consulares de la nación del mismo
solicitante o del país de donde hubiera emigrado.”

.....
.....
*V. Naturalizaçao. Títulos Declaratorios de Cidadao Brasi-
leiro, Río de Janeiro, Imp Nac , 1923.*

americanas, debemos señalar la del Paraguay como una de las que más restringe esos derechos.

Todas las naciones americanas acuerdan a los naturalizados el derecho a ocupar los empleos y cargos rentados de la administración pública con excepción de la primera magistratura de la Nación, la representación en el Congreso Nacional y los Ministerios del Poder Ejecutivo.

En los países que a continuación se expresan, se permiten, además, a los naturalizados, ser Diputados y Senadores al Congreso de la Nación.

En la *Argentina*: con cuatro y seis años, respectivamente, de ciudadanía en ejercicio (Arts. 40 y 47 Const. Nac.).

En los *EE. UU. de América*: con siete y nueve años, respectivamente de ciudadanía en ejercicio y ser vecino del Estado que lo eligió (Art. 2º, Sección 2ª y Art. 3º, Sección 3ª, Constitución Nacional).

En *Bolivia*: cinco años de residencia fija en el país (Art. 57, inc. 2º y Art. 62, inc. 1º, Constitución Nacional).

En el *Brasil*: cuatro y seis años respectivamente, de ciudadanía en ejercicio (Art. 26, inc. 2º, Const. Nacional).

En *Guatemala*: sólo se requiere para ser electo diputado estar en ejercicio de los derechos del ciu-

dadano pudiendo, por tanto, serlo los naturalizados (Art. 7, 9 y 49 Const. Nac.).

En *Colombia*: el naturalizado sólo puede ser diputado (Art. 100), pues, para la senaturía, se exige la ciudadanía de nacimiento (Art. 94).

En *Chile*: Basta tener la calidad de ciudadano elector en ejercicio, sin exigirse ningún tiempo previo (Art. 19, inc. 1º, y 26, inc. 1º).

En *Cuba*: ocho años de ciudadanía en ejercicio para ser diputado, pudiendo, por lo tanto, serlo los naturalizados; pero, para la senaturía, se exige la ciudadanía de nacimiento (Art. 49, inc. 1º, Const. Nacional).

En la *República Oriental del Uruguay*: se exige cinco y siete años, respectivamente, de ciudadanía en ejercicio (Art. 22 y 29 Const. Nac.).

En *El Salvador*: cinco años de ciudadanía activa, en ejercicio, y ser vecino del departamento que lo eligió (Art. 60, Const. Nac.).

En *Panamá*: sólo se requiere estar en actual ejercicio de la ciudadanía (Art. 56, Const. Nacional).

En *Costa Rica*: cuatro años de residencia en el país después de haber obtenido la carta de ciudadanía (Art. 72, inc. 1º, Const. Nac.).

Los naturalizados pueden ser Ministros del Poder Ejecutivo o Secretarios de Estado en los siguientes países:

En la Argentina, EE. UU. de América, Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Uruguay.

En ninguno de los países en que se dá acceso a los naturalizados a los altos puestos directivos de la República — como los ministerios o la representación nacional — ha corrido riesgo alguno la independencia de la nación por tal causa. Y es que, como decimos en otra parte de este estudio, con el régimen de la democracia, las mencionadas magistraturas dependen siempre, directa o indirectamente, del pueblo elector, el que se cuidará muy bien de votar, auspiciar o apoyar a los que no demuestren la más decidida adhesión a la historia y a los bien entendidos intereses de la Nación.

Urge, pues, reformar la Constitución a fin de dar acceso a la Representación nacional y a los Ministerios o Secretarías de Estado a los extranjeros naturalizados. Si reconocemos, sin esfuerzo, la aptitud de los extranjeros para el trabajo, el ahorro y la inversión inteligente de sus capitales; si la experiencia nos enseña que son colaboradores eficientes del

progreso de la Nación, no tenemos por qué temer que la mayor solidaridad con nuestros destinos puede resultar algún inconveniente a los intereses generales.

Con exigir que el naturalizado resida en el país, y que tenga, por lo menos, cinco años de ciudadanía activa, en ejercicio, entendemos que ningún riesgo de absorción corre la República...

En la ley de ciudadanía que se llegue a dictar, debe contemplarse, de acuerdo con las ideas expuestas en este estudio, lo que debe entenderse por ciudadanía natural.

Y, como según nuestro concepto, la Constitución sólo reconoce dos clases de ciudadanos: los nacionales o naturales del Paraguay, y los naturalizados, debe determinarse claramente, categóricamente, las personas que pertenecen a uno y otro grupo. Sólo así se evitarían discusiones inconvenientes sobre la nacionalidad de los funcionarios públicos. Esto ya ha ocurrido más de una vez (caso Gondra, Schaerer, Riart) en desmedro del prestigio y de la autoridad del cargo.

La jurisdicción a que debe confiarse todo lo referente a la naturalización de extranjeros, nos ha movido a reflexionar sobre las modalidades de nuestra administración y nuestra justicia.

Habría, aparentemente, mayor garantía de rectitud y justicia confiando al Poder Judicial el estudio, tramitación, prueba y resolución de las solicitudes de cartas de ciudadanía; pero no debemos olvidar que, por múltiples razones que no es de este lugar apuntarlas, los Juzgados de 1ª Instancia en lo Civil, no podrían llenar a satisfacción, una misión que exige patriótica dedicación, decidida voluntad....

Habitados, jueces y secretarios, a que las partes insten el procedimiento, por aquello de que los jueces no proceden de oficio y, además, por la conocida decidia de la mayoría de los señores jueces, las solicitudes de carta de ciudadanía quedarían posiblemente abandonadas en los armarios de las secretarías malogrando el propósito perseguido de dar facilidad para la naturalización.

Si la Administración Pública tampoco se señala por una labor metódica, tiene, en cambio, a su favor, la posibilidad de que el Ministro de que dependa el funcionario a quien se confía la tramitación y despacho de la carta de naturalización, puede fácilmente amonestarlo y hasta destituirlo si necesario fuere. Además, al confiarse el asunto a determinado organismo el P. E. se encargaría de llenarlo con

un funcionario competente, posiblemente un hombre de ley, mejor dicho, un letrado.

Por otra parte, el Art. 37 de la Constitución, preceptúa que es el Presidente de la República quién debe expedir la carta de naturalización, razón que también justifica que el asunto sea confiado al Poder Administrativo.

Las condiciones de vida en el país, los medios de comunicación, la forma en que está distribuída la población, la relativa dificultad que existe para ponerse en rápida comunicación con la Capital, la necesidad de dar la mayor facilidad posible al extranjero que desee naturalizarse y la relación de inmediata dependencia entre los funcionarios que deben intervenir en la tramitación y prueba de la carta de ciudadanía, también justifican que el asunto sea confiado a la rama administrativa del poder público.

Auspiciamos la naturalización automática porque comprendemos que con él ningún riesgo corren las instituciones nacionales.

Uno de los efectos saludables “que produciría la
“ naturalización de extranjeros por ministerio de
“ la ley, sería la formación de partidos de princi-
“ pios que impersonaliza la lucha, como se practica

“ en Europa y Estados Unidos. Así habríamos rea-
“ lizado el diapasón de nuestras campañas políticas
“ buscando el triunfo de reformas institucionales y
“ legislativas de bienestar general y de interés per-
“ manente de la sociedad sin los inconvenientes del
“ caudillo, futuro dictador, que enardece las pasio-
“ nes en la lucha, deprime la dignidad cívica de los
“ electores y elimina el control cuando triunfa. Es
“ cosa bien diversa luchar por un programa de re-
“ formas, que por el triunfo de un candidato por
“ más ilustre y meritorio que sea” (F. A. Barroetaveña, *Naturalización de extranjeros*).

Refiriéndose a un proyecto análogo, decía el Dr. Carlos Pellegrini en el Congreso Argentino: “La
“ resistencia de los residentes extranjeros de esta
“ categoría a recurrir a los medios que la ley les
“ da para obtener su naturalización, es debida a
“ cierta prevención contra un acto tan natural y
“ lógico, hasta el punto de que hombres que están
“ completamente vinculados al país; que ven en la
“ República su segunda patria; que han formado
“ aquí su hogar, su familia, su fortuna; cuyos hi-
“ jos son argentinos y se sienten ellos también ar-
“ gentinos por sus anhelos y aspiraciones; sin em-
“ bargo, se retraen de legalizar esta situación, de

“ hacerse argentinos en derecho, porque se ha crea-
“ do una atmósfera de disfavor en contra de ese
“ acto, la cual no ha existido ni existe en otras gran-
“ des naciones”.

“ Este proyecto tiene el propósito de destruir esa
“ prevención; de establecer que la ciudadanía ar-
“ gentina es un honor que legaliza la situación de
“ un extranjero desvinculado ya por el tiempo de
“ su país de origen; que lo eleva en el concepto pú-
“ blico; que le da derechos políticos y lo vincula
“ definitivamente a esta su segunda patria, a la
“ que pertenece ya de hecho por vínculos indisolu-
“ bles”.

La naturalización automática o por “rescripto príncipe” como se decía antiguamente, está, por otra parte, autorizada por la misma Constitución Nacional en el inc. 5º del Art. 35. El Congreso ha hecho uso hasta ahora con explicable medida de dicha facultad, pero la verdad es que está dentro de su potestad, disponer la naturalización de los “heimathlos” o sea de aquellos que han quedado desvinculados, desnacionalizados por la larga permanencia fuera de la patria de origen.

En Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Italia y otros países europeos, existen le-

yes especiales que obligan a los nacionales de esos países a mantener una cierta relación con el gobierno de su patria, sea inscribiéndose en los Consulados, volviendo a la nación de origen dentro de un determinado número de años, y, aquellos que han descuidado estos deberes, como son la mayoría de los inmigrantes, quedan desnacionalizados.

Quedaría, pues, perfectamente justificada la naturalización de éstos.

Por lo demás, en la misma ley se establecería la cláusula pertinente para los que no desearan aceptar el honor que se les dispensa al otorgarles la carta de ciudadanía paraguaya.

Con esta excepción quedarían salvadas las objeciones o reparos de orden constitucional que podría hacerse a la ley.

Finalmente, todo lo referente a la suspensión y pérdida de la ciudadanía, constituye un problema del mayor interés para la República.

Por lo mismo, no se puede menos que contemplar la situación de la mujer paraguaya casada con extranjero.

El concepto sobre la capacidad intelectual de la mujer, sobre sus aptitudes para las múltiples fun-

ciones de la vida pública y privada ha evolucionado poderosamente después de la guerra europea.

Las sociedades más conservadoras y tradicionalistas, como la Inglesa, ha reconocido ampliamente los derechos políticos de la mujer, llevando al Parlamento a Lady Astor y otras.

La mujer paraguaya que, en la guerra con la Triple Alianza (1865-1870), dió admirable prueba de resistencia y energía inigualada en la historia contemporánea, merece ser contemplada en toda ley que se refiera a la nacionalidad, porque, en gran parte, suya es la obra del resurgimiento nacional.

Mientras venga la ley, que ya no puede tardar, reconociendo ampliamente la igualdad civil y política de la mujer con el hombre, debe declararse expresamente que la mujer paraguaya no pierde su nacionalidad por el simple hecho de su matrimonio con extranjero.

El ciudadano que haya obtenido carta de ciudadanía extranjera pierde la nacionalidad mientras viva en el extranjero; pero, volviendo al país, pierde los derechos políticos sin que por ello pueda sustraerse, a los deberes y obligaciones inherentes a la nacionalidad.

A estar a lo que decía un artículo publicado en el diario *El Orden*, con el título de “Hay que desnaturalizarse”, no faltan ciudadanos en edad de

prestar el servicio militar que se naturalizan argentinos con el propósito único de eludir el servicio militar, y que, cierto funcionario de la Legación Argentina, a petición de los “nuevos ciudadanos” llegó a patrocinar con éxito, la excepción correspondiente....

La excepción habría sido mal concedida. Los deberes y obligaciones inherentes a la nacionalidad son irrenunciables dentro de la jurisdicción nacional.

Cada estado, por otra parte, es absolutamente soberano para dictar las leyes pertinentes a la nacionalidad de sus habitantes.

Pero, para evitar cuestiones enojosas debe hacerse una declaración expresa en la ley de ciudadanía.

No debe olvidarse que los Estados débiles en fuerza material, deben tratar en todo momento, ser fuertes por la fuerza del derecho.



CAPITULO V

PROYECTO DE UNA LEY DE CIUDADANÍA Y NATURALIZACIÓN

TITULO I

De los ciudadanos naturales

Art. 1º — Son paraguayos, nacionales del Paraguay o ciudadanos naturales:

1º Todas las personas nacidas en territorio paraguayo, cualquiera que sea la nacionalidad del padre o de la madre, con excepción de los especificados en el Art. 2º.

2º Los hijos, legítimos o naturales, de padre o madre paraguayos, nacidos en el extranjero, hallándose el padre o la madre al servicio de la República.

3º Los hijos, legítimos o naturales, de padre o madre paraguayos nativos, nacidos en el extranjero, por el solo hecho de venir a fijar domicilio

en el Paraguay y de ser inscripto en el Registro Cívico Permanente.

También son ciudadanos paraguayos los hijos de ciudadanos naturalizados domiciliados en la República, nacidos accidentalmente en el extranjero.

4º Las personas nacidas en las Legaciones establecidas en el extranjero o en buques o transportes de guerra de la República, y los nacidos en buques con pabellón nacional en alta mar o aguas jurisdiccionales o neutrales.

Cualquier ciudadano podrá denunciar a la Junta Electoral la persona que se encuentra en el caso a que se refiere este artículo y la Junta procederá a su inscripción, previa comprobación de los extremos legales requeridos.

Art. 2º — Exceptúase de lo establecido en el inciso 1º del artículo anterior: los hijos de los diplomáticos extranjeros, asesores técnicos, agregados militares, civiles y comerciales de las Legaciones extranjeras establecidas en la República; los hijos de los Cónsules extranjeros de carrera, así como los hijos de los técnicos contratados por la Nación o las Municipalidades y que se encuentran accidentalmente en la República.

TITULO II

De los ciudadanos por naturalización

Art. 3º — Será considerado ciudadano naturalizado todo extranjero de origen europeo o americano, mayor de 18 años de edad, que hubiere residido cinco años consecutivos en el país y estuviere casado con paraguaya o tuviere hijos paraguayos o poseyere bienes inmuebles o una profesión liberal o tuviere capital en dinero en algún comercio o industria o desempeñase cualquier cargo o empleo rentado por la Nación o el municipio o sirviere en el ejército o la armada y no hubiere sufrido ninguna condena por delitos contra la propiedad o por profesar ideas anarquistas o comunistas.

Art. 4º — Los extranjeros a quienes se refiere el artículo precedente que desearan conservar su nacionalidad de origen, deberán hacerlo constar en un acta pública dentro del término de un año de la promulgación de esta ley, y, en lo sucesivo, antes de cumplir los cinco años de residencia en el país, en la Dirección General del Censo Electoral o en la Junta Electoral que corresponda a su domicilio o ante un Juez de Paz o Escribano Público.

Art. 5º — Son también ciudadanos naturalizados aquellos a quienes el Congreso otorga, por especial consideración a sus méritos o a servicios prestados al país, la ciudadanía paraguaya.

Art. 6º — Tiene derecho a solicitar la naturalización todo extranjero mayor de 18 años de edad, que hubiese residido dos años ininterrumpidos en el país, y que, además, reuna en su persona alguno de los siguientes requisitos:

- a)* que posea en propiedad algún bien inmueble;
- b)* que ejerza la enseñanza o alguna profesión liberal o mecánica;
- c)* que tenga algún capital invertido en algún comercio o industria dentro de la República;
- d)* que forme parte, como colono, de alguna de las Colonias que dependan de la Dirección de Tierras y Colonias.

Art. 7º — El requisito de la residencia no se exigirá:

- a)* a los que estuvieren casados con paraguaya;
- b)* a los que hayan desempeñado a satisfacción del gobierno, algún empleo o comisión útil a la Nación, dentro o fuera de la República;
- c)* a los que hayan servido en el ejército o la armada de guerra;

d) a los hijos de extranjeros naturalizados, nacidos fuera del país, antes de la naturalización del padre.

Art. 8º — No pueden ser naturalizados:

1º Los extranjeros a quienes las leyes prohíben la entrada al territorio nacional;

2º Los extranjeros, oriundos de un país en conflicto con la República;

3º Los anarquistas, comunistas, los atacados de enfermedades contagiosas, repugnantes o peligrosas, los dementes, sordo-mudos, mendigos, los que son perseguidos por la justicia de otros países por delitos contra la propiedad, la vida o las instituciones orgánicas del Estado y los que no pueden comprobar una buena conducta.

TITULO III

Procedimiento para la naturalización

Art. 9º — Las Juntas Electorales comunicarán a la Dirección del Censo Electoral, anualmente, la lista de los extranjeros que se encuentran dentro de lo preceptuado por el inc. 1º del Art. 3º.

Esta lista debe ser detallada, conteniendo nom-

bre, edad, nacionalidad de origen, estado, profesión, tiempo de residencia, etc.

La Dirección del Censo Electoral, previa comprobación de los extremos que la ley exige, ordenará la inscripción y la expedición de la libreta cívica correspondiente.

Art. 10. — El que desee obtener carta de naturalización deberá presentar una petición por escrito solicitándola; petición en que deberá expresarse el nombre, estado, profesión, domicilio anterior fuera del país, y actual en la República, y, si tiene hijos, el nombre, edad, nacionalidad y domicilio actual de éstos. Deberá acompañar con el escrito los documentos que compruebe su identidad personal (partida de nacimiento, matrimonio, pasaporte o libreta de enrolamiento militar, título profesional o cualquiera otro que establezca, *prima-facie*, la identidad personal). Deberá probar por medio de documentos o informes de las Oficinas Públicas, y, a falta de éstos, por la declaración jurada de tres testigos hábiles, ciudadanos paraguayos, sus buenos antecedentes personales y, además, los extremos exigidos por los artículos 6º y 7º.

En el mismo escrito deberá declarar que se somete voluntariamente a todas las obligaciones y deberes del ciudadano paraguayo naturalizado.

Art. 11. — La solicitud deberá ser presentada: en la Capital, a la Dirección del Censo Electoral, y, en la Campaña, a las Delegaciones Civiles, Jefaturas Políticas o Juntas Electorales del domicilio del solicitante.

La oficina que reciba la petición deberá formar expediente en cada caso, tomar declaración a los testigos propuestos bajo juramento de ley y remitir por certificado, las actuaciones a la Dirección del Censo Electoral, para la resolución.

Art. 12. — La Dirección del Censo Electoral estudiará cada expediente y, encontrando cumplidos los requisitos exigidos por esta ley, otorgará la carta de naturalización, que debe tener el formato de un "carnet". La carta de naturalización deberá ser firmada por el Presidente de la República, firma que podrá ser hecha a elisé y refrendada por la del Presidente del Censo Electoral.

Art. 13. — Si la solicitud no hubiese sido presentada a la Dirección del Censo Electoral, ésta remitirá, con un oficio, al funcionario ante quien fué iniciada las actuaciones, la carta de naturalización o ciudadanía a fin de que la entregue al interesado, previo juramento de fidelidad a la República; haciéndole firmar un recibo en el mismo oficio, que

deberá ser devuelto, para ser agregado al expediente que quedará archivado.

Art. 14. — El Presidente del Censo Electoral deberá comunicar en el mes de Diciembre de cada año, al Ministerio de Guerra, una lista detallada de todos los ciudadanos naturalizados a los fines especificados en la ley N.º 194 sobre el Servicio Militar Obligatorio.

Art. 15. — Todo expediente sobre naturalización deberá quedar terminado dentro del término de tres meses de su iniciación, bajo pena de multa de Dos mil pesos moneda nacional de curso legal o destitución que se impondrá al empleo o funcionario culpable del retardo.

TITULO I V

Derechos y deberes de los ciudadanos

Art. 16. — Todo ciudadano está obligado a prestar el servicio militar en defensa de la patria y de las instituciones, de acuerdo a las leyes especiales pertinentes.

Los ciudadanos naturalizados están eximidos del servicio militar en tiempo de paz y, en tiempo de

guerra, sólo están obligados a prestarlo después de tres años de su naturalización.

En ningún caso se obligará al ciudadano naturalizado a prestar servicio militar contra su patria de origen.

Art. 17. — Los ciudadanos naturalizados gozarán de todos los derechos civiles y políticos de los ciudadanos naturales, pudiendo desempeñar cualquier empleo o cargo en la Administración Nacional o Municipal, con excepción de los siguientes: el de Presidente o Vicepresidente de la República; el de Senador o Diputado al Congreso y el de Ministro o Secretario de Estado.

TITULO V

De la suspensión y pérdida de la ciudadanía

Art. 18. — El ejercicio de los derechos políticos del ciudadano, se suspende:

a) por inhabilidad física o mental calificada y declarada por juez competente;

b) por ser soldado, cabo o sargento de tropa de línea o Guardia Nacional movilizada o de la policía bajo cualquier denominación que sirviere;

c) por ser procesado ó condenado por delito contra la propiedad, la vida o la integridad orgánica o contra la seguridad del Estado, mientras dure el proceso o la condena;

d) por quiebra fraudulenta calificada por Juez competente;

e) por aceptar empleos, funciones o distinciones honoríficas de un gobierno extranjero sin especial permiso del Congreso.

Art. 19. — La nacionalidad se pierde:

a) por la traición a la patria, calificada por tribunales competentes civiles o militares;

b) por la naturalización en país extranjero;

c) por regresar el ciudadano naturalizado a su país de origen.

Se entenderá que reasume su nacionalidad originaria cuando no regrese a la República durante el término de dos años seguidos.

Art. 20. — Los que se encuentran dentro de lo establecido por los incisos 1º y 2º del artículo anterior podrán solicitar la rehabilitación del Congreso Nacional, el que podrá concederle por una ley especial.

TITULO VI

Disposiciones generales

Art. 21. — Toda tramitación de la solicitud de naturalización será gratuita, en papel común y formularios impresos que facilitará la Dirección del Censo Electoral.

Art. 22. — La naturalización concedida por error o con violación de lo preceptuado en esta ley, será anulable, a gestión de cualquier ciudadano o del Ministerio Fiscal.

La anulación se gestionará ante la Dirección del Censo Electoral con audiencia del interesado.

Art. 23. — Los que obtengan carta de ciudadanía usando nombre supuesto o mediante alguna falsedad, así como los testigos que se prestasen a hacer declaraciones falsas, sufrirán la pena de dos años de prisión y de tres a diez mil pesos moneda nacional de curso legal de multa.

Art. 24. — La mujer paraguaya no pierde su nacionalidad por el solo hecho de su matrimonio con extranjero.

Art. 25. — La Dirección del Censo Electoral llevará los libros necesarios sellados y rubricados por el Ministerio del Interior en los que se asentará la estadística en forma de los ciudadanos naturalizados.

Art. 26. — Queda derogada toda disposición contraria a la presente.

El P. E. reglamentará la presente ley.

Asunción, Diciembre de 1925.

INDICE

CAPITULO I

Motivos de este trabajo.— La población extranjera, su modalidad e influencia en el orden económico. — La inmigración deseable. — Conveniencia de que los extranjeros intervengan en la política. — Necesidad de una ley de Naturalización..... pág. 7

CAPITULO II

La ciudadanía en la antigüedad, en Grecia y Roma. — Ciudadanía y extranjería en la América Colonial.—El extranjero en las Leyes de Indias. — Antecedentes nacionales: Concepto sobre ciudadanía de la primera Asamblea Nacional.— La constitución del año 1813. — El extranjero durante el Primer Consulado y la Dictadura del Doctor Francia; durante el Segundo Consulado. — Tratado con la provincia de Corrientes, de 1841.— La Constitución del año 1844.— Decreto-ley sobre naturalización, de 1844 y sobre nacionalidad, de 1856..... pág. 41

CAPITULO III

Nacionalidad y Ciudadanía: diferencia entre ambos conceptos; iden entre Nación y Estado, población y pueblo. — El Art. 35 de la Constitución Nacional: "jus-soli" y "jus-sanguinis": conflictos de cancillerías que plantean. — Examen del inc. 1º del Art. 35: antecedentes nacionales y estudio comparado de las Constitu-

II

ciones Americanas. — El “jus-sanguinis” y los incisos 2º y 3º del Art. 35 de la Constitución: diversos casos de opción que pueden presentarse. — Lo que debe entenderse por la *ciudadanía natural* a que se refiere la Constitución. — Sentido del Art. 37. — Legislación comparada..... pag. 79

CAPITULO IV

De la naturalización de extranjeros. — Situación privilegiada de éstos en nuestro régimen constitucional. — Causas que determinan la naturalización en los EE. UU. de América. — El Art. 36 de la Constitución Nacional. — Legislación comparada. — Necesidad de la reforma de la Constitución en lo referente a los derechos de los naturalizados. — Requisitos que deben contemplarse en la Ley de Ciudadanía y Naturalización: jurisdicción a que debe confiarse. — La naturalización automática y el “heimathlosat”. — De la suspensión y pérdida de la ciudadanía..... pag. 147

CAPITULO V

Proyecto de una Ley de Ciudadanía y Naturalización: De los ciudadanos naturales. — De los ciudadanos por naturalización. — Procedimiento para la naturalización. — Derechos y deberes de los ciudadanos. — De la suspensión y pérdida de la ciudadanía. — Disposiciones generales..... pag. 175



UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL

00039894917